



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

POSGRADO DE GEOGRAFÍA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
ORIENTACIÓN: SOCIEDAD Y TERRITORIO

PRODUCCIÓN DEL ESPACIO A PARTIR DEL CONFLICTO POLÍTICO
POR EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO “LA PAROTA”, GUERRERO

TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRO EN GEOGRAFÍA

PRESENTA
EVA CITLALI JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

TUTOR
DR. GENARO JAVIER DELGADO CAMPOS
Instituto de Geografía - UNAM

MÉXICO, D.F. ENERO DE 2014



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Índice

| | |
|---|-----------|
| Índice | 2 |
| Introducción | 4 |
| I Espacio geográfico, sacrificio por el progreso y proyectos hidroeléctrico | 7 |
| Espacio geográfico..... | 7 |
| La producción del Espacio y poder..... | 11 |
| Producción del espacio por Megaproyectos | 17 |
| Sacrificio por el progreso..... | 19 |
| Sacrificio y producción del espacio por presas hidroeléctricas | 25 |
| Conflictos por presas hidroeléctricas | 36 |
| II Experiencias de represas en el estado de Guerrero | 40 |
| Represas hidroeléctricas | 40 |
| Presa hidroeléctrica Carlos Ramírez Ulloa | 43 |
| Estudio socioeconómico y proyecto de vivienda..... | 47 |
| Marginación en los municipios afectados por la PH El Caracol | 55 |
| Presa hidroeléctrica San Juan Tetelcingo..... | 59 |
| Antecedentes del conflicto..... | 62 |
| Actores políticos y negociación | 64 |
| Manifestaciones de inconformidad | 67 |
| Acciones jurídicas | 68 |
| El éxito del movimiento de resistencia..... | 69 |
| III Conflictividad política por la construcción de la Presa “La Parota” | 71 |
| Sociedad política..... | 73 |
| Sociedad civil | 81 |
| Evolución del conflicto 2003 a 2007 | 89 |
| Conflictividad 2004 | 95 |
| Conflictividad 2005..... | 100 |
| Las asambleas en los Bienes Comunales de Cacahuatepec (BBC)..... | 103 |
| Asambleas Dos Arroyos | 104 |
| Asambleas Los Huajes..... | 106 |
| Asambleas La Palma..... | 106 |
| Conflictividad 2006 | 108 |
| Conflictividad 2007 | 113 |

| | |
|--|------------|
| Territorialización del conflicto | 118 |
| I Región..... | 121 |
| II Región..... | 123 |
| III Región..... | 124 |
| IV Conclusiones..... | 126 |
| Referencias | 129 |
| Consultas en Red..... | 133 |
| Hemerográficas..... | 136 |
| Videos | 137 |
| Anexo I Tablas y gráficos..... | 138 |
| Anexo I a..... | 139 |
| Anexo I b..... | 141 |
| Anexo I c..... | 142 |
| Anexo II Documento | 145 |
| Anexo II a..... | 146 |
| Anexo III Cartográfico..... | 148 |
| Anexo IV Cronología | 153 |
| 2002..... | 154 |
| 2003..... | 154 |
| 2004..... | 155 |
| 2005..... | 157 |
| 2006..... | 162 |
| 2007..... | 167 |
| 2008..... | 172 |
| 2009..... | 173 |
| 2010..... | 174 |
| 2011..... | 174 |
| 2012..... | 175 |
| 2013..... | 175 |

Introducción

La presente investigación aborda desde una perspectiva espacial los conflictos políticos generados por la propuesta de construcción de la Presa Hidroeléctrica La Parota (PHLP) en el estado de Guerrero. La decisión de establecer la PHLP es una cuestión política emanada de un grupo de poder dentro de la estructura social de nuestro país, por tanto, el recurso como bien nacional no es de la sociedad, en última instancia es de los grupos de poder, por lo que no se busca reducir el impacto sobre las comunidades sino concretar el proyecto. No obstante, en los últimos años la sociedad ha replanteado la fuerza que tiene como ciudadanía y las redes de solidaridad se estrechan y fortalecen.

El interés del tema surge al identificar que la producción del espacio por la construcción de la PHLP está en función de los flujos de poder y de resistencia en la zona; sin duda, área de investigación desde la Geografía política. Si bien, desde otras disciplinas se ha trabajado los conflictos por construcción de presas, la Geografía ofrece un análisis complementario al incorporar el espacio.

Las hipótesis planteadas son que

1. Los conflictos políticos que se han generado por la construcción de la PHLP se deben, entre otros motivos, a las viejas prácticas de intermediación política del Estado –que se condensan en la falta de diálogo con las comunidades afectadas-, lo que reduce la posibilidad de solución pacífica de los conflictos.
2. Dicha conflictividad sociopolítica se manifiesta en mayor grado en las comunidades que presentan un mayor nivel de afectación, antecedentes de proyectos por grandes obras y cohesión social más sólida.
3. A partir de lo anterior suponemos una reducción del poder estatal para la implementación de proyectos hidroeléctricos en función de la conformación de redes de resistencia nacional e internacional.
4. Dichas redes de resistencia se enmarcan en un escalamiento de conflictos regionales a nivel nacional e internacional debido a la situación de desigualdad socioeconómica mundial.
5. Es probable que el estado recurra a la imposición del proyecto debido a que está más comprometido como gestor del capital en la promoción y construcción de este tipo de obras, que en la solución de problemas de las comunidades en donde se ubican los proyectos.

Los objetivos particulares de la investigación son identificar el debate referente a la construcción de represas, analizar patrones de comportamiento de la Comisión Federal

de Electricidad (CFE) en los proceso de negociación en las hidroeléctricas del Estado de Guerrero, verificar si los compromisos contraídos por el Estado en otros proyectos hidroeléctricos se cumplieron para establecer si el trabajo se encamino a reducir el impacto en las comunidades afectadas, inferir el papel de los grupos de poder local y regional durante el proceso de negociación para determinar su participación en la configuración espacial y analizar el papel de los actores políticos durante el proceso de gestión de la PHLP.

Respecto a las técnicas de investigación empleadas van desde la recopilación de información documental hasta la de campo. En el primer caso se recurrió a la búsqueda, revisión y selección de fuentes de información bibliográfica, hemerográfica, cartográfica, de audio y video, por lo que se consultó archivos históricos del agua para identificar más datos de los proyectos investigados. Para la recopilación en campo se empleó la entrevista y la observación directa, por lo que entre abril de 2003 y noviembre de 2006 se realizaron diferentes visitas a las comunidades afectadas por el proyecto “La Parota”. Destacan el trabajo continuo del 8 al 16 de junio de 2003 en la comunidad del Chamizal y Agua Zarca donde se entrevistó a los líderes formales e informales de la comunidad; la asistencia al Primer Encuentro Nacional de Afectados por las presas y en Defensa de los Ríos realizado del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2004, en la comunidad de Aguas Calientes del municipio de Acapulco; y la visita a diversas comunidades el fin de semana de la jornada electoral de octubre de 2005. Otro periodo de trabajo en comunidades se dió en septiembre de 2006 para la recopilación de información sobre el proyecto cancelado de San Juan Tetelcingo y el proyecto terminado de la presa El Caracol.

Durante la investigación se entrevistó a especialistas que han trabajado cuestiones de grandes proyectos hidroeléctricos y han apoyado a las comunidades afectadas como Octavio Kimek Alcaraz, Eustaquio Celestino Solís y Sergio Moreno, quien produjo el video “No a la presa de San Juan Tetelcingo”. Destaca también la asistencia a foros sobre el agua, en especial el realizado en la Cámara de diputados el día 16 de mayo de 2007 donde se analizó el caso de “La Parota”.

Para organizar la información, el trabajo se estructuró en cuatro capítulos, en el primero, *I Marco teórico: Espacio geográfico, desarrollo nacional y proyectos hidroeléctricos* se plantea la discusión teórica, en donde se aborda el concepto de espacio, seleccionando una definición para el desarrollo de la investigación. Una sección se dedica a las formas de obtención del poder y la asociación entre las empresas y el estado para concretar lo que Harvey sugiere como acumulación por desposesión. A final del capítulo

se retoma el panorama mundial sobre los efectos de las grandes represas en el ambiente y la sociedad.

En el segundo capítulo II *Presas como proyectos y experiencias pasadas en el estado de Guerrero*, se analizan dos estudios de caso: uno que concluye con la construcción de la presa El Caracol; y el segundo proyecto, San Juan Tetelcingo, suspendido por la organización de las comunidades afectadas que trascendió el ámbito estatal. En el capítulo III *Conflictividad política por la construcción de la Presa "La Parota"* se realiza un análisis del conflicto enfatizando su configuración territorial del periodo que va del año 2003 al 13 de agosto de 2007. Aunque el conflicto aún no concluye la mayor confrontación culmina en el 2007 cuando los miembros Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) entregaron en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) N° 41 un acuerdo de la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatpec en que expresaron su rechazo al proyecto y por tanto, hasta el momento queda suspendido. El último capítulo es el de las IV *Conclusiones*.

I Espacio geográfico, sacrificio por el progreso y proyectos hidroeléctricos

“Estos son tiempos anticivilizatorios en los cuales, en vez de buscar una domesticación de la violencia, equilibrando intereses antagónicos, impera el llamado a la violencia como ideología del neo social darwinismo elevada a religión: la fe neoliberal” Kurnitzky (2000:20)

En este primer capítulo definimos los conceptos y el marco teórico que se utiliza en la investigación. Comenzamos con un esbozo de la discusión que se tiene respecto al concepto del espacio fijando nuestra postura, se continúa con un análisis de la noción de “sacrificio” en el discurso oficial para justificar las obras hidroeléctricas, para concluir con el debate respecto a la construcción de presas en donde emergen los verdaderos beneficiados de este tipo de obras, es decir, los grupos con poder económico en la región y la nación.

Espacio geográfico

El concepto de espacio suele tener varias connotaciones, sobre todo cuando se le añade algún adjetivo, se utiliza como sinónimo de territorio cuando preside a la nación o bien, al universo cuando se le agrega sideral (Santos, 1990).

Lefebvre (1976) comenta que cuando se aborda el análisis del espacio generalmente se incurre en una dispersión y en consideraciones diversas que van del espacio como contenedor, en el que los objetos se encuentran; hasta un espacio abstracto, “limpio” de objetos, geométrico.

“Existen diferentes métodos, diferentes enfoques por lo que se refiere al espacio, y esto a diferentes niveles, de reflexión, de recorte de la realidad objetiva” (Lefebvre, 1976:23).

Lefebvre (1976) propuso una tipificación de las diversas concepciones del espacio utilizadas en las disciplinas. Reconoce una acepción del espacio como forma pura, transparente e inteligible, y por tanto, abstracto, es lugar de los números y de las proporciones, es el espacio de los filósofos, los epistemólogos y matemáticos. Otra visión parte del espacio social como producto del trabajo y de la división del trabajo. Una tercera acepción es la de espacio como un medio, un instrumento político a manipularse; la

representación del espacio estaría siempre al servicio de una estrategia, de algún grupo social dominante.

Para Smith (2006) el espacio se explica siempre con relación a la naturaleza, pero esa relación se entiende de manera diferente. Por un lado, destaca la concepción absoluta de Newton, que abstrae el espacio de la materia. Por otro lado, reconoce que en el mundo capitalista avanzado, se concibe al espacio como un vacío, como un receptáculo universal en el que los objetos existen y los eventos ocurren. Y por último la concepción relativa, en la que el espacio no se separa de la materia. Smith (2006) añade que el concepto de espacio

“... tiende a darse por sentado y su significado se asume como no problemático, aun cuando sea un concepto impreciso, de múltiples significados, a veces contradictorios” (op cit, p. 59).

En nuestra disciplina, al espacio suele agregarse el adjetivo “geográfico” para enfatizarlo como objeto de estudio, sin embargo, el marco teórico seleccionado da una connotación diferente a su significado. Santos (1996) asevera que, en general, la Geografía ha minimizado el papel del espacio con relación a la sociedad, dado que la definición dominante lo visualiza como “teatro de las acciones humanas”.

“Se puede decir que la Geografía se interesó más por la forma de las cosas que por su formación. Su dominio no era el de las dinámicas sociales que crean y transforman las formas, sino el de las cosas ya cristalizadas” (Santos, 1996: 17).

A ese respecto Smith (2006) señala que, mientras la mayoría de las ciencias sociales pudieron abstraerse del espacio físico, dado que sus objetos de estudio se localizaron en el espacio social, la Geografía no lo hizo y ha tenido que enfrentarse a la aparente contradicción entre el espacio físico y social.

“... cuanto más intentan los geógrafos identificar en el espacio natural absoluto los patrones y proceso socialmente relativos y socialmente determinados de la localización económica, más problemática se vuelve la relación entre el espacio natural y social, y más ambiguo llega a ser el significado del espacio físico.” (Smith, 2006: 71-72).

Ante el problema de la separación conceptual del espacio en social y físico, las distintas corrientes dan una explicación distinta. Para los cuantitativos, acostumbrados en trabajar dualidades, objeto –sujeto, hechos –valor, se añade el de la naturaleza – sociedad.

“Para ellos no existía una necesaria contradicción entre la existencia del espacio en términos absolutos y su utilización social de acuerdo con criterios económicos: por un lado, el espacio existe; por otro, la sociedad lo utiliza...” (Smith, 2006: 72).

Desde una posición crítica los geógrafos humanistas retomaron el espacio social de Durkheim.

“[la visión humanista] rechazó la exclusividad y las pretensiones de objetividad de la ciencia positivista y propuso la importancia de los modos subjetivos de conocer... el espacio social, no el espacio físico ni el espacio objetivo, se convirtió en el objeto de investigación” (Smith, 2006: 72).

La segunda vertiente crítica fue la política radical producto de diversas tradiciones teóricas de inspiración marxista que parte del espacio como una totalidad;

“El interés aquí no era negar la objetividad del espacio geográfico, sino explicarlo simultáneamente como objeto y resultado de las fuerzas sociales... No es únicamente que el espacio y la sociedad interactúen; una lógica histórica específica... dirige la dialéctica histórica del espacio y la sociedad” (Smith, 2006: 73).

En otras palabras, en la visión cuantitativa el espacio y la sociedad interactúan en un espacio absoluto, mientras que para los críticos, sobre todo radicales, los patrones espaciales reflejan la estructura social, por lo que se habla entonces de un espacio relativo.

Milton Santos, exponente de la vertiente crítica, afirma que

“la naturaleza socializada debe identificarse con aquello que los geógrafos denominan el espacio o espacio geográfico” (Santos, 1990:135).

En otro texto, ampliando su definición del espacio, escribe:

“... conjunto inseparable de sistemas de objetos y sistemas de acciones” (Santos, 2000:86).

Para hacernos más clara su idea da un ejemplo:

“Durante la guerra fría los laboratorios del Pentágono llegaron a pensar en la producción de un invento, la bomba de neutrones, capaz de aniquilar la vida humana en un área determinada, pero preservando todas las construcciones. El presidente Kennedy finalmente renunció a llevar a cabo ese proyecto de otro modo aquello que en la víspera sería todavía el espacio, después de la temida explosión sería sólo paisaje” (Santos, 2000: 89).

Santos señala que la sociedad anima las formas espaciales atribuyéndoles un contenido. Reconoce una relación dialéctica, entre sociedad y el espacio y viceversa.

“El simple hecho de existir como formas, es decir, como paisaje, no basta... La forma ya utilizada es algo diferente, pues su contenido es social... Se vuelve espacio porque es forma – contenido” (Santos, 2000:91).

Por otra parte, para Castells (2001), el espacio es la expresión de la sociedad. El espacio no es una fotocopia de la sociedad: es la sociedad misma, es tiempo cristalizado, es el soporte material de las prácticas sociales que comparten el tiempo.

Si bien, Smith critica la postura cuantitativa y la dialéctica de la visión crítica, ya que en ambas posiciones hay una concepción dualista implícita del espacio y la sociedad y es difícil concluir demostrando su unidad, coincide en manejar la concepción social del espacio y su producción. Resalta que no sólo es la producción física, la producción del espacio implica también la producción del significado. Es decir, entiende las relaciones espaciales como el valor de uso en función de otros objetos.

En ese sentido, Smith define al espacio geográfico como:

“...la totalidad de las relaciones espaciales organizadas en mayor o menor grado en patrones identificables, los cuales por sí mismos son expresión de la estructura y el desarrollo del modo de producción... es más que la simple suma de relaciones separadas que comprenden sus partes” (2006:82p).

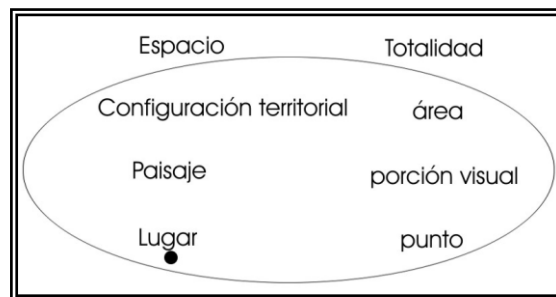
Otro punto inherente al espacio es la cuestión de la escala, para los geógrafos críticos el espacio es una totalidad. El manejo de escalas está presente en otras disciplinas, en este sentido Braudel concibe al capitalismo como el estrato superior de una estructura de tres niveles; el estrato inferior, amplio y autosuficiente, denominado de la vida material; el nivel intermedio referido a la economía del mercado, que se relaciona horizontalmente; y el nivel superior que denomina antimerca, donde merodean los grandes capitalistas y rige la ley de la selva, por tanto, el nivel inferior y el superior son zonas de sombra.

“El estrato inferior de la vida material es difícil de contemplar por la carencia de documentos históricos adecuados. El estrato superior por el contrario, es difícil de observar dada la invisibilidad real o la complejidad de las actividades que lo constituyen” (Braudel, 1982, en Arrigh, 1999b:39).

Santos (2000) al explicar su concepto de espacio implícitamente menciona a la configuración territorial, el paisaje y el lugar como escalas inferiores a la totalidad. En este

sentido, concibe a la configuración territorial como un área, el paisaje como una porción visual y el lugar un punto (Esquema 1) Para analizar la totalidad propone subdividirla de forma tal que pueda ser reconstituida cuando se junten las partes, dicho procedimiento va de la simplificación y abstracción a la reducción progresiva. En ese sentido, sugiere que a la escala global corresponde el modo de producción mientras que a la escala local es mejor utilizar la categoría de formación social.

Esquema 1 La escala para Santos



Elaboración propia con base en Santos (2000).

Dado que el debate referente al espacio y la escala es muy amplio, en la presente investigación, el concepto de espacio que se utiliza está enmarcado en la corriente crítica. De esta forma, el espacio es concebido como social, producto de las relaciones vigentes de producción, es decir, capitalistas. Por tanto, es importante explicar cómo se produce actualmente el espacio.

La producción del Espacio y poder

En su explicación del espacio la Geografía crítica retoma el análisis económico de Marx basado en la producción.

“Esto es, el trabajo del hombre para transformar, según leyes históricamente determinadas, el espacio con el cual el grupo se enfrenta” (Santos, 1996:18).

El circuito productivo trae consigo, en primera instancia, una transformación material que repercutirá en las relaciones sociales. Dichas transformaciones producen un nuevo espacio con diferente materialidad, es decir, producen una “segunda naturaleza” que modifica las anteriores relaciones sociales. Pero el proceso no termina ahí, más tarde, se producirá un nuevo espacio desplazando al existente, y como vestigio tendremos

paisajes sobrepuestos de periodos anteriores. La materialidad heredada adquiere ahí una nueva funcionalidad.

A lo largo de la historia, bajo los distintos modos de producción¹, las sociedades se organizan y producen espacios. Si bien, en las comunidades primitivas la producción del espacio era limitada por los medios de producción existentes, en nuestros días, gracias a los avances tecnológicos, en especial de las comunicaciones y transportes, el lugar de la producción se mundializa y, con ello, la producción de los espacios se intensifica.

Pero el empequeñecimiento del mundo, no es únicamente un efecto del progreso, sino una necesidad del capitalismo (Smith, 2006). Dado que la dinámica actual de acumulación de capital se basa en la reducción del tiempo y los costos de producción, ello conduce al intento constante por vencer las barreras espaciales y la aniquilación del espacio por el tiempo. Sin embargo, la reducción de las barreras espaciales no significa que la importancia del espacio disminuya.

De acuerdo a Harvey (2003), hace tiempo que el capitalismo habría dejado de funcionar como sistema político y económico, sin la expansión geográfica del capital, la reorganización espacial y el desarrollo de espacios desiguales.

Con la mundialización de la producción se incorporaron espacios anteriormente ajenos al dominio directo del capital, que ofrecen ventajas relativas de localización, y cuyo resultado es la producción de espacios desiguales, mientras que unos ganan influencia otros la pierden, desencadenando una férrea competencia espacial por captar capital y posesionarse dentro de la jerarquía de los espacios favorecidos. Se produce entonces un proceso dialéctico, al reducirse las barreras espaciales es mayor el incentivo para la diferenciación de los lugares a fin de hacerse atractivos para el capital (Harvey, 1990).

En este sentido, Lefebvre (1976) propuso el concepto de “*producción del espacio*” para explicar cómo el capitalismo ha sobrevivido. Sin embargo, pese a que existe una relación entre la producción de bienes y la del espacio, esta última producción no es similar a la de cualquier mercancía, se da a través de grupos que se apropian del espacio para administrarlo y para explotarlo. En términos generales, los grupos de poder, que están ligados a la propiedad de los medios de producción, son quienes marcan la pauta de la producción del espacio para controlar a la clase obrera conservando las relaciones

¹ Santos (1996, p.27) cita a Córdova (1974) para definir el modo de producción como “una forma particular de organización del proceso de producción destinada a actuar sobre la naturaleza y obtener los elementos necesarios a la satisfacción de las necesidades de la sociedad”.

de producción capitalista (Lefebvre, 1976), pero también, para reducir costos de producción ya sea por medio de la desruralización², por materias primas o bien transfiriendo los costos a otros. Esos "otros" son el Estado y la sociedad (Wallerstein, 1997).

Wallerstein (1997) plantea que existen dos maneras distintas para que los Estados paguen los costos de la producción; asumiendo el costo social cuando las empresas no se responsabilizan y a través de subvenciones de algún tipo, así los gobiernos ponen infraestructuras a disposición principalmente del capital sin incluir el costo de restaurar el medio ambiente para que éste sea preservado. Al respecto Harvey (1990) afirma que los poderes que controlan los diversos espacios mundiales tratan de modificarlos a fin de que resulten más atractivos para el capital, por ejemplo, a través de estrategias de control local sobre la mano de obra y suministro de infraestructura para reducir el costo de producción del gran capital.

En ese sentido Sánchez (1981) afirma que cada modo de producción requiere de una articulación espacial que le permita mantenerse;

“de lo que se trata es de seguir el circuito del excedente a todos los niveles... El poder organiza la sociedad toda, y dentro de ella, también al espacio, para garantizar el mantenimiento y la reproducción de ese poder y para, de ser posible, obtener una reproducción ampliada” Sánchez (1981:304-305).

En resumen, cada modo de producción se articula sobre relaciones de poder específicas y, al mismo tiempo, a cada modo de producción le corresponde una forma de dominar el espacio, pero entonces, si el espacio es resultado de las relaciones de poder, al analizar cómo se produce es indispensable identificar los distintos niveles de poder, además del papel y forma que adoptan, puesto que a través de su dominio se busca obtener, mantener, ampliar y apropiarse del excedente económico.

El concepto de poder que aquí se utiliza es el de Marx, quien define al poder como la capacidad de imponerse o la capacidad de dominio, lo que lleva a suponer la relación poder - obediencia. Esta obediencia se consigue mediante la aceptación voluntaria o forzosa de las decisiones del poder al no disponer de fuerza suficiente para imponer las decisiones propias (Sánchez, 1981). La aceptación voluntaria se logra a través de la conformación social, a partir de lineamientos éticos y morales comúnmente

² Wallerstein (1997) comenta que para los residentes en áreas rurales y que se trasladan por primera vez a áreas urbanas para buscar un trabajo asalariado, el salario urbano, pese a ser extremadamente bajo, suele ser económicamente mejor opción que la permanencia en las áreas rurales, este proceso lo denomina desruralización.

aceptados que forman parte de la ideología dominante. Mientras que en la aceptación forzosa la sumisión se logra por la fuerza, ya sea violencia física, psíquica o social, lo que implica una coacción. Sin embargo, mantener el poder por la fuerza no es la mejor opción, puesto que lejos de lograr una obediencia absoluta puede provocar una inestabilidad social. Es así como Sánchez (1992) distingue tres tipos de poder: a) el conferido a la autoridad que, por lo general, obtiene su legitimidad a partir del carisma, de un marco legal o la tradición; b) el obtenido por el temor y c) a partir de la coacción.

Para los marxistas, el poder es conferido por la propiedad privada de los medios de producción. Sin embargo, en casos particulares el poder económico puede surgir como consecuencia del poder ya existente por otros motivos, como lo señala Weber (2001), por lo que para evitar el determinismo económico define al poder como:

“...la posibilidad de que una persona, o varias, realicen su propia voluntad en una acción en común, aun contra la oposición de otros participantes en la acción” (Weber, 2000: 45).

Weber distingue tres mecanismos de obediencia; por autoridad legítima; por temor y; por dominio carismático.

Aunque los conceptos de Marx y Weber parecen contrapuestos, mantienen una estrecha relación: un grupo para sostener el poder económico, en su afán de acumulación incesante de capital, se vincula solidariamente con los diversos poderes locales. Estamos hablando así, de una trama de relaciones de poder local y global, que no está libre de confrontaciones.

Por su parte, Arrighi distingue dos tipos fundamentales de poderes, que nos permiten comprender esa relación dialéctica (Ver Esquema 2). La lógica de dominio territorial que identifica al poder con la extensión de su territorio y con la densidad de población existente y concibe la riqueza capital como un medio o un subproducto. Por su parte, la lógica de dominio capitalista identifica al poder con el grado de control sobre recursos para lograr la acumulación del capital, por tanto, la adquisición territorial es un medio.

“La diferencia entre estas dos lógicas puede expresarse mediante la metáfora que define a los Estados como contenedores de poder. La lógica de dominio territorialista tiende a incrementar su poder a través de la expansión del tamaño de su contenedor. La lógica de dominio capitalista, por el contrario, tiende a aumentar su poder acumulando riqueza en el interior de un pequeño contenedor y a incrementar las dimensiones del mismo tan sólo si ello se halla justificado por las exigencias de la acumulación de capital” (Arrighi, 1999b: 49).

Esquema 2 Tipos de poder



Elaboración propia con base en Arrighi (1999).

Para Arrighi el poder territorial se ejerce desde la política por el Estado, que se supone orientado hacia el beneficio de la colectividad. Dicho poder está limitado territorialmente por las fronteras del Estado – nación y opera en función de un proceso político histórico particular. Por el contrario, el poder capitalista busca el beneficio individual, opera sin restricciones fronterizas en constante movimiento que da lugar a fuerzas múltiples que se entrecruzan. Estos poderes, el del Estado y el del capital, no se contraponen, sino que históricamente muestran una relación recíproca. El poder capitalista requiere del apoyo del poder Estatal para que los lugares donde ejerce su dominio sean propicios para la acumulación del capital. La ayuda va desde la construcción de infraestructura, hasta leyes que favorecen la reducción en los costos de producción, sobre todo en mano de obra. Por su parte, el poder Estatal requiere inversiones del capital para situarse en una posición dentro de la jerarquía espacial mundial.

Al respecto, Harvey considera que, desde hace mucho tiempo, el Estado ha sido y continúa siendo el agente fundamental de la dinámica capitalista global, dado que

“... el poder político, el gobierno territorial y la Administración se establecen en una gran variedad de escalas geográficas y constituyen un conjunto jerárquicamente ordenado de entornos políticamente estructurados en los que tienen lugar los procesos moleculares de acumulación de capital” (Harvey, 2003:83).

Harvey (2003) retoma las lógicas de poder propuestas por Arrighi para explicar lo que denomina “La acumulación por desposesión” como la solución a la crisis por sobreacumulación a través de diferentes formas:

- I. Liberar un conjunto de activos a bajo costo. En este caso, el capital se apodera de ellos y los hace rentables;
- II. Aportar al sistema materias primas baratas para reducir costos de producción y así incrementar los beneficios;
- III. Devaluar de los activos existentes de capital y fuerza de trabajo para comprarlos a precio de saldo, pero para que esto ocurra, debe darse una devaluación previa producto de una crisis.

En este sentido, Harvey señala que las crisis se pueden organizar, gestionar y controlar para racionalizar el sistema, mediante los programas de austeridad administrados por el Estado. Las funciones estatales junto con las instituciones financieras internacionales consisten en organizar las devaluaciones de tal forma que permitan la acumulación por desposesión sin provocar un colapso general. Harvey asegura que el Estado, con su monopolio de la violencia y su definición de la legalidad, desempeña un papel decisivo en el respaldo y promoción de los procesos de la acumulación primitiva.

En la misma línea de Harvey, Hinkelammert (1991) afirma que se necesita un equilibrio entre mercado y planeación y por tanto, el Estado juega un papel fundamental. Los procesos de acumulación primitiva a los que hace referencia Harvey son los propuestos por Marx:

- Mercantilización, privatización de la tierra y expulsión por la fuerza de las poblaciones campesinas
- Conversión de varios tipos de derechos de propiedad en propiedad privada
- Supresión del acceso a bienes comunales
- Mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas de producción y consumo
- Apropiación de bienes por procesos coloniales, neocoloniales e imperiales
- Monetización del intercambio y los impuestos
- Trata de esclavos y
- Usura, deuda nacional y crédito

Gran parte de estos procesos aún están presentes con algunos cambios al mismo tiempo, pero también se crean nuevos mecanismos de acumulación por desposesión, como los derechos de propiedad intelectual, la biopiratería, la mercantilización de la

naturaleza y las diferentes expresiones culturales; la privatización y empresarización de instituciones públicas.

“Como entonces, se vuelve a utilizar el poder del Estado para impulsar estos procesos contra la voluntad popular...La cuestión al dominio privado de los derechos de propiedad comunales obtenidos tras largos años de encarnizada lucha de clases (el derecho a una pensión pública, al bienestar, a la sanidad pública nacional) ha sido una de las fechorías más sobresalientes de los planes de desposesión emprendidos en nombre de la ortodoxia neoliberal” (Harvey, 2003:118-119).

Cabe destacar, que pese a la evidente situación de despojo, inherente a la acumulación de capital, la historia nos da cuenta de grupos en oposición, que confrontan al grupo de poder de un espacio concreto. Como el poder territorial requiere legitimación, antes de confrontar buscará negociar y hasta aceptar determinadas concesiones en función de la fuerza y organización que tenga el grupo que confronta, sobre todo, si reclaman derechos registrados en el marco jurídico político.

Así, al identificar clases, grupos y partidos, que son manifestaciones del reparto de poder dentro de una comunidad, podremos deducir la producción del espacio concreto en la lógica de producción del espacio por la acumulación del capital.

Producción del espacio por Megaproyectos

A partir de la aplicación de medidas neoliberales en los años ochenta, como estrategia para frenar la crisis económica, el sistema se fortalece con la acumulación por desposesión mediante la explotación de los recursos que quedan. En este sentido, los megaproyectos³ impulsados desde el Estado son una estrategia para concretar la venta de los recursos y transferir de esta forma la riqueza desde la periferia a los centros económicos.

Partiendo de una revisión somera sobre de los megaproyectos en México, se identifica que en los últimos años se intensificó su impulso. Desde carreteras, puertos u obras hídricas, la lógica del capital es similar: una forma de inversión que absorbe el exceso de capital de los centros, pero además, en numerosos casos los megaproyectos buscan instalarse en regiones rurales en donde la economía capitalista no domina, por tanto, la implementación de las obras genera oportunidades rentables para las empresas

³ Entendidos como grandes obras que movilizan contingentes humanos por la demanda de mano de obra para la construcción por los desplazamientos poblacionales (Ibarra, 2012)

al acceder a fuerza de trabajo, materias primas y tierra más baratos, o bien, a expandir su mercado. De esta forma hay una reorganización del espacio con el fin de despojar los bienes colectivos y recursos naturales, es decir, la solución de la expansión geográfica (Harvey, 2003).

En lo local la producción del espacio se da por el desplazamiento de comunidades; la pérdida de su forma de vida; y fractura del tejido social, puesto que se generará una nueva articulación para concretar y hacer funcionar la obra. Las comunidades no capitalistas se tienen que insertarse al quedar desposeídas lo que genera un deterioro de la calidad de vida puesto que las comunidades al quitárseles la opción de vivir al margen del sistema y no encontrar cabida inicialmente en la nueva conformación espacial, se convierten en fuerza de trabajo disponible.

El Estado desempeña un papel decisivo en el respaldo y promoción de estos procesos puesto que es uno de los impulsores de los Megaproyectos: financiando vía deuda e incluso comprando o aplicando medidas coercitivas a los opositores. Sin embargo, los afectados cada vez más consideran que los grandes proyectos generan desigualdad social y exclusión socio territorial, ya que sólo benefician a las grandes empresas nacionales y transnacionales, mientras que la población local tiene que buscar nuevas formas de vida porque, con el cambio de la materialidad y las nuevas relaciones sociales, muchas de las actividades desaparecen o se transforman. En algunos casos se gesta una resistencia que organizada puede ser capaz de detener o retrasar las grandes obras como sucedió con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) o la lucha de las comunidades contra la hidroeléctrica de San Juan Tetelcingo, de la que hablaremos en el segundo capítulo.

Es así que en la implementación de las obras se genera una confrontación entre los que detentan el poder y pretenden transformar el espacio en función de su interés; y los opositores al poder, que resisten, se oponen o bien negocian elementos concretos de la producción de ese espacio. En esta relación de tensión permanente el poder pretende su permanencia a través del espacio, de su reconstrucción constante (Ibarra, 2012).

Pero incluso aun sin concretarse los megaproyectos, se produce espacio con la resistencia, desde el hecho de relacionarse con otras luchas para visibilizar el movimiento o aplicando algunas estrategias aprendidas de otros lugares en donde la oposición es un contrapeso a las decisiones de los capitales asociados al poder territorial, lo que lleva a reforzar el tejido social a partir de lazos de solidaridad.

Las inconformidades, los desacuerdos o las desconfianzas de los afectados están siempre presentes, aunque no de manera manifiesta, pero pueden mostrarse ante la intencionalidad de una nueva producción espacial a partir de la existente (Ibarra, 2012).

Pero los grupos de poder tratan de no dar concesiones, por lo que buscan hacer pasar su propio interés como interés común de todos los miembros de la sociedad (Sánchez, 1981). En el caso de las grandes obras de infraestructura, eso se hace a través de la idea de sacrificio por el bienestar colectivo.

Sacrificio por el progreso

Al indagar sobre los procesos de implementación de presas hidroeléctricas en México, identificamos una fase durante la negociación que denominamos *sacrificio por el progreso*, como parte de la estrategia discursiva del Estado para justificar las grandes obras por el bienestar de la nación.

Las investigaciones centradas en el sacrificio se han realizado desde la Antropología limitadas sobre todo a las comunidades arcaicas y a cuestiones de sacralización como el trabajo que realiza Barabas, del cual hablaremos más adelante. Por su parte, sociólogos y teólogos de la corriente de la liberación se han interesado por el sacrificio en la modernidad, al que hacemos referencia, sin embargo no se han enfocado en la producción del espacio. Assmann (1997), Girard (2002) Hinkelammert (1991) Kurnitzky (2001) y Morande (1987), reconocen la presencia del sacrificio en la actualidad y coinciden en la necesidad de ampliar la discusión del tema.

Para el sociólogo Kurnitzky (2001) el sacrificio ha sido necesario como fuerza de cohesión que une a la sociedad, a cambio del sacrificio el culto unifica y simultáneamente provoca la protesta y resistencia de los miembros de una comunidad o sociedad contra las restricciones que impone. El sacrificio es visto entonces, como una forma de limitación necesaria para la convivencia.

Después de narrar algunos ejemplos del sacrificio a lo largo de la historia, Kurnitzky (2001) llega a la conclusión que antiguamente el sacrificio era una respuesta al miedo generado por la incertidumbre producida por el desconocimiento de la naturaleza. Con el tiempo, el sacrificio se simboliza, es decir es sustituido pero no desaparece. La colectividad participa del sacrificio, sin embargo, Kurnitzky señala que no siempre es aceptado, incluso se cuestiona. Para justificarlo se recurre a convertir a la víctima en monstruo y a estilizar el sacrificio, reemplazarlo posteriormente por “hazañas civilizatorias”. Así nacen los mitos

“... el destino de todo monstruo: fue muerto por un héroe de la civilización (...) un trabajo civilizatorio (...) El mito (de Edipo) explica que cualquier proceso civilizatorio lleva consigo nuevas barbaridades y se cobran nuevos sacrificios” (op.cit, 32).

En la modernidad el mito del enemigo externo sirvió para constituir a la nación, otras veces fue el mito de una guerra histórica el que proporcionó los elementos de identidad nacional. Por tanto el mito es un relato que contiene los fundamentos de la cohesión social: las leyes del sacrificio y la penalización, por el destino o por los dioses, generada por la violación de dichos fundamentos. El castigo es el sacrificio sobre el cual la sociedad se constituye (Kurnitzky, 2001).

No obstante, el sacrificio nunca significa un comienzo sino una sucesión, por eso los mitos siempre describen conflictos parecidos pero bajo formas nuevas. Con ello indican que son la continuación de conflictos aún no solucionados. En la modernidad, según Kurnitzky, el sacrificio está presente durante el intercambio mercantil, ya que el dinero representa el sacrificio, quien tiene suficiente dinero está liberado del sacrificio ya que puede comprarlo todo.

Coincidimos con algunas aseveraciones de Kurnitzky (2001), referente a la mitificación del sacrificio, sin embargo, parte de su argumentación concibe una justificación a lo que él mismo cuestiona, es decir, la necesidad del sacrificio de unos por la cohesión de la sociedad.

Otra visión es la de Girard (2002) quien vincula al sacrificio con la violencia desde la antigüedad hasta nuestros días, expresado en linchamientos. Auxiliado con algunos fragmentos de los Evangelios expone sus ideas. Retoma el pasaje bíblico de la mujer adúltera⁴ para centrar su atención en la relación colectiva del linchamiento. Enfatiza que la acción de la primera persona es la racional, el resto actúa bajo el modelo de la otra persona y así se mimetiza.

“La primera piedra no es mera retórica, sino, todo lo contrario, algo decisivo, puesto que es la piedra más difícil de lanzar, ¿Por qué? Porque es la única que carece de modelo” (Girard, 2002: 82p).

⁴ El suceso se desenvuelve cuando una mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio y se quiere aplicar la ley de Moisés que establece para su caso apedrearla. A Jesús se consulta lo que hay que hacer. Jesús que continúa inclinado y escribiendo con el dedo en la tierra y dice "El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra" San Juan 8, 1-11.

Girard cuestiona la idea dominante que considera a las sociedades carentes de sistema judicial como las que propician el linchamiento como una forma arcaica de justicia. Por el contrario, el autor reconoce que el linchamiento es una catarsis, un desbloqueo en momentos de crisis dentro de la comunidad. De tal forma, la víctima es un chivo expiatorio que, como lo señala Kurnitzky, cohesiona a la comunidad. Puesto que después del linchamiento viene la calma, las relaciones de tensión se liberan y todo regresa a la cotidianidad.

Retomando a Girard, lo más difícil es asumir la responsabilidad de lanzar la primera piedra, puesto que racionalmente atenta contra los valores éticos y es el modelo que los demás seguirán miméticamente. Por tanto, para que los líderes movilicen la violencia y alguien decida lanzar la primera piedra es necesario convertir a la víctima en demonio. De esa forma el sacrificio tiene una razón y es éticamente permisible.

Por otro lado, desde la teología, Assmann (1997) vincula el sacrificio con el modelo económico capitalista. Parte de la premisa que denomina *La teoría sacrificial* que establece criterios de valoración de unas vidas humanas y flagrante desvalorización de otras. Señala que en los estudios que abordan el sacrificio existe un desfase, en términos meramente cuantitativos, entre la inmensa cantidad de literatura acerca de la práctica y del sentido de los sacrificios en los llamados pueblos primitivos y la escasa bibliografía sobre la vigencia del sacrificialismo en la economía o en la modernidad en general. Su proposición más ambiciosa sobre el sacrificio es que en nuestra economía existe una *“religión del mercado”*. Si en las religiones abunda la promesa de una vida mejor después de la muerte, en la religión del mercado las promesas se refieren a la mejor y más eficiente realización del bien común y de la felicidad humana. Ello implica sacrificios humanos que, a pesar de la crítica a la economía del mercado, sus efectos negativos son evidentes.

Una aportación de Assmann (1997) es mostrar cómo las relaciones mercantiles consiguen ocultar la metamorfosis de la víctima expiatoria, para justificar su sacrificio. Para ello, propone diferenciar entre los sacrificios *“inhumanos”* y los que responden a un *“proyecto histórico”*. Los primeros son resultado de una lógica económica en donde las metas no son establecidas ni asumidas conscientemente por la gente ni tienen como prioridad objetivos sociales. Por el contrario, cuando el sacrificio forma parte de un *“proyecto histórico”*, se convierten en opciones basadas en la libre participación y sus límites no son inflexibles.

Quien distingue claramente dos formas antagónicas de sacrificio es Morande (1987). La primera forma se presenta como acto voluntario y la segunda corresponde a un acto impuesto, que no es aceptado. El sacrificio asumido voluntariamente podría considerarse como la exaltación del valor mientras que el impuesto se vuelve una perversión (un anti-valor).

Morande reconoce la existencia del sacrificio en la modernidad pero, ahora, éste es menos visible...

“Mientras antaño el sacrificio era celebrado ritualmente, lo que quiere decir en forma pública y rodeado de todas las reglas que protegen lo sagrado, ahora la modernidad lo niega en el plano de la vida social afectiva, su presencia se vuelve entonces soterrada” (Morande, 1987: 83).

No obstante, Morande reconoce que existen intentos indirectos para hablar del sacrificio de determinados sectores de la población, que proporcionan parte de sus ingresos, su cultura o la caída de su nivel de subsistencia, para permitir el progreso de los restantes sectores. El concepto acuñado para referirse a esta forma de sacrificio es el costo social que implica una relación funcional entre medios y fines, entre acción y resultados.

“... el concepto de costo social no representa sino un eufemismo para referirse al sacrificio de determinados sectores de la población que deben ofrendar su vida, parte de sus ingresos, su cultura o la calidad de su nivel de subsistencia, para permitir el progreso de los restantes sectores...” (op cit, 84).

Por su parte Hinkelammert (1991) aborda al sacrificio desde la teología, remontándose a la mitología griega para dar un seguimiento de como el sacrificio se trasmite adecuándose hasta llegar al contexto económico actual. Enfatiza la desviación de las ideas originales del cristianismo para denunciar cómo estas interpretaciones fortalecen el sistema de dominio y la asimilación del sacrificio (que en palabras de Morande es antivalor)⁵.

Hinkelammert señala que la desviación es tal que la burguesía presenta a los sacrificios como anti-sacrificios, esto es, como sacrificios que aseguran que finalmente ya no habrá más sacrificios. A la vez, se trata de sacrificios que aseguran el progreso y se justifican mediante él. Entonces existen dos elementos indisolubles de la visión de sacrificio humano de la burguesía: que son anti sacrificios y que son necesarios.

⁵ “El sacrificio de Dios es el último sacrificio porque posee un valor infinito- no habrá otro....nunca debe haber otro sacrificio cada nuevo sacrificio sería una nueva crucifixión de Cristo”

[La burguesía] “realiza sacrificios que son necesarios para que finalmente ya no haya sacrificios. Se trata de sacrificios que en última instancia, se derivan del hecho de que ha habido despotía, y que todavía amenaza la despotía” (Hinkelammert, 1991: 18)

Para Hinkelammert la justificación discursiva del sacrificio se plantea como algo necesario ligado a la eficiencia y, al igual que Girard, sugiere que a las víctimas se les vincula con el mal. El autor sostiene que, a lo largo de la historia, los sacrificados han sido opositores, la otredad y se le ha llamado de diferentes maneras⁶ (ver Esquema 3) Pero cuando el discurso es desenmascarado el sacrificio pierde sentido y se convierte en un crimen⁷.

Esquema 3

| El enemigo en diferentes adjetivos | |
|---|------------|
| Basura | Cicerón |
| Peste | Edad Media |
| Bestia salvaje y perros rabiosos | Locke |
| Lacayos del capitalismo | Stalin |
| Parásito | Nazismo |
| Cáncer | EU |
| } | |
| Crucificadores de Cristo | |

Elaboración propia con base en Hinkelammert, Franz (1991).

Para Hinkelammert, la modernidad se fundamenta en el dilema de la eficiencia, en el cálculo racional de la acción. Lo que prevalece es el fundamento de no utilizar medios

⁶ Desde la religión son los crucificadores de Cristo.

⁷ Da un par de ejemplos, el primero se refiere a la Guerra de Vietnam “Cuando se perdió se perdió esta justificación también, lo que antes parecía sacrificios humanos necesarios para impedir la despotía y para ampliar la esfera de la utopía humana del mercado, se transformó en un sacrificio sin sentido y, por ende, un crimen” (Hinkelammert, 1991:39) El segundo ejemplo lo refiere a las obras de San Petesburgo impulsadas por el zar Pedro por las que murieron miles de rusos “Si hubiera sido eficiente, los sacrificios humanos del canal habrían sido una auténtica tragedia y no una farsa brutal” (Hinkelammert, 1991:47).

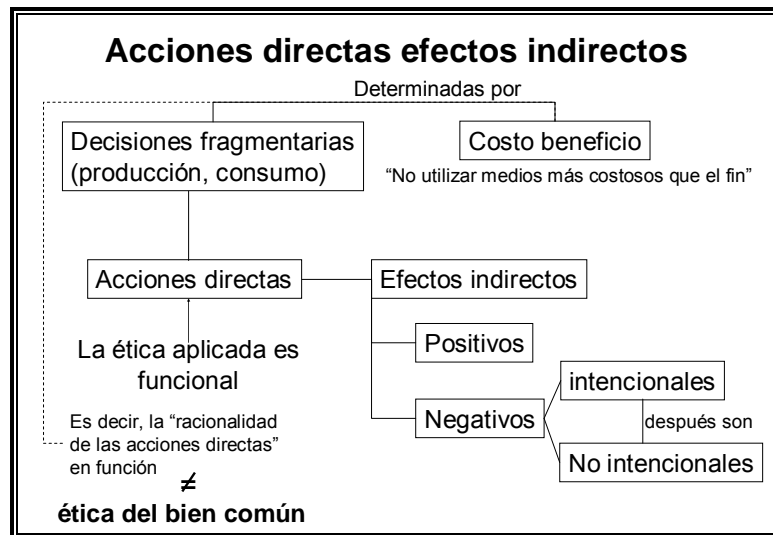
más costosos que el fin. En el sistema los fines son la ganancia, y para obtenerla hay que reducir costos de producción, reducir el costo del trabajo, de los insumos. Esta reducción que inicialmente era un medio, se convierte en fin cuando los mecanismos económicos idean la reducción del costo de trabajo.

En este sentido la ética vigente es “funcional”, que no se responsabiliza por los efectos indirectos que el proceso productivo genera, en el ánimo de obtener más ganancias.⁸ Los efectos indirectos positivos son aceptables y por eso no se notan, en cambio los negativos llaman la atención porque nadie los desea. En un primer momento, estos efectos indirectos negativos pueden ser no intencionales, sin embargo al conocerse son totalmente intencionales.

La aportación de Hinkelammert radica en proponer una ética en donde los valores no dependan del cálculo de costo beneficio, sino de “normas morales” es decir, de una ética del bien común (ver Esquema 4).

De no ser así, el autor metafóricamente comenta que estamos cortando la rama del árbol sobre la cual estamos sentados.

Esquema 4



Elaboración propia con base en Hinkelammert (2001).

Los autores anteriormente expuestos, coinciden en la idea de que la ausencia o escasez de estudios ligados al sacrificio en la modernidad contribuye a pensar que el

⁸ Los economistas liberales los denominan externalidades, y estas pueden ser positivas o negativas, conscientes o inconscientes (por un breve periodo, porque cuando se descubren los efectos se vuelven conscientes).

proceso civilizatorio ha suprimido el sacrificio, ocultando así una realidad de la que todos formamos parte.

Sacrificio y producción del espacio por presas hidroeléctricas

Entrando en el tema de producción del espacio por obras hidroeléctricas, encontramos que Bartolomé y Barabas (1990) y Roy (2002) identifican en el discurso justificatorio de estas obras la idea de sacrificio por el progreso, sin embargo no profundizan en el tema.

Bartolomé y Barabas (1990), al abordar la problemática de la presa Cerro de Oro en Oaxaca y la relocalización de comunidades mazatecas, centran el análisis del sacrificio en cuestiones de sacralización. Los autores narran que cuando fue inminente la construcción de la presa y con ello la relocalización, comenzó el culto a una nueva deidad: el Ingeniero el Gran Dios.

Como en el mundo secular los ingenieros son personajes importantes y en su papel de técnicos o mediadores tecnócratas, son tomadores de decisiones, entonces se requería un personaje que contrarrestara ese nivel jerárquico.

“Al papel maléfico de estos técnicos en la realidad cotidiana contraponen el beneficio del Ingeniero El Gran Dios en la realidad sagrada. Es así como el código cultural tradicional incorpora nuevos personajes extraídos de una nueva realidad y, al hacerlos propios, les otorga el carácter divino que legitima sus decisiones; haciendo posible también la existencia de una vía de mediación alterna a la política secular que desempeñaban las diferentes facciones” (Bartolomé y Barabas, 1990: 89).

Según los autores, la modificación de lo real constituido, es decir el derrumbe de lo conocido y aceptado como inamovible, es aterrador para los indígenas, por tanto, la nueva deidad los protege del exterior. En esta mitología los afectados no son los sacrificados sino por el contrario, con la intermediación del Ingeniero Gran Dios, la presa se termina y mediante una inundación destruye a los responsables de la obra.

En otra parte de su estudio, Bartolomé y Barabas centran su atención brevemente en el sacrificio por el progreso, retoman a Lins Ribero quien identifica una ideología redencionista en los proyectos de gran escala, como es el caso de las presas. Esta ideología redencionista, tiene implícita la noción del sacrificio, puesto que se promueve la obra como un reto histórico de transformación, es decir, en palabras de Hinkelammert, en un mal necesario para la salvación.

Enriqueciendo la aportación de Ribero, Bartolomé y Barabas argumentan que bajo esta visión, las obras por su magnitud e inversión se deifican y pasan de un medio para conseguir el desarrollo, a ser un fin en sí mismo. Entonces, hay una sustitución del fin por el medio, existen otros medios para alcanzar el nuevo fin, por lo que es de suma importancia justificar esta distorsión mediante el sacrificio, para que los costos sociales sean aceptados.

“Su resistencia [de los chinantecos] a abandonar el territorio tradicional, a veces con intentos de recurrir a una violencia defensiva, fue considerada como una resistencia a la modernidad necesaria, por lo que cualquier medio era adecuado si servía para alcanzar los fines propuestos” (Bartolomé y Barabas, 1990: 33).

En su estudio Bartolomé y Barabas identifican claramente el sacrificio en el discurso a fines de marzo de 1972 cuando el Ingeniero Jorge L Tamayo anuncia oficialmente, en un acto público, la construcción de la presa Cerro de Oro;

“Es uno de los anhelos de esta región, y creo que los paisanos estarán muy de acuerdo en considerar que si las obras las hiciera el gobierno con cierta rapidez... ellos sentirían la necesidad de hacer el sacrificio de contribuir al progreso nacional aportando 23 000 ha del vaso de Cerro de Oro, a cambio de recibir un beneficio de bastante importancia...” (En Bartolomé y Barabas, 1990:51).

Para los autores, está claro que el Ing. Tamayo no es portavoz de las comunidades indígenas, sin embargo, al gozar de una reputación en el ámbito nacional, sus palabras estimulan la justificación de la obra ante la opinión pública.

Por su parte, Roy (2002) al analizar la problemática derivada de la construcción de presas en la India, comenta que el discurso oficial apela al “máximo bien común”;

“Los millones de desplazados que hay en la India son, de hecho, refugiados causados por una guerra no declarada. Y nosotros, al igual que los ciudadanos de la América blanca y el Canadá francés y la Alemania de Hitler, los condonamos mirando hacia otro lado ¿Por qué? Porque se nos dice que se hace en aras del máximo bien común... [Y añade] ...todo aquello del sacrificio de unos cuantos para el beneficio de todos no es más que un mito” (Roy, 2002: 68).

La autora distingue dos posturas en la percepción pública de las obras: por un lado los desarrollistas vistos como una posición moderada y racional; y por el otro, el ala de la resistencia considerada como la irracional que persigue sueños arcaicos, es decir, la antidesarrollista.

En este sentido, en términos de Hinkelammert, la otredad es el enemigo, las víctimas pasan a ser los verdugos y por tanto, es éticamente permisible en aras del máximo bien común disponer de su tierra y devastar su reproducción social. Los afectados son percibidos como parte técnica a resolver y su incorporación al proyecto es asumida como “costos”, como los sacrificios necesarios del progreso.

“Cualquier sacrificio humano, cualquier violación de los derechos humanos se justifica, y ninguna conciencia moral del mundo puede legítimamente intervenir” (Hinkelammert, 1991: 36).

En resumen, se distinguen dos momentos del manejo del sacrificio en la construcción de presas, el primero para justificar ante la sociedad regional y nacional, que se requiere el sacrificio de ciertas personas (los afectados) por el bien del país, que la demanda de energía y agua, así lo exige. Se busca convencer a la opinión pública de que, sin ese sacrificio, el desarrollo no llegará, e incluso estaremos al borde del colapso. Para los afectados, el discurso se centra en una exaltación del valor, es una forma sutil de convencer para aminorar los costos de un posible conflicto en caso de no ser aceptada la obra. En un segundo momento el manejo del sacrificio es retomado para justificar la represión a quienes se opongan al proyecto, es convertir a la otredad en enemigo del progreso.

Presas y producción del espacio

Si bien los primeros vestigios de construcción de obras hidráulicas se remontan al año 3000 a.C. en la actual Jordania, las presas para fines de generación de electricidad son resultado de la industrialización a finales del siglo XIX (McCully, 2001).

En el siglo XX las presas se consideran como un instrumento de gestión de los recursos hídricos cuyo objetivo fundamental es el abastecimiento de agua y la irrigación, enmarcados en políticas de desarrollo regional. Con el tiempo, las presas alcanzan el sinónimo de progreso económico y como obras, son una exaltación del control sobre la naturaleza. Es así como se fomenta su construcción, primero en el centro de la economía mundo, después en la periferia como producto de la herencia colonial o copiando modelos de los países desarrollados.

“Las represas, las mayores estructuras alguna vez construidas por la humanidad, han sido consideradas durante la mayor parte de nuestro siglo como un símbolo de progreso” (McCully, 2001:1).

Sin embargo, en los últimos años las presas han sido blanco de severas críticas por los cambios que producen en el paisaje, el monto de la inversión, la disparidad de beneficios y costos, la pérdida de tierras agrícolas fértiles, la relocalización de comunidades, la falta de soluciones adecuadas para mitigar los impactos sociales y ambientales y porque el desempeño económico es inferior a lo esperado en muchos proyectos. Estas líneas de discusión, forman parte de un debate más amplio acerca del desarrollo y de la utilización de los recursos naturales y financiamiento público (CMR, 2000).

Las discusiones al respecto en el ámbito internacional, sobre todo a raíz del taller que se realizó en Gland Suiza en abril de 1997, fueron decisivas para la conformación de la Comisión Mundial de Represas (CMR) cuyo objetivo fue realizar una revisión rigurosa e independiente de la eficacia de las grandes represas para el desarrollo, evaluar alternativas y proponer directrices prácticas para la futura toma de decisiones. Este organismo independiente conformado por 13 miembros, emitió su informe en 2001 luego de año y medio de estudios. A continuación destacamos algunos de los señalamientos vertidos por dicho organismo.

Las más de 45 000 grandes represas que hay en el mundo han desempeñado un papel importante en el aprovechamiento de los recursos hídricos para producción de alimentos, generación de energía, control de inundaciones y uso doméstico. Sin embargo, tras el análisis de casos a nivel mundial, la CMR (2000) afirma que los servicios que proveen han tenido un costo:

- Transformación física de los ríos: las presas han modificado 46% de las vertientes básicas, lo que genera problemas y preocupaciones que afectan a los países ribereños en cuencas compartidas, que van desde la calidad del agua hasta los volúmenes de caudal;
- Contribuyen al incremento de emisiones de gases de efecto invernadero desde los embalses debido a la putrefacción de vegetación;
- Impactos ecosistémicos fluviales: las presas constituyen la principal causa del deterioro físico de los ecosistemas en vertientes, al fragmentar y transformar ecosistemas acuáticos y terrestres con una amplia gama de efectos que varían en duración, escala y grado de reversibilidad;

- Pérdida de bosques, de hábitat de vida silvestre, de poblaciones de especies y de deterioro de áreas de cuencas río arriba debido a la inundación del área del embalse;
- Pérdida de biodiversidad acuática, de pesca río arriba y río abajo y de los servicios de las llanuras de inundación río abajo, de ecosistemas de humedales y de estuarios fluviales y marinos adyacentes;
- Impactos acumulativos en la calidad del agua y en las inundaciones naturales.
- Alteración del ciclo natural de inundaciones en las llanuras de inundación aguas abajo;
- Las poblaciones negativamente afectadas incluyen a las familias directamente desplazadas, las comunidades anfitrionas donde se reasientan familias, y las comunidades ribereñas, sobre todo las que están río abajo de la represa, cuyos medios de subsistencia y acceso a recursos se ven afectados en diferente medida por los caudales alterados de ríos y por la fragmentación de ecosistemas. Más en general, sociedades enteras han perdido el acceso a recursos naturales y al patrimonio cultural que quedaron sumergidos en embalses o ríos que las presas transformaron;
- Muchos afectados no fueron reubicados ni han recibido una compensación adecuada, especialmente los afectados que ocupan el espacio inmediato o cercano al área de inundación;
- Las comunidades pueden vivir por décadas privadas de inversiones en desarrollo y bienestar, hasta confirmar la zona de inundación;
- Estrés psicológico de los posibles reubicados;
- Promesas incumplidas por parte del Estado;
- los costos financieros por encima de lo planeado tienen consecuencias importantes para los presupuestos públicos lo que se traduce en deudas al erario y en algunos casos recortes para equilibrar el gasto.

En resumen, la CMR plantea que, por lo general, las presas presentan deficiencias en el desempeño técnico, financiero y económico, mismas que se complican con impactos sociales y ambientales importantes, cuyos costos con frecuencia tienen que sobrellevarlos en forma desproporcionada los pobres, los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables.

“Las represas básicamente alteran a los ríos y a la utilización de un recurso natural, lo cual a menudo conlleva el traslado de beneficios de los usuarios ribereños locales a nuevos grupos de beneficiarios en una esfera regional o nacional” (CMR, 2000:31).

La falta de equidad en la distribución de beneficios e impactos y la creciente preocupación acerca de las implicaciones ambientales, ha hecho que académicos, organismos no gubernamentales y la sociedad, que está siendo afectada, se cuestionen el valor de muchas presas, a tal grado que a nivel mundo la demanda a los respectivos gobiernos es buscar otras alternativas.

Para la CMR el debate sobre presas se debe a que no existe una fórmula fácil para calcular los costos y beneficios que facilite una apreciación rápida acerca del balance general, sumado a la duda de cómo se valoran las consideraciones ambientales y sociales para concretar un proyecto.

Sin embargo, para la CMR es fundamental considerar que

“... el fin que debe alcanzar cualquier proyecto de desarrollo es el mejorar de un modo sustentable el bienestar humano, es decir, producir un avance significativo en el desarrollo humano, sobre una base que sea viable económicamente, equitativa socialmente y ambientalmente sustentable. Si la construcción de una gran represa es el mejor modo de alcanzar este objetivo, merece ser apoyada. Cuando otras opciones son una mejor alternativa, ellas deberían ser favorecidas, y no las grandes represas” (CMR, 2000:7).

Por otro lado, McCully (2001) afirma que la constitución de la CMR es una victoria de las luchas antirepresas que desde la década de los años 80 sostienen ONG y los afectados de proyectos financiados por el Banco Mundial en todo el mundo, destaca al movimiento de resistencia contra la represa Sardar Sarovar en la India, porque pese a ser un país en el que lo usual es imponer los grandes proyectos hídricos, los pueblos afectados lograron articular una lucha que trascendió lo local. McCully considera que los hallazgos de la CMR reforzó los datos que los movimientos antipresas manifiestan desde hace tiempo, y pese a que el informe;

“...no es un reflejo exacto de la opinión de los críticos de las represas, en conjunto es una acusación profunda a las prácticas e impactos de la industria internacional de las represas” (McCully, 2001: XXII).

Tras explicar la clasificación que hace de los principales impactos ambientales generados por las presas, McCully analiza el trasfondo político, económico y social de

dichos proyectos. En este sentido afirma que, desde fines de la década de los sesenta, se sigue el ejemplo de Estados Unidos, de solicitar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para otorgar financiamiento a las grandes obras

“Desafortunadamente e inevitablemente, los gobiernos y los constructores de presas han transformado el proceso de EIA en una formalidad burocrática, que representa un mero obstáculo a ser superado antes de que se apruebe el proyecto” (McCully, 2001: 66)

Por tanto, McCully afirma que las consultoras ambientales son un negocio rentable que a cambio de un pago justifican la construcción de un proyecto. Además existe un conflicto de intereses, dado que gran parte de los evaluadores fueron funcionarios de compañías constructoras, y en el caso de ser consultoras independientes, los estudios son poco críticos si se quiere continuar con contratos posteriores. Se suma la falta de un control de calidad y de difusión, lo que impide un debate público. Por tanto,

“...los impactos ambientales pueden predecirse a la perfección: serán relativamente menores, económicos y fáciles de mitigar. De una u otra, éstas parecen ser las conclusiones de casi todos los EIA para cualquier proyecto de represa” (McCully, 2001: 67).

Hay que destacar que la parte social en los EIA se limita a la caracterización de los asentamientos por afectar. Bartolomé y Barabas (1990) afirman que en el caso de la presa Cerro de Oro en México, la contratación de especialistas en el área social buscaba cumplir con algunos de los requisitos exigidos por las fuentes financiadoras internacionales, que incluían la realización de estudios de factibilidad social, pero su trabajo no era tomado en serio.

Por su parte, Racine Jean-Luc (2001) al analizar el caso del sistema hidráulico Sardar Sarovar, en la India, plantea que el problema de las grandes presas no puede limitarse únicamente a la cuestión del control del agua. Existen una serie de cuestiones como la del autoritarismo de los responsables, el diálogo entre el poder oficial y la población afectada, los estudios de impacto descuidados que hasta ahora minimizan no sólo los costos financieros sino también las consecuencias sociales de los grandes proyectos y una competencia a menudo desigual.

En este sentido, McCully comenta que para muchos campesinos, y en especial para los más pobres, inundar las tierras comunales por las presas constituye la pérdida más grande, puesto que al pasar de economías de subsistencia a depender de dinero en

efectivo y los mercados, se incrementa la vulnerabilidad al endeudamiento y reduce su capacidad de sobrevivir. En numerosas ocasiones los desplazados deben ocuparse en actividades diferentes a las que tenían en sus comunidades o en caso de obtener dotación de tierras, estas suelen ser de diferente calidad, lo que implica tiempo para aprender el nuevo oficio u obtener los mismos niveles de producción de antaño, y por tanto una disminución de su ingreso.

Un ejemplo sobre la incorporación de afectados a nuevas actividades nos lo da McMahon (1990), quien al analizar el proceso de transformación del espacio en el poblado de Ixcatlan, afectado por la construcción de la presa Miguel Alemán, cuenta:

“A principios de junio de 1968, el nivel del agua estaba muy bajo y conducía la Margarita un aprendiz; se atoró en las copas de unos árboles cubiertos por el agua a unos cuantos metros del embarcadero de Temascal. Entre dos buceadores, con la ayuda de 18 pasajeros que balancearon la lancha tardaron una hora para poder liberarla” (McMahon, 1990: 75).

Existe otra forma de pérdida de ingreso, que McCully identifica con la larga duración en la construcción de la presa. Al demorar el proyecto, los afectados esperan años, incluso décadas para la culminación de la obra, mientras sufren la retirada de inversiones del gobierno y del sector privado, el valor de la propiedad cae, los bancos se niegan a otorgar préstamos y no se construyen obras en la zona, en algunos casos, los servicios desaparecen antes del desalojo. Esta pérdida de ingresos y servicios mantiene a las comunidades en un estrés psicológico por la incertidumbre de su futuro.

Un problema más de índole social es la proliferación de enfermedades, en la etapa de construcción por la presencia de obreros provenientes de otros espacios que son portadores de enfermedades que pueden ser nuevas para la población local. Asimismo en la etapa de anegamiento, por la transformación del paisaje que genera un ambiente propicio para la proliferación de insectos y caracoles causantes de transmisión de enfermedades como la esquistosomiasis y la malaria.

Aunado a lo anteriormente señalado, McCully afirma que en numerosos casos la estimación del número de desplazados no coincide con lo planeado, lo que genera un mayor costo social (Ver Tabla 1).

Y pese a la promesa de aminorar los costos sociales, la desintegración física de los pueblos por la relocalización seccionada, completa el trastorno de las comunidades por la pérdida de rasgos culturales afines, como las fiestas y sistema de cargos que no se pueden realizar en su nueva ubicación.

Tabla 1 Estimación del número de desplazados

| Proyecto | País | Cálculo original (año) | Cálculo corregido (año) |
|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Itá | Brasil | 13,800 (1987) | 19,200(1993) |
| Guavio | Colombia | 1,000 (1981) | 5,500 (1994) |
| Akosombo | Ghana | 62,500(1956) | 8,200(1965) |
| Andhra Pradesh | India | 63,000(1986) | 150,000(1994) |
| Gujarat Medio | India | 63,600 (19??) | 140,370(1994) |
| Krishna superior | India | 20,000 (1978) | 240,000 (1994) |
| Madhya Pradesh | India | 8,000 (1981) | 19,000 (1994) |
| Sardar Sarovar | India | 33,000 (1985) | 320,000 (1993) |
| Indravati Superior | India | 8,531 (19??) | 16,080 (1994) |
| Kiambere | Kenya | 1,000 (1983) | 7,000 (1995) |
| Bakun | Malasia | 4,300 (1988) | 9,430 (1995) |
| Funtua | Nigeria | 100 (19??) | 4,000 (1994) |
| Tarbela | Pakistan | 85,000 (19??) | 96,000 (19??) |
| Ruzizi II | Zaire/Ruanda/Burundi | 135(1984) | 15,000 (1994) |

Fuente: McCully (2001: 100).

En la misma línea, Roy (2002) realiza una crítica a los proyectos hídricos en su país: la India, su análisis aborda la problemática acumulada de los altos costos sociales que pagan los reubicados. Para la autora, algunos reubicados de presas han sido desplazados anteriormente tres o cuatro veces por diferentes proyectos, ya sea por una mina de uranio, un campo de tiro para artillería, obras que lejos están de asegurar a los afectados una vida mejor.

“En su mayor parte, acabarán en los barrios de chabolas que rodean nuestras ciudades, donde pasarán a formar parte de la inmensa reserva de mano de obra barata para la construcción... Es verdad que no son exterminados no son llevados a las cámaras de gas, pero puedo asegurar que la calidad de sus viviendas es peor que la de los barracones de cualquier campo de concentración alemán”(Roy, 2002:73).

Da cuenta que el número de proyectos de construcción de presas en la India es de tres mil doscientos, que cambiarán por completo al río Narmada y sus cuarenta y un tributarios. Es por eso que para Roy las presas impulsadas desde el exterior, producen más mal que bien:

“Son antidemocráticas. Son uno de los medios de los que se valen los gobiernos para hacer acopio de autoridad, al darles la facultad de decidir adónde irá a parar el agua y en qué cantidad. Son un medio seguro para desarraigar a los campesinos de su entorno. Son la manera más descarada de quitarles el agua, la tierra y los regadíos a los pobres y dárselos a los ricos. Los embalses desplazan a enormes cantidades de personas, que se quedan sin hogar y en la mayor pobreza” (Roy, 2002:68).

Cabe entonces preguntarse, ¿por qué empeñarse en proyectos de desarrollo regional con altos efectos negativos? Y sobre todo ¿quiénes son los grandes beneficiarios de estas obras?

Una respuesta la ofrece Harvey (2004) mediante la “teoría de acumulación por desposesión” para explicar los mecanismos que el capital utiliza para salir de la crisis. Según esta interpretación, la causa de la crisis del sistema capitalista es la sobreacumulación, es decir, la falta de oportunidades de una inversión rentable. La solución al problema por el capital es la desposesión, como se explicó en el apartado de la producción del Espacio y poder. En este sentido, la construcción de presas se ubica en una temporalidad de larga duración, que absorbe gran cantidad de recursos, evitando una crisis de sobreacumulación de capital en un territorio, en detrimento de otros que absorben la inversión mediante una deuda. Para ello, el capital requiere de la intervención del Estado para influir decisivamente en el problema utilizando sus poderes para promover, mediante la planificación, la infraestructura que el capital financiará.

Tomando el argumento de Harvey, la construcción de una presa rebasa el ámbito meramente técnico para incidir directamente en el ámbito económico, debiendo ser también analizado. Parte fundamental de la crítica de Roy fortalece esta posición cuando revela los nexos de empresas alemanas, agentes, el gobierno receptor y el gobierno exportador del capital. Esta solidaridad de los grupos de poder les permite obtener grandes ganancias mediante la construcción de presas. Ya sea por los intereses generados por el préstamo, la compra de equipo o mantenimiento a determinada empresa⁹ o bien, mediante los estudios de impacto ambiental, como plantea McCully.

A nivel mundial existen cuatro corporaciones multinacionales que dominan el sector de equipos para generar energía eléctrica¹⁰, que en conjunto, manufacturan cada año dispositivos que pueden generar veinte mil megavatios de energía, dicha producción

⁹ La autora señala un ejemplo: para la presa Sardar Sarovar, los japoneses están condicionando el financiamiento a la compra de turbinas a la Sumitomo Corporation.

¹⁰ Una de ellas es General Electric.

requiere venderse. Si en los países desarrollados la demanda de esos equipos es escasa, las multinacionales del sector necesitan colocar sus excedentes en otros mercados, es decir en los países subdesarrollados. Es por eso, que el capital impulsa a toda costa la creación de infraestructura hidroeléctrica (Roy, 2002), aun cuando se conocen los efectos adversos.

En este sentido, Werner y Weiss (2003) identifican que la empresa productora de turbinas Voit, subsidiaria de Siemens, tiene negocios en la India en los proyectos de Maheshwar y Theri. Dichos proyectos amenazan la reproducción social de por lo menos 35, 000 personas para el primer caso y 100, 000 para el segundo. Sin embargo, el negocio más atractivo de Siemens se ubica en China con la construcción de la presa Tres Gargantas. Los autores explican que para los proyectos de gran magnitud se requiere un amplio crédito por lo que el capital se importa de las economías centrales. Como los créditos representan un alto riesgo porque los países receptores de la inversión suelen tener una economía inestable o bien, conflictos políticos que amenazan la inversión, se requiere de garantías para asegurar el negocio. Estas garantías son asumidas por los gobiernos quienes otorgan seguros estatales a los créditos, asumiendo de ese modo el riesgo. Por lo que de fracasar el proyecto el seguro estatal compensa las pérdidas, mismas que en última instancia son adjudicadas a los contribuyentes.

Para Werner y Weiss (2003) el hecho de que el Estado asuma el riesgo de las inversiones alienta a las grandes industrias a instrumentar proyectos que perjudican las políticas de desarrollo.

“Muchos de los créditos otorgados tan alegremente sumen a los países más pobres en deudas millonarias” (op cit: 184).

Por lo anterior, podemos afirmar que el Estado actúa como gestor del capital y no como garante de los derechos fundamentales de las comunidades. Al impulsar la construcción de embalses, el Estado invoca al sacrificio como antivalor, es decir, un acto impuesto, que no es aceptado. Es así como la concreción del proyecto transforma en un tiempo reducido el territorio, modificando las relaciones de producción local y reconfigurando el espacio social mismo. Es decir, la producción del espacio inherente al proyecto es un proceso dialéctico entre la creación y la destrucción, creación de una materialidad y destrucción de la reproducción social de las comunidades afectadas.

“...Y es que las personas afectadas por cualquier proyecto que han sido reasentadas tienen que aprender a vivir de nuevo. Tienen que aprenderlo todo, tanto las cosas importantes como las nimias: desde donde orinar y defecar... hasta comprar un billete de autobús, aprender una nueva lengua o comprender la función y el significado de la moneda” (Roy, 2002:107).

Por tanto, los afectados por las obras deben encontrar nuevas formas de reproducción social, lo cual no es sencillo bajo la dinámica del capital, aunado a que los gestores del proyecto, lejos de reducir los costos sociales, recurren a mecanismos violentos de imposición de la obra.

Conflictos¹¹ por presas hidroeléctricas

Bartolomé y Barabas (1990) al examinar diversos proyectos de embalses a nivel mundial y nacional, reconocen que priva una óptica ingenieril en la planeación de la obra. Bajo esta perspectiva se destacan los aspectos técnicos y se minimizan las cuestiones sociales, por tanto, es inevitable la conflictividad entre los ejecutores de la obra y los afectados, por la diferente percepción de la problemática y, sobre todo, porque cada grupo persigue diferentes objetivos. Los autores añaden que el menosprecio por la dimensión social local, desde las primeras etapas de planeación, acarrea conflictos con los afectados y a la obra misma que se manifiestan al incrementarse los efectos negativos, propiciando un clima tenso de crisis que puede llevar a la suspensión temporal o definitiva de la obra ante las demandas colectivas.

Bajo una visión tecnócrata los ingenieros consideran la relocalización como un problema técnico y por tanto, sus razones son incomprensibles y las explicaciones inexactas ante los cuestionamientos de los afectados. Por otro lado, a pesar de la inconformidad los afectados no siempre logran articular una oposición capaz de impedir el proyecto. Antes de llegar a este punto, los gobiernos aplican la violencia e intimidación, frenando así toda posibilidad de manifestaciones de inconformidad.

McCully (2001) y Werner y Weiss (2003) documentan casos en diversas partes del mundo que dan muestra de esta represión sistémica. En el caso de México, a finales de la década de 1950, cuando la represa Miguel Alemán fue construida en Oaxaca, 21,000 indios mazatecos se negaron a abandonar el lugar,

¹¹ El conflicto lo concebimos como el choque de intereses entre individuos, entre individuos e instituciones o bien entre instituciones y grupos sociales. Cuando los intereses no coinciden pueden llevar al inicio de una lucha por imponer los objetivos propios. Sin embargo, las relaciones casi siempre son asimétricas y uno impone su criterio forzando al otro a aceptarlo. Esto se da mediante las relaciones de poder existentes en una sociedad determinada (Sánchez: 1992).

“...entonces los empleados de la Comisión del Río Papaloapan incendiaron sus hogares. El ejército tuvo que interceder en varias ocasiones para detener el caos resultante en las comunidades indígenas” (McCully, 2001: 87).

Con respecto a la resistencia basada en la no violencia de la población del valle Narmada, en la India, la policía reaccionó de manera brutal frente a las ocupaciones pacíficas.

“Un anciano fue perseguido y asesinado por la policía montada. Miles de personas fueron detenidas temporalmente, entre ellas 150 intendentes y concejales. Muchos de los detenidos, incluso mujeres y niños, fueron maltratados” (Werner y Weiss, 2003: 178).

Es a partir de la década de los años 80 cuando las manifestaciones de inconformidad a nivel mundial son evidentes y trascienden el ámbito local. La lucha más significativa fue la oposición al sistema hidráulico Sardar Sarovar, en la India, puesto que logró atraer la atención del mundo. La resistencia emana en un país donde no existe una tradición de militancia política, a lo que se suma una fuerte estructura de castas frente a un Estado autoritario. Es por eso que el caso del Narmada pone en la discusión la filosofía del desarrollo.

El movimiento se desplegó a escala del nivel local y global. Por una parte, los opositores al proyecto se agruparon en la *Narmada Bachao Andolan* (NBA) y emprendieron acciones no violentas siguiendo el modelo de Gandhi, que incluía dharnas¹², huelgas de hambre y manifestaciones, al mismo tiempo, el conflicto se trasladó a nivel internacional buscando el apoyo de redes internacionales (Racine, 2001). El NBA incorporó mecanismos de acción, como es el uso del Internet para distribuir información, de numerosas luchas con diversas reivindicaciones que incluyen cuestiones de género, de derechos humanos, grupos étnicos, ecologistas, entre muchos otros. Pese a que algunos de estos movimientos no planteen un cambio de sistema económico, comparten mecanismos de lucha y redes de solidaridad que se consolidan formando un solo frente.

Al respecto Arrighi (1999) identifica los movimientos antisistémicos, bajo su diversidad de reivindicaciones con la búsqueda de transformación social que no implica necesariamente un cambio de sistema económico, pero sí de las condiciones sociales de inequidad que existen en el capitalismo. De esta forma, Arrighi distingue que los movimientos actuales son conflictos verticales y horizontales. Los verticales son la

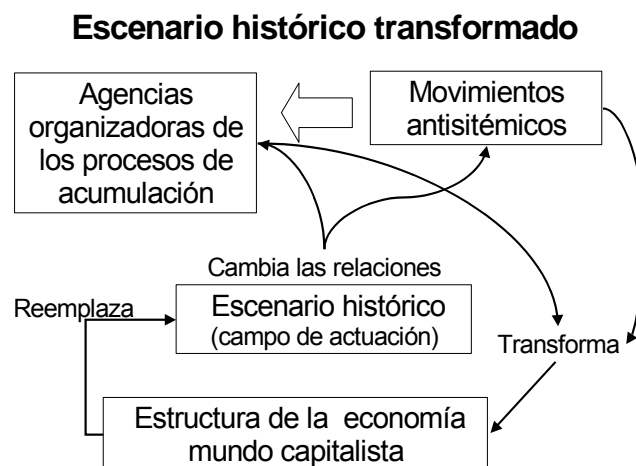
¹²Manifestantes sentados en protesta pacífica.

contraposición de grupos e individuos que se hallan en situaciones diferentes respecto a los medios de producción, mientras que los conflictos horizontales se dan entre elites que se contraponen bajo una relación similar con los medios de producción o con los medios de la violencia legítima, a estos les denomina luchas competitivas.

Retomando los movimientos antisistémicos, el punto de inflexión se da en las décadas de los 60 y 70 a partir de la guerra de Vietnam, que revela los límites de las acciones militares para coaccionar a la periferia dentro del orden jerárquico mundial, pero sobre todo con el movimiento de 1968. A partir de esta coyuntura, Arrighi distingue cambios propicios para el desarrollo de movimientos de resistencia a) las limitaciones de los bloques occidental y del este de vigilar e intervenir en el sur, b) menos predisposición a la obediencia al estado dominante y c) una sociedad civil menos receptiva a las órdenes. Por tanto, comenta Arrighi que el alcance de la autoridad es cada vez más negado, como han descubierto progresivamente, entre otros, el gobierno de los Estados Unidos de América. Este proceso se favorece por el impacto de las nuevas tecnologías.

Para Arrighi, las redes que conforman las líneas centrales de los circuitos del capital han experimentado una transformación tan radical que el funcionamiento mismo del proceso de acumulación se alteró. Esta modificación redefine continuamente las condiciones relacionales tanto de las agencias organizadoras de la acumulación, como de los movimientos antisistémicos, que a su vez redefine continuamente el carácter relacional de la lucha y, en consecuencia, la naturaleza de los movimientos mismos y las trayectorias que los hacen antisistémicos (Ver Esquema 5).

Esquema 5



Elaboración propia con base en Arrighi (1999).

Es de suponer que los movimientos de resistencia a las presas a nivel mundial se enmarcan en esta coyuntura y, en algunos casos, las condiciones de poder les han dado el triunfo, como se verá en el caso de Guerrero.

En resumen, para la presente investigación partimos del concepto del espacio como producto de las relaciones vigentes de producción capitalistas guiadas a través de la lógica del costo- beneficio. El papel del Estado es fundamental al actuar como gestor de los grupos de poder capitalista, colaborando en la transferencia de recursos de un espacio a otro en el proceso que Harvey denomina “acumulación por desposesión”. En este sentido, la construcción de la presa que el Estado promueve, que será financiada por el capital y más tarde absorbida en deuda pública, requiere de una justificación sacrificial, por un lado para que la sociedad regional y nacional lo acepte, y por otro, para justificar la represión a quienes se opongan al proyecto, al convertir a los opositores en enemigos del progreso. Es por eso que ante la inminente imposición de la obra, el conflicto entre el Estado que promueve y la comunidad afectada, se escale ante la confrontación de intereses.

II Experiencias de represas en el estado de Guerrero

A fines del siglo XIX se inició la construcción de grandes obras hidráulicas en el país, consideradas como vitales para la modernización del naciente Estado Mexicano. Su impulso fue resultado de la expansión del capital mundial luego de la crisis de la década de 1870 y gracias al desarrollo tecnológico de la ingeniería, el ferrocarril y los vehículos de combustión interna (Aboites, 1998).

Esta etapa denominada por Aboites como la “gran hidráulica” o la “ingeniería de las grandes presas”, se caracterizó por la irrupción de grandes capitales y la violencia contra los pueblos, perjudicados ya sea por inundación, por desecación o acaparamiento de sus cuerpos de agua, lo importante ante todo era la edificación de la obra, grandes sumas salían del erario para su culminación. Estas obras eran vistas como símbolos de progreso y no se ponía en duda su construcción, los afectados eran percibidos como parte del área y su incorporación al proyecto era asumida como un costo ineludible.

Destacan las presas construidas para la generación de energía eléctrica, impulsadas por el gobierno federal bajo un proyecto de desarrollo regional, muchas veces contrapuesto al desarrollo local, por lo que en la mayoría de los casos no fueron consensuadas ocasionando problemas socioeconómicos, como veremos en el presente capítulo.

Presas hidroeléctricas

En nuestro país, la generación hidráulica de electricidad inició en la segunda mitad del siglo XIX. En sus orígenes, la producción estaba en manos de empresarios asociados a la industria textil, la minería y los ingenios azucareros, quienes vendían sus excedentes a las zonas urbanas circunvecinas (Aboites, 1998).

Con el incremento en la demanda de agua y energía eléctrica, por la producción y consumo en masa¹³, se estimuló la construcción de presas hidroeléctricas financiadas con capital extranjero por la gran inversión que representan. A partir de los años cuarenta del siglo XX el proyecto de nación se centró en el impulso a la industrialización con base en los recursos de la agricultura, con este fin se impulsó la planificación regional en función de las cuencas hidrográficas tomando al agua como motor de desarrollo.

¹³ Aboites (1998: 65) destaca que la energía eléctrica permitió incrementar la capacidad de producción, al ampliar la jornada laboral por las noches y eliminar los riesgos de incendios.

El paradigma de la planeación por cuenca se centra en la idea del manejo de agua a través de presas multiusos que posibiliten el desarrollo, los embalses constituyen depósitos para abastecimiento, contribuyen a la irrigación para agricultura de exportación, generan la electricidad demandada por la naciente industria, además impulsa nuevas actividades que contribuyen a la diversificación económica, como la pesca y las actividades de recreación, entre otras. Este modelo se adoptó del Tennessee Valley Authority (TVA) que se aplicó en EU, en donde se jerarquizaba los problemas técnicos, para el control del recurso, sobre los sociales.

Bajo este paradigma se crearon la Comisión del Papaloapan y la del Tepalcatepec en 1947, la Comisión del Grijalva en 1951 y la Comisión del Río Balsas en 1960 (De Mattos, 1986). El periodo que comprende el funcionamiento de las Comisiones coincide con la mayor construcción de presas hidroeléctricas, que corresponde a los sexenios de Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortínez, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. En este periodo se inauguraron 34 de las 63 presas que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reporta en funcionamiento para el 2008, lo que equivale a 54% del total. Las presas construidas antes de 1947 suman 14 que corresponden a 22%, mientras que las construidas después de 1970 son 15, es decir el 24%. Destaca el número de centrales puestas en operación por el presidente Adolfo López Mateos, que suman 13 (ver anexo I a).

Comisión del río Balsas (CB)

La CB se creó en 1960 durante la administración del entonces presidente Adolfo López Mateos, siendo secretario de recursos Hidráulicos, Alfredo del Mazo. La cuenca es una de las más grandes del país, comprende porciones de las entidades de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Estado de México, Guerrero y Michoacán, así como la totalidad de Morelos.

Desde su nacimiento en la Sierra Nevada, hasta su desembocadura en el océano Pacífico, el río Balsas recibe los escurrimientos de diversos afluentes de los que destacan los ríos Atoyac, el Mixteco, Zahuapan y el Tlapaneco. Para la CB el caudal del río representó un potencial hidroeléctrico de 2 626, 000 KW; el potencial de la cuenca como generadora de electricidad se identificó en el sexenio de Lázaro Cárdenas, quien lo estableció en el decreto del 18 de junio de 1940 (García, 2000). Ya como vocal ejecutivo, Cárdenas, con la experiencia acumulada a partir de la Comisión Tepalcatepec en Michoacán (1947 - 1958), buscó cumplir los objetivos de la CB señalados en el decreto de su fundación;

“estudiar, planear, construir y atender el funcionamiento de todas las obras para el control de los ríos y defensa, riego, generación de energía eléctrica, abastecimiento de agua potables a centros de población, ingeniería sanitaria, comunicaciones y transportes... y la creación y ampliación de centros de población” (SARH,1970:5).

Para el desarrollo de sus actividades, la CB contó con el apoyo de diferentes instancias de gobierno como la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la Secretaría de la Presidencia, la de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Ganadería, Educación Pública, Comunicaciones y transportes, Marina, Patrimonio Nacional, Industria y Comercio y Salubridad y Asistencia; así como la CFE, el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, el Instituto Indigenista, el consejo de Recursos Naturales No Renovables con apoyo de los gobiernos Estatales y Municipales. En materia de obras hidráulicas, la CB aplicó una estrategia de construcción por etapas; los estudios geohidrológicos, los de factibilidad socioeconómica, seguidos por la elaboración de un proyecto preliminar, antes de llegar al proyecto definitivo (SARH, 1970).

En la etapa de estudios geohidrológicos se definen fuentes de abastecimiento de agua potable y de riego mediante reconocimientos geológicos hasta definir los sitios. La factibilidad socioeconómica consistía, por un lado, en el ámbito económico, realizar una apreciación comparativa entre los posibles usos de los recursos, a través de los proyectos de inversión sectorial. Con respecto al área social se establecían los efectos directos e indirectos, ponderándose en función de la productividad. Se priorizaba la inversión que generaba mayor cohesión social y administrativa en la región. La etapa del proyecto preliminar se centraba en cuestiones meramente técnicas; de análisis y selección del tipo de estructuras a emplearse. En el proyecto definitivo se desarrolló a detalle la obra, cuando ésta es conveniente por factibilidad económica y social, finalmente se licita y construye.

Es así como la CB construyó las presas José Ma Morelos (La Villita), Vicente Guerrero, Yosocuta, El Encino, El Pejo, Hermenegildo Galeana, La Comunidad, Cañón de Tonalá, Coatzingo, Sta Catarina Tesoatlán, Panotla, Huitchila e Ixtlilco. Quedaron pendientes varios proyectos en Guerrero como el Huixastla, Chaucingo y Tetelcingo, este último retomado a fines de los años 90. Una vez disuelta la CB, las formas de implementar los proyectos fueron distintas a raíz de los lineamientos que a nivel mundial, exigían atención al impacto ambiental como se abordó en el capítulo anterior.

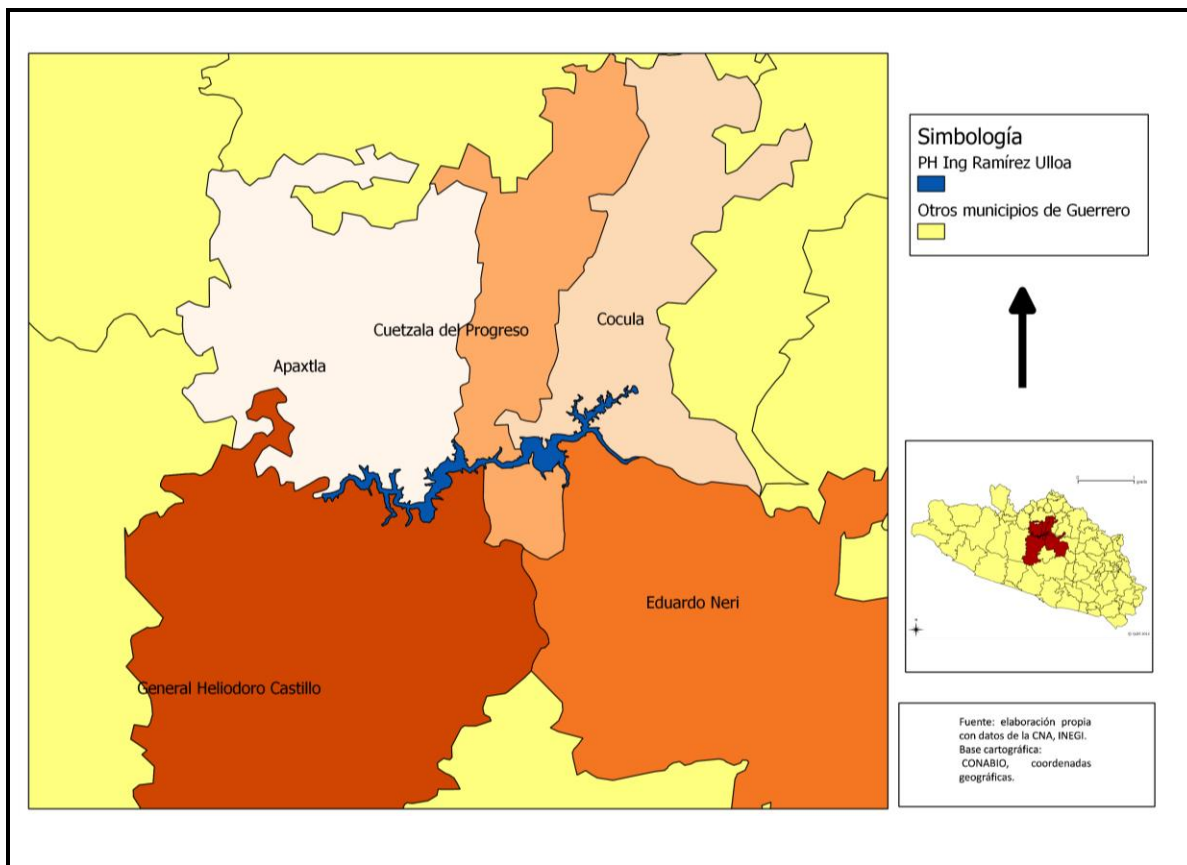
A continuación abordamos dos experiencias en el proceso de negociación¹⁴, la primera es la Presa Hidroeléctrica (PH) Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol) y la segunda la PH San Juan Tetelcingo, ambas situadas en Guerrero, dentro de la cuenca del Balsas. La elección de estos proyectos se debe a que la PH El Caracol se construyó con relativa aceptación de los afectados bajo la promesa de su “inclusión” en el proceso de relocalización. Además, es el antecedente que desataría la conflictividad en las comunidades que afectaría la PH San Juan Tetelcingo, del cual hablaremos más adelante, y que finalmente tuvo que ser suspendido. Estos dos procesos, son a primera vista, diferentes; uno exitoso y otro suspendido, sin embargo revelan que la forma de operar de la CFE es similar, la diferencia radica en la conformación de resistencia y la dinámica del manejo del conflicto por la estructura de poder, en resumen, cómo la conformación espacial de la resistencia influye de forma determinante en el éxito o la suspensión del proyecto.

Presa hidroeléctrica Carlos Ramírez Ulloa

La PH Ing. Ramírez Ulloa, mejor conocida como El Caracol, se erige en la cuenca media del río Balsas, entre los poblados de Mezcala y el Caracol (Ver mapa 1). La obra se inauguró durante los festejos de la CFE por su 50 aniversario (López *et al*, 1988). En ese mismo año se concluyeron 3 proyectos más en diferentes regiones: Peñitas en el Río Grijalva, Bascurato en el Río Sinaloa y la Amistad en el Bravo (Presidencia de la República, 1987). El costo del proyecto fue de 430 mil millones de pesos a precios de 1987 con una generación de 1500 Gw h anuales. La obra implicó la construcción de seis nuevos poblados con 858 casas, siete escuelas primarias, dos secundarias y edificios públicos; y se pagaron dos millones de indemnizaciones diversas. Hay que añadir la creación de la carretera pavimentada de Teloloapan al Caracol con una longitud de 65 km, la subestación de enlace de Mezcala a la Cd. de México, Acapulco y ciudades intermedias (Presidencia de la República, 1987:16- 17).

¹⁴ En esta investigación, la negociación es entendida como el periodo que inicia con el arribo de personal de la CFE o contratado por ella, cuyo propósito es la construcción de una presa y comprende desde los estudios de viabilidad hasta la culminación o suspensión de la obra.

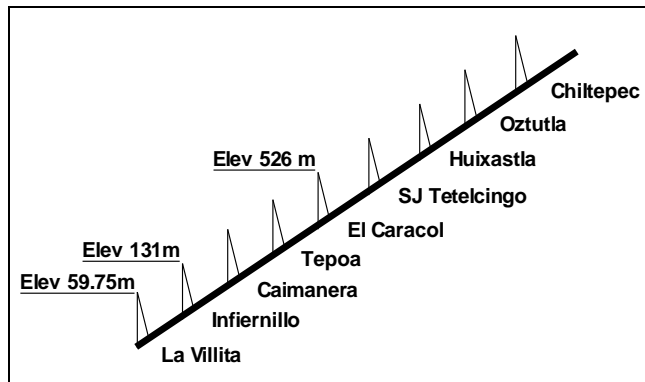
Mapa 1 Municipios afectados por PH Ing. Ramírez Ulloa.



La PH El Caracol, junto con La Villita y El Infiernillo, forma parte del Sistema Hidroeléctrico del Río Balsas, conformado por nueve presas escalonadas de las cuales están pendientes seis: Chiltepec, Oztutla, Huixastla, San Juan Tetelcingo¹⁵, Tepoa y Caimanera (Esquema 6). El objetivo de la CFE es aprovechar las aguas del río Balsas en la generación eléctrica para cubrir las necesidades futuras del país (Archivo Histórico del Agua, Infraestructura hidráulica, caja 300, expediente 2553). Por tanto, los trabajos de la CFE en la zona empezaron en 1951 cuando se establecieron estaciones hidrométricas en las localidades Mezcala, San Juan Tetelcingo y Papalutla, y de acuerdo a los datos aún no han terminado.

¹⁵ suspendida por la inconformidad que las comunidades afectadas manifestaron, como se analizará adelante.

Esquema 7 Sistema Hidroeléctrico del Río Balsas



Fuente: Elaboración propia tomado del AHA, fondo infraestructura hidráulica.

Históricamente, las comunidades de la cuenca media del río Balsas estaban dispersas en la margen del río, la actividad predominante era la agricultura y la pesca complementaria. Si bien existen vestigios de ocupación indígena en la zona, fue hasta principios del siglo XX que el auge minero atrajo a la población ribereña hacia el poblado de Balsas Sur, donde se ubicaba la estación de ferrocarril. Otro punto de desarrollo regional antes de la construcción de la presa era el pueblo de Mezcala. La comunicación entre comunidades se daba a través del río por medio de balsas, de ahí su nombre. Con la llegada del ferrocarril y posteriormente con la reducción de su costo, se incrementó la comercialización de productos locales a los mercados de Iguala y Cuernavaca (Archivo Histórico del Agua, Infraestructura hidráulica, caja 300, expediente 2553).

El cese de la actividad minera en la década de los setenta disminuyó el comercio, en este sentido, la presa Hidroeléctrica El Caracol se concibió como una alternativa para reactivar la economía regional. La CFE dio a conocer el proyecto en 1977 y la propuesta suponía una serie de beneficios, sin embargo, las consecuencias derivadas de incumplimientos a los acuerdos iniciales y de un seguimiento al concluir la obra, fue determinante en el rechazo de una segunda presa, la de San Juan Tetelcingo río arriba, como se analizará más adelante.

La construcción de la obra, que inició en 1977, afectó 13 poblados y cuatro rancherías pertenecientes a cinco municipios (ver tabla 2). Escalante (1989) afirma que, para enfrentar los problemas de las experiencias pasadas, la CFE se propuso que este

proyecto fuese participativo, se legalizaran los acuerdos de interés colectivo, se sometiera a consenso la elección de sitios de reubicación, se procurara la información veraz y periódica y se estableciera una política de desarrollo integral.

Tabla 2 Localidades afectadas por la PH El Caracol

| Localidad | Municipio |
|---------------------|--------------------------|
| Acatlán del Río | Apaxtla de Castrejón |
| Corral Grande | Apaxtla de Castrejón |
| Las juntas (Sta Ma) | Apaxtla de Castrejón |
| San Agustín | Apaxtla de Castrejón |
| La Parota | Cuetzala del Progreso |
| Tomixtlahuacan | Cuetzala del Progreso |
| Tecomapa | Eduardo Neri |
| Balsas Sur | Eduardo Neri |
| Mezcala | Eduardo Neri |
| Balsas Norte | Cocula |
| Campo Arroz | Cocula |
| Valerio Trujano | Tepecoacuilco de Trujano |
| Rancherías: | |
| El Potrero | Apaxtla |
| La Chococa | |
| Huertecillas | Cuetzala del Progreso |
| Totuapan | |
| Santa Rosa | Cocula |

Fuente: Elaboración propia con base en López et al (1988).

Para cumplir las metas antes mencionadas, la CFE dividió el proyecto en tres etapas:

- Estudio socioeconómico: realizado por la Brigada Interdisciplinaria de Estudios Socioeconómicos, dependiente de la CFE, integrada por dos sociólogos, dos agrónomos, una bióloga y dos arquitectos.
- Proyecto de vivienda para reubicados: efectuado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Y la construcción, a cargo de la CFE, que inició en 1979.

Estudio socioeconómico y proyecto de vivienda

De acuerdo con Escalante (1989) el primer contacto de la CFE con las comunidades se dio entre 1978 y 1979 cuando la Brigada empezó a trabajar. Al principio, señala la autora, se respetaron las metas de trabajo establecidas por la Dirección de la CFE. Sin embargo, según Escalante, al transcurrir el proceso de negociación se abandonó o distorsionaron dichos objetivos. El primer problema se dio al incorporar a la población en la elección del nuevo sitio para el asentamiento, pues el grupo de poder local¹⁶ quiso imponer el lugar de reubicación más adecuado a sus intereses:

“La reubicación se convirtió en el factor detonante de un conflicto político que escindió a la población en grupos opuestos y que derivó finalmente en la formación de tres nuevas comunidades” (Escalante: 1989).

Los problemas se prolongaron incluso después de terminada la obra, dado que en la mayor parte de los casos, las expropiaciones no fueron concluidas, ni gestionadas (Ver Tabla 3).

Tabla 3 Estado legal de ejidos y núcleos agrarios, 1985

| Ejido o núcleo agrario | Ha afectadas | Estado legal al construir la presa |
|------------------------------|--------------|--|
| La Parota (ejido) | 139-93-25 | sin decreto expropiatorio |
| Acatlán del Río (ejido) | 1,447 –00-54 | sin expropiar |
| Tomixtlahuacán (ejido) | 57-37-38 | Sin decreto expropiatorio |
| Río Balsas(ejido) | 429-77-79 | Sin decreto expropiatorio |
| Puente Sur Balsas(ejido) | 35-10-94 | con decreto expropiatorio publicado en el Diario Oficial del 8 de agosto de 1985 |
| Atzcala (ejido) | 21-80-24 | sin decreto expropiatorio |
| Mezcala (terrenos comunales) | 126-18-32 | sin decreto expropiatorio |

Fuente: Escalante (1989).

¹⁶ Comerciantes y ganaderos.

Por su parte López et al (1988) explican que los grupos opuestos se caracterizaron por la diferencia en los derechos sobre la tierra. Por un lado estaba el grupo conformado por ejidatarios que prefería la reubicación a Campo Arroz, sitio más accesible a las zonas de cultivo. Los ejidatarios sumaban en total 154, equivalente a 7% de la población, por tanto, el peso era menor en la toma de decisiones. El otro grupo se formó con los vecindados que en principio no tenían tierra, cuya actividad principal era la ganadería, el comercio y el cultivo en pequeña propiedad. A este grupo pertenecían tres caciques que se inclinaban por la opción de Cruz Labrada, lo que les permitiría vender sus tierras de esa zona, alegando que esta ubicación era la más adecuada por la accesibilidad. Finalmente la CFE concedió el lugar elegido por los vecindados para establecer el poblado de Nuevo Balsas que junto con El Caracol, Las Juntas, Acatlán del Río y Nuevo Tomixtlahuacan son los poblados de relocalización, al que se suma el reacomodo parcial del pueblo de Mezcala¹⁷.

Cabe destacar que la confrontación de intereses no sólo se dio entre las comunidades, sino también dentro de la CFE. Escalante asevera que los enfrentamientos se registraron entre el Director de la Coordinadora del Pacífico y la responsable de la Brigada¹⁸. La tensión concluyó con la salida de la Brigada de la zona.

La consulta a las comunidades para decidir la reubicación y los modelos de las nuevas viviendas se hizo en asambleas, a las cuales asistieron no sólo los afectados sino que, en algunos casos, acudieron otros involucrados del gobierno federal con el fin de incidir en la decisión de los afectados. Después de muchos desencuentros, se llegó a un consenso sobre el tipo de vivienda que las compañías constructoras construyeron como casa muestra, pero la CFE no aceptó el diseño por el elevado costo de los materiales, criterio que sirvió para tomar la decisión final, lo que repercutió en la baja calidad y en el incumplimiento de la Comisión de una decisión emanada de la comunidad (Escalante, 1989). Aunado a lo anterior, López *et al* (1988) mencionan que en el caso del poblado Nuevo Balsas, existieron diversos problemas con las viviendas, como pisos dispares, mal acabados, ventanas elaboradas con desperdicios de madera que se deformaron rápidamente, materiales diferentes a los de la región, como la lámina en techos que incrementó el calor de las viviendas, aunado al reducido tamaño de los lotes,

¹⁷ A diferencia de los nuevos poblados, parte del pueblo original de Mezcala se relocalizó en la periferia más elevada.

¹⁸ El conflicto es resultado de dos visiones diferentes de abordar a las comunidades.

que no consideró la cría de animales y siembra de árboles frutales, que hacen parte de la economía campesina.

En el proceso de negociación de la presa el Caracol se distinguen dos fases con sus respectivos problemas, la primera comprende el traslado al poblado Nuevo Balsas y la segunda, posterior a la relocalización (López *et al*, 1988). En el proceso de traslado, la CFE inició el primer reacomodo de la población con la familia Isaura Mota, como modelo para ganar la confianza de quienes aún dudaban que la CFE cumpliría los acuerdos. Se les proporcionó una gratificación de 20 000 pesos, el derecho de elegir su casa, se puso a su disposición servicios de plomería y carpintería, pero una vez conseguida la autorización de las familias para su relocalización, su modelo ejemplar se dejó de seguir.

De la Comunidad Balsas Sur varios habitantes no aceptaron la reubicación y permanecieron en el poblado original hasta que el nivel del agua subió y comenzó a inundar sus viviendas. Debido a que no habían aceptado el reacomodo, la CFE no les dio indemnización su vivienda¹⁹.

Tras la reubicación, los pobladores se quejaron de una serie de promesas incumplidas por parte de la CFE como fueron los avalúos injustos, una menor cantidad de casas de las requeridas, la reducción en la extensión del terreno, la falta de tierras para el cultivo y una distribución diferente a la que tenían originalmente con sus vecinos. Se sumó la inconformidad por la falta de árboles en el nuevo poblado y la suspensión del ferrocarril, transporte económico que les permitía llevar sus productos a los mercados de la región. Por si esto fuera poco, se presentaron nuevas irregularidades como la adjudicación de dos casas y la apropiación de los mejores espacios por los vecindados más ricos en complicidad con los funcionarios de la CFE que asignaron las viviendas.

De acuerdo a entrevistas en campo, el impacto económico con la inundación fue la pérdida del ferrocarril México-Balsas, que antes del proyecto hidroeléctrico era la única vía de comunicación, lo que permitía el desarrollo de un mercado regional. Los productos llegaban por medio de balsas de diferentes partes de la cuenca y se trasladaban por tren hasta Cuernavaca, esto permitía la generación de empleos y la distribución de productos agrícolas a bajo costo. Con la inundación de las vías férreas los productores de la cuenca Alta del Balsas tuvieron que buscar nuevas rutas, además, el acceso a las comunidades comenzó a darse a través de camiones por nuevos caminos construidos, cuyo costo fue superior al del tren. En este sentido, una vez en el poblado Nuevo Balsas los habitantes

¹⁹ Datos obtenidos en entrevista realizada en octubre de 2006 a una afectada del reacomodo.

se enfrentaron al incremento de hasta 100% en los precios de los productos, aumento del desempleo, carencia de agua potable, la hegemonía de los pobladores de Balsas Sur y Norte sobre el resto de los reubicados, el cambio de municipio y dotación de infraestructura urbana que no correspondía con el nivel de ingreso. En este sentido, la instalación de energía eléctrica y otros servicios en los domicilios significó un nuevo costo a los habitantes que no tenían anteriormente, lo que sumado a la pérdida de ingreso los llevó a contraer deudas. Sobre el cambio de municipio, un ejemplo fue el problema de los nuevos asentamientos con la cabecera municipal de Copalillo por la asignación de recursos, el municipio no recibió un incremento en el presupuesto asignado y los nuevos poblados demandan los recursos inexistentes para servicios comunes.

Con respecto a la traza urbana, al igual que el equipamiento mejoró respecto a la localidad anterior, lo que elevó la calidad del paisaje, sin embargo, no resultó funcional. El mercado de la comunidad está abandonado y pudimos constatar que es utilizado como corral. La razón del abandono es su ubicación: en los poblados originales el mercado estaba en el centro junto a las oficinas de gobierno, en el Nuevo Balsas el mercado se localiza en uno de los extremos del poblado lo que implica alejarse del centro económico del asentamiento y una mayor distancia para los posibles compradores. Además, durante la construcción se cerraron los túneles de desvío y compuertas, lo que ocasionó la inundación de los cultivos, árboles frutales, viviendas y de la zona urbana que aún no contaba con decreto expropiatorio (Archivo Histórico del Agua, fondo infraestructura hidráulica, caja 516, expediente 14735).

En el caso del poblado de Mezcala que fue afectado parcialmente, la problemática fue similar a la de Nuevo Balsas con respecto a la mala calidad de las viviendas, su asignación y el costo de la vida, a lo que se sumó el azolve de la presa que repercutió en un aumento del nivel de inundación, que a su vez dañó a los cultivos situados en el margen del río, con las crecidas en temporada de lluvias²⁰. Los afectados se organizaron para exigir una indemnización por los daños ocasionados a la CFE, todavía en 2005 no se respondía satisfactoriamente a los demandantes. En entrevista, uno de los afectados narró las acciones emprendidas para llamar la atención de la Comisión, entre las que destaca el cierre de la carretera federal, con el apoyo de comunidades nahuas del Alto Balsas que se oponían a la construcción de la PH San Juan Tetelcingo, así como la

²⁰ En visita de campo pudimos constatar que el puente de la carretera federal México - Acapulco situado sobre el río Balsas, cerca de Mezcala, tuvo que ser reconstruido elevándolo más de dos metros. Este hecho da prueba de la variación del nivel original de inundación de la presa.

amenaza de tomar la central trasmisora de la electricidad generada por la presa, a una orilla del poblado.

Otra pérdida para la comunidad de Mezcala tras la construcción de la PH El Caracol fue la de los ingresos provenientes del Maratón Náutico del Río Balsas. Antes de que la presa terminara de llenar su vaso, Mezcala era el punto de partida para las lanchas que corrían en el río, la derrama económica también beneficiaba a los poblados ribereños río abajo, una vez inundadas las tierras, el maratón cambió de ruta. Aunque se les prometió construir un parador turístico en el poblado, no se realizó porque el flujo de turistas disminuyó con la construcción de la autopista a Acapulco, lo que cambió la ruta de acceso al puerto. En cambio, se construyó un parador rustico que incluyó palapas y embarcadero en Nuevo Balsas, pero no resultó exitoso. En temporada de verano recibe una afluencia local de visitantes, lejos de recibir los flujos de turistas nacionales y extranjeros que se les prometió. Un factor que afecta al atractivo del sitio es su lejanía, sumado a que los suelos chiclosos de la ribera de la presa concentran gran cantidad de materiales sólidos arrastrados por la corriente que dan un tono turbio al agua.

Aunado a lo anterior, Escalante (1989) identifica que la CFE proporcionó una comunicación oficial escasa. Entre 1978 y 1981²¹ se facilitó un flujo de información relacionada con los trabajos que se preparaban en ese momento y la elaboración del censo socioeconómico. La forma habitual de comunicación se suministraba de manera jerárquica, a través de los grupos de poder locales que estaban a favor del proyecto, por tanto, eran los mejor informados sobre el resto de las comunidades quienes fueron excluidas y se enteraban de manera informal.

Con respecto a la meta de política de desarrollo integral, en agosto de 1987 diversas dependencias federales y el gobierno del estado firmaron un convenio único de Desarrollo del Estado de Guerrero, cuyo objetivo era la coordinación de las acciones de las partes para instrumentar una política de desarrollo regional a partir de la Central Hidroeléctrica el Caracol (tabla 4). El acuerdo partía de la idea que la presa podía impulsar un cambio regional en lo económico, dado que el embalse posibilitaba el desarrollo de nuevas actividades:

²¹ Por la presencia de la Brigada.

“Su sola existencia facilita el desarrollo de la comunicación lacustre, lo que contribuirá a la agilización de las relaciones económicas, sociales y culturales y crea un ecosistema, rico en elementos y recursos explotables que ofrece grandes posibilidades para la inversión y el desarrollo de nuevas actividades” (Archivo Histórico del Agua, fondo infraestructura hidráulica, Caja 463 Expediente 13139).

Para concretar el objetivo, las secretarías firmantes acordaron realizar acciones concretas. La entonces Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) se comprometió a realizar estudios de exploración tendientes a la localización de minerales y en su caso, gestionar ante las entidades competentes trabajos de investigación en el área de energía y siderurgia encaminada a su explotación y aprovechamiento.

Tabla 4

Dependencias que suscribieron el convenio único de Desarrollo del Estado de Guerrero

| Dependencia | Responsable |
|---|---------------------------------|
| Gobierno del Estado de Guerrero | Jose Francisco Ruíz Massieu |
| Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero | Jesús Ramírez Guerrero |
| Secretaría de programación y Presupuesto | Carlos Salinas de Gortari |
| SEMIP | Alfredo del Mazo González |
| SEDUE | Manuel Camacho Solís |
| SARH | Eduardo Pesqueira Olea |
| CFE | Fernando Hiriart Valderrama |
| Ayuntamiento de Heliodoro Castillo | Gumersindo Rodríguez Altamirano |
| Ayuntamiento de Apaxtla de Castrejon | Emilio Trujillo Varela |
| Ayuntamiento de Cuetzala del Progreso | Napoleón Rabadán Guzmán |

El presidente C Miguel de la Madrid Hurtado firmó como testigo de honor

Fuente: Elaboración propia con base en AHA, fondo infraestructura hidráulica, Caja 463 Expediente 13139.

Mientras que la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) prometió establecer normas y lineamientos para el uso óptimo del agua del embalse, con fines agropecuarios, además de organizar y fomentar la investigación agrícola, frutícola, ganadera, apícola y silvícola, estableciendo laboratorios, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) se comprometió a establecer los criterios ecológicos para la preservación de los ecosistemas y de la calidad del medio ambiente. La CFE se comprometió a coordinarse con la SARH para que la presa cumpliera su fin de generar electricidad y propiciara el desarrollo de las actividades agropecuarias. Además de gestionar la desincorporación o cambio de función de los inmuebles construidos con

motivo de la presa para que fueran utilizados en actividades que estimularían el desarrollo de la región. Por su parte, el gobierno del Estado de Guerrero asumió el compromiso de promover y establecer programas estatales de desarrollo socioeconómico así como coordinar los respectivos programas y acciones propuestos por las dependencias federales en las zonas adyacentes a la presa. Los Ayuntamientos acordaron apoyar y facilitar la implementación de las acciones que el Gobierno estatal y las dependencias federales realizarían en sus jurisdicciones.

Una limitación del convenio fue que su firma se dio poco tiempo antes de concluir el sexenio, por lo que no hubo continuidad al incorporarse nuevos funcionarios quienes no asumieron los compromisos contraídos por sus antecesores. Además, el convenio se suscribió después de entrada en operación la presa²² y no durante el proceso de la obra, como se estipuló en las metas iniciales del proyecto.

En síntesis, las propuestas de la CFE no fueron cumplidas. En el transcurso de ocho años no se realizó trabajo para capacitar a la población en talleres de libre acceso, no hubo proyectos en función de la organización agrícola o pecuaria y, si bien se impulsaron otros proyectos, como el de pesca, estos no tuvieron éxito por falta de inversión, producto a su vez de gestiones inconclusas por los abrumadores trámites burocráticos.

En este sentido, los incumplimientos de la Comisión se constatan en las quejas presentadas por los afectados a distintas instancias de gobierno, mismas que se documentan en el Archivo Histórico del Agua, que se resumen en lo siguiente: la CFE solicitó las expropiaciones del Ejido Río Balsas, las del Ejido Puente Balsas Sur y del ejido Tecomapa, pero no pidió el terreno que ocupa la línea de transmisión, ni el del asentamiento de la nueva zona urbana, mucho menos el área de carreteras. Tampoco dió a conocer el plan de la superficie solicitada ni la propuesta de indemnización.

Tras siete años de quejas, en una carta dirigida al presidente de la República en 1986, los inconformes señalan:

“ La CFE haciéndose como único representante del Gobierno pisotea los derechos agrarios: invade y despoja; toma posesión de lo que quiere; ordena cortar el suministro del agua y la energía eléctrica a nuestro pueblo de Balsas; interviene y suspende el servicio ferroviario y de autobuses; ordena el desmantelamiento de escuelas, etc. Presiona para que los avecindados y ejidatarios reciban cheques con valores irrisorios señalados a sus propiedades; se ampara en unos avalúos de dudoso valor” (Archivo Histórico del Agua, fondo infraestructura hidráulica, caja 516, expediente 14735).

²² 16 de diciembre de 1986 (CFE consulta en red)

Por lo anterior, se deduce que la CFE actuó de manera impositiva. Llama la atención otra carta dirigida al presidente de México con fecha del 26 de febrero de 1987 en donde se expresa el reclamo por casas y un templo evangélico. A continuación transcribimos una frase donde se sintetiza el malestar y la forma de operar de la paraestatal:

“Entiendo que cuando se hace una afectación se repone la finca o lo que sea tal y como estaba, tratando de mejorar a los afectados y en este caso no fue [así] no por el sistema del lejano oeste según la historia”²³ (Archivo Histórico del Agua, acervo infraestructura hidráulica, Caja 226, expediente 5842 foja 14).

Otra dato que da prueba del incumplimiento de las metas establecidas por la CFE se aprecia en un corrido popular compuesto con motivo de la presa, en el que se lee el sentir de la población:

*Ya no tendremos parcela
para poder trabajar
en vez de arado tendremos
una cuerda pa pescar*

*El campesino no vale
no cuenta nada en la historia
al pobre no le hacen caso
porque no tiene corbata
le van a quitar las tierras
que dió Emiliano Zapata²⁴*

Pese a que la CFE es la responsable directa de la construcción de la obra, las quejas también van dirigidas a otras secretarías, que hicieron caso omiso de las demandas interpuestas en sus respectivos rubros, como en el caso de la Secretaría de la Reforma Agraria, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Por lo señalado anteriormente, el planteamiento institucional de la CFE que enarbola el proyecto como exitoso en todos los aspectos, contrasta fuertemente con el sentir de la población local que el proyecto dista de ser un modelo a seguir.

²³ La carta la reproducimos tal cual, la original se escribió a mano.

²⁴ La letra completa se encuentra en el Anexo documentos

Marginación en los municipios afectados por la PH El Caracol

Con el fin de evaluar los efectos de la PH El Caracol en su área de influencia, se analizan los datos del índice de marginación de los años 1990 a 2005. Bajo el supuesto, de que la PH EL Caracol, contribuiría a un desarrollo económico en la región del embalse, entonces los índices de marginación tenderán a reducirse en los años posteriores a su construcción.

Para comparar el nivel de marginación de las localidades en los diferentes años, los datos se estandarizaron considerando la siguiente metodología. Por cada año se identificó el municipio que registró menor marginación, este parámetro representó el valor de comparación (VC), es decir, la unidad para la serie de datos de ese año. Los datos del resto de los municipios se convirtieron en valores relacionados con la unidad, lo que se logró al dividir el índice de marginación de cada municipio entre el valor correspondiente al municipio que ocupamos como parámetro.

Para el 1990 y el 2005 el dato de marginación que se tomó como VC fue del municipio de Iguala de la Independencia, mientras que para el 2000 se tomó el dato de Chilpancingo (Tabla 5).²⁵

Tabla 5
Municipios con menor índice de marginación 1990 - 2005

| Clave | Municipio | 1990 | | | 2000 | | | 2005 | | |
|-------|----------------------------|--------|-------|------|--------|-------|------|--------|-------|------|
| | | Índice | Grado | VC | Índice | Grado | VC | Índice | Grado | VC |
| 12029 | Chilpancingo de los Bravo | | | | -1.051 | B | 1.00 | | | |
| 12035 | Iguala de La Independencia | -1.143 | B | 1.00 | | | | -0.984 | B | 1.00 |

VC Valor de Comparación; A Alto; B Bajo; M Medio; MA Muy Alto
Fuente elaboración propia con datos de CONAPO

Por tanto, los datos estandarizados para el año 1990 se obtuvieron al dividir el valor de marginación de cada municipio entre -1.143 que fue el VC de ese año. Para estandarizar los valores del 2000 se dividió entre -1.051 y los valores del 2005 entre -0.984.

Por ejemplo el municipio de Apaxtla en 1990 tuvo un índice de marginación de 0.108, para estandarizar el valor aplicamos la siguiente operación:

²⁵ El resultado del cálculo se muestran en la tabla del Anexo I d. Los datos de marginación absoluta se muestran en el anexo cartográfico.

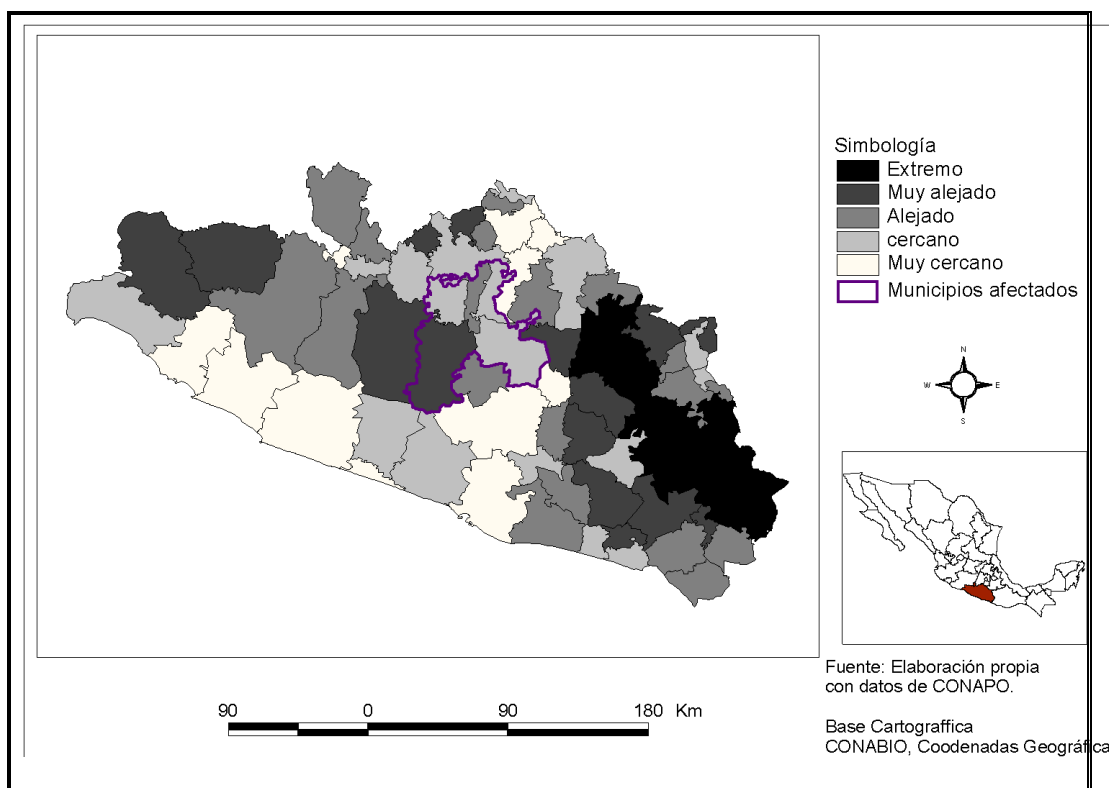
$$VE \text{ Apaxtla} = \frac{\text{Índice Marginación}}{VC} = \frac{0.108}{-1.143} = -0.09$$

Los datos estandarizados permitieron crear una nueva escala de medida comparable, de tal forma que los valores cercanos a la unidad representan niveles de marginación menores con respecto al VC.

Después del cálculo se agruparon los resultados en cinco rangos con respecto al VC para cartografiarlos: muy cercano, cercano, alejado, muy alejado y extremo.

Revisando los mapas se llegó al siguiente análisis.

Mapa 2 Marginación comparada con el municipio con el menor índice, 1990



Se obtuvo que en el año 1990, los municipios con los índices de marginación más alejados del parámetro de comparación, se ubicaron en la región de la Montaña (Mapa 2)²⁶. Por el contrario los municipios más cercanos al índice de marginación de Iguala fueron los municipios ubicados en la región de la Costa Grande, Acapulco y Chilpancingo, de la región Centro, que en conjunto forman una línea que coinciden con el

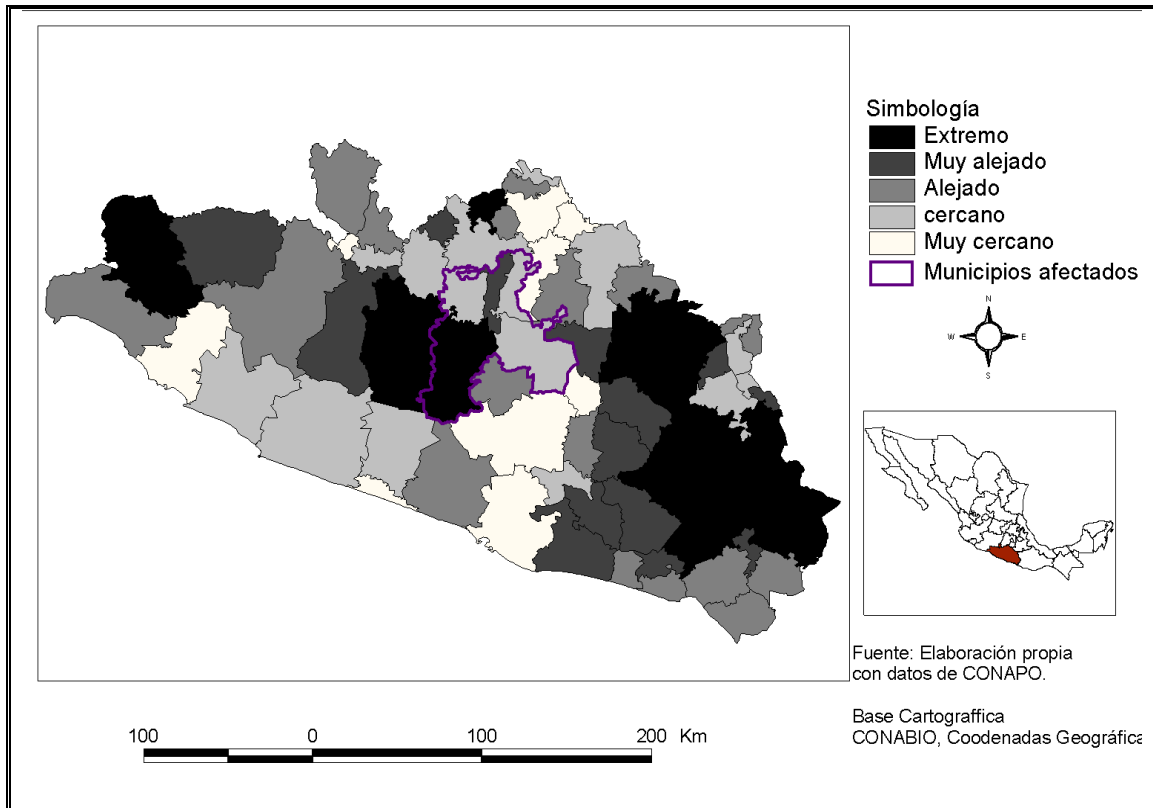
²⁶ Para ver el mapa de regiones económicas reconocidas por el gobierno del Estado ver Anexo III a.

sistema de carreteras más importantes del Estado, donde se ha desarrollado principalmente actividades de servicios de la que destaca la actividad turística.

De los cinco municipios afectados por la presa El Caracol, los datos mostraron que Apaxtla y Eduardo Neri obtuvieron cercanía con el índice de Iguala; sin embargo, Cuetzala del Progreso estuvo alejado y aún más alejado se encontró el municipio General Heliodoro Castillo. Con respecto a la clasificación nacional los municipios presentaron un grado de marginación alto y muy alto.

Para el año 2000, en el estado se incrementó la marginación con relación al municipio de Chilpancingo (ver Mapa 3).

Mapa 3 Marginación comparada con el municipio con menor índice, 2000

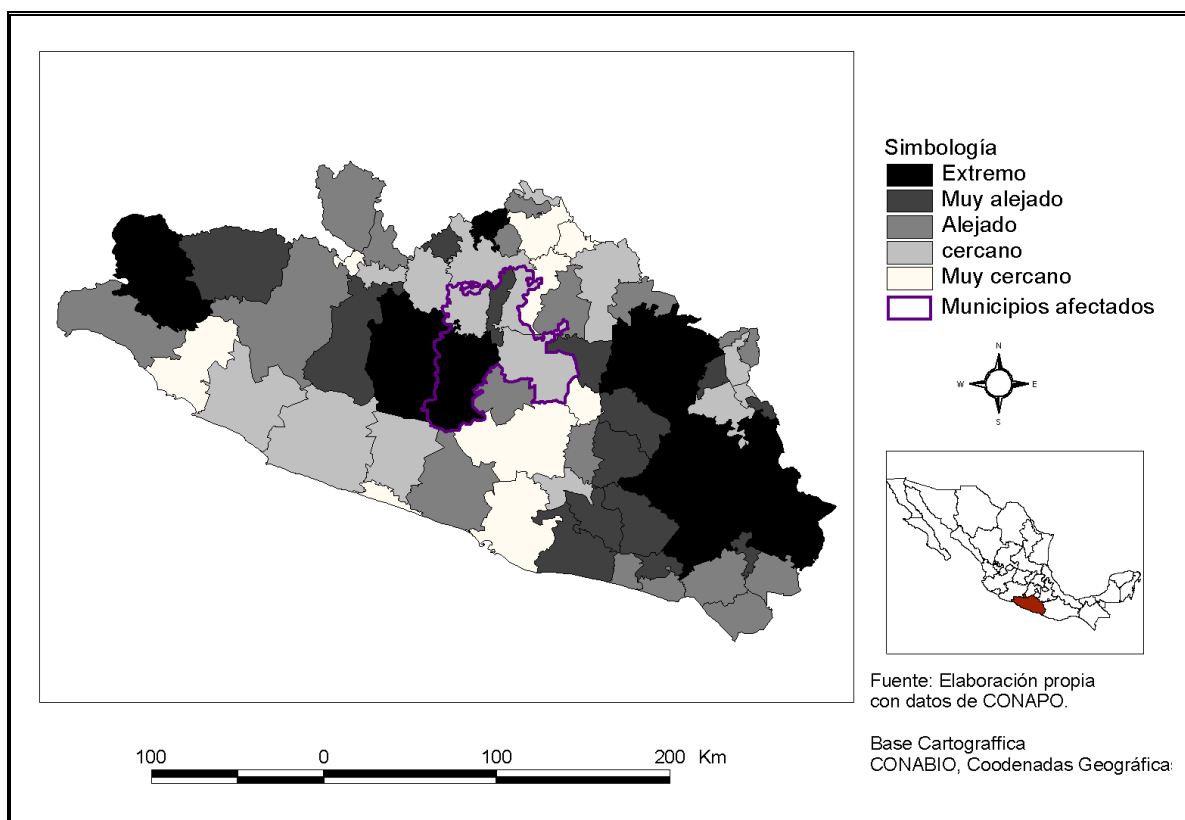


Los municipios de la región de la Montaña continuaron presentando valores negativos, mientras que la región de Tierra Caliente empezó a registrar índices “en extremo” alejados del valor de Chilpancingo. En la región de estudio, el municipio General Heliodoro Castillo presentó un índice de marginación mayor que en 1990, lo que condujo a alejarse al extremo con relación a Chilpancingo. Una situación similar la tuvo el

municipio de Cuetzala del Progreso que de un índice de marginación de 0.637, en 1990, pasó a 0.998 en el 2000. Por su parte Apaxtla, Eduardo Neri y Cocula permanecen en el rango cercano al índice de Chilpancingo.

Los datos del año 2005 revelaron que el índice de menor marginación a nivel estatal lo retomó Iguala. Con respecto a este municipio el panorama estatal tuvo un retroceso, dado que más municipios se alejan de él, incluso se incrementó el rango del “extremo alejados” (Mapa 4).

Mapa 4 Marginación comparada con el municipio con el menor índice, 2005.



Los municipios pertenecientes a la región de la Montaña que, en los años de 1990 y 2000 destacaron en el rango de “extremo alejados”, nuevamente registraron índices de marginación “alejados” de Iguala. Se suman al grupo municipios adyacentes de las regiones de la Costa Chica, Centro y Norte. También los municipios de Tierra Caliente registraron índices de marginación en “extremo alejados” de Iguala.

Los municipios afectados por la presa el Caracol, se alejaron del parámetro (Mapa 4). En el caso de Cuetzala del Progreso es más evidente, si se considera el grado de

marginación con respecto a la clasificación nacional en el que se muestra una caída del año 2000 al 2005 del rango “alta marginación” a “muy alta”.

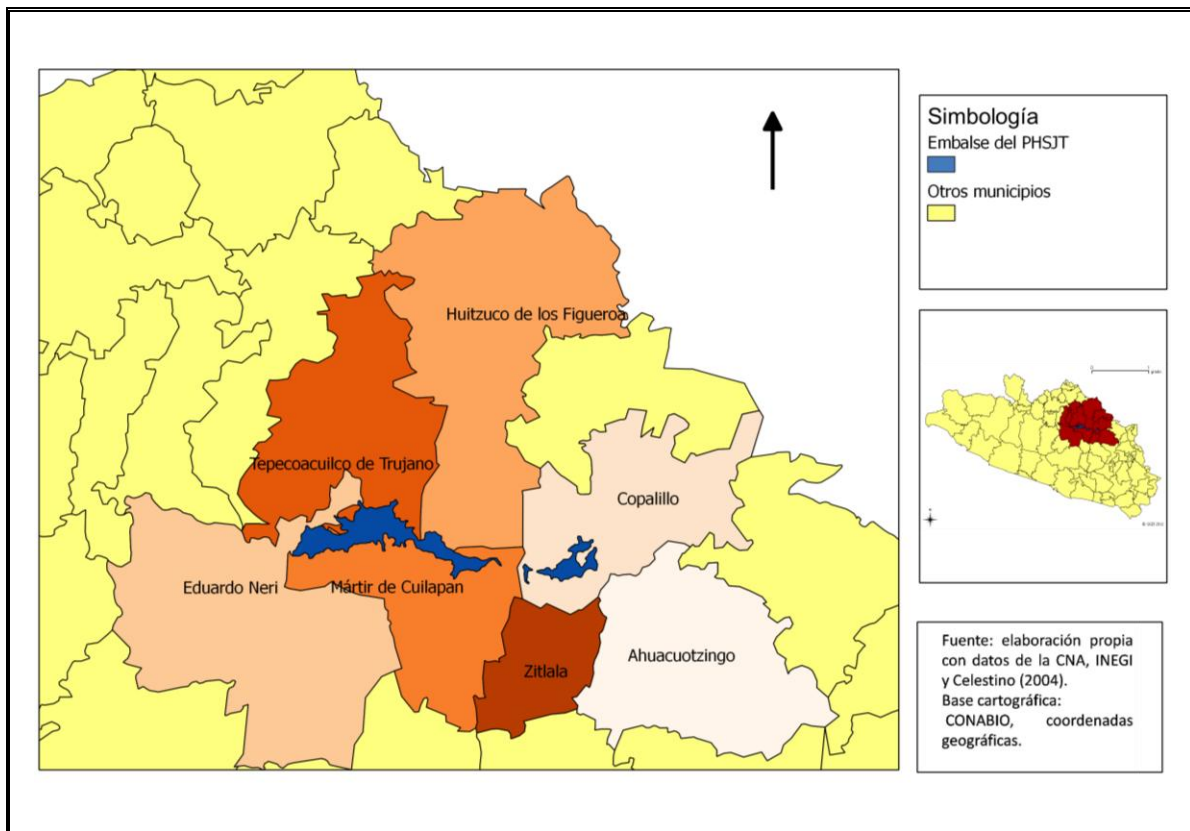
En resumen, la mayor parte de los municipios del Estado se alejaron del índice más bajo de migración, lo que indica que las condiciones con respecto a Iguala, en 1990 y 2005, y con relación a Chilpancingo para el año 2000, son menos favorables.

Referente a la región afectada por la presa El Caracol, la tendencia estatal se repite, por tanto, los beneficios económicos propuestos por la CFE no se observan en términos generales en los valores de los municipios.

Presas hidroeléctricas San Juan Tetelcingo

El proyecto Hidrológico San Juan Tetelcingo (PHSJT) se planeó en la región denominada Alto Balsas (Mapa 4), que inicia en el Puente Mezcala I y termina en Papalutla, correspondiente a los municipios de Tepecoacuilco de Trujano, Huitzuc de los Figueroa, Eduardo Neri, Martir de Cuilapan, Copalillo, Zitlala y Ahuacuotzingo (Celestino, 2004).

Mapa 5 Municipios afectados por el PHSJT.



La región del Alto Balsas está ocupada por comunidades indígenas nahuas desde la época prehispánica, en donde los centros más importantes eran Oapan y Tlalcozotitlán, ambos fueron señoríos que pertenecían a la antigua provincia tributaria de Tepecoacuilco.

“Los pueblos del Balsas entregaban al imperio azteca entre otros productos tejidos de algodón, hachas de cobre, collares de jade y oro, trajes de guerrero, lo mismo que cacao, maíz, frijol y miel” (Good y Barrientos 2004: 32).

Good y Barrientos han señalado la importancia de la región durante la colonia, pues gracias a su ubicación estratégica eran paso obligado en el camino real entre México y Acapulco. Incluso los nahuas de la región apoyaban el comercio derivado de la Nao de China dando de comer, cuidando a los animales de los viajeros o bien, trabajando como cargadores y arrieros transportando la mercancía.

Pese a la incorporación a la estructura económica establecida y la asimilación a la cultural colonial, mantuvieron su cohesión social lo que les permitió resistir de diversas maneras. García Leyva (2003) identifica entre las formas de resistencia a la desobediencia, la negación a pagar impuestos y las revueltas.

Con la formación del Estado Mexicano, el gobierno,

“...como muchos otros estados del mundo, buscó desde sus orígenes suprimir lo diverso pues interesaba sobre todo alcanzar la homogeneidad étnica y cultural” (Velasco, 2003: 47).

Las comunidades indígenas en nuestro país, no solo enfrentaron la conquista también sufrieron el despojo de sus tierras y ya entrado el siglo XX, los planes de desarrollo y programas impulsados por las autoridades, como veremos a continuación.

A principios de los años 40 se percibe un cambio en la configuración territorial de la región por la construcción de la carretera pavimentada a Acapulco²⁷, los hasta entonces centros económicos y políticos del Alto Balsas; San Agustín Oapan y Ameyaltepec, cedieron su lugar a Xalitla y Mezcala que se localizan al margen de la carretera (Hemond, 1994). Para Garza (2009) la organización del territorio se transforma por el papel asignado al área costera del municipio de Acapulco a partir de la década de 1940, ya que

²⁷ Si bien la primera Carretera México-Acapulco se inauguró en 1927, el camino era de tierra y grava compactada. En la década de los cuarenta el trazo se pavimenta.

las actividades terciarias desarrolladas ahí propiciaron el reforzamiento del eje Acapulco–centro de México.

Las comunidades del Alto Balsas aprovecharon el impulso a la actividad turística del puerto de Acapulco y Cuernavaca para desplazarse a estos polos de desarrollo económico para vender sus artesanías. Al principio, solo alfarería, pero con el tiempo aprendieron el gusto de colores y diseños para el mercado extranjero, lo que llevó a una transformación del producto. Así en 1960 inició la pinta en papel amate, que era más práctico transportar y más colorido (Good Eshelman, 1988).

El papel amate se fabricaba en San Pablito Pahuatlán, en la Sierra Norte de Puebla, dada la demanda considerable, no era necesario ir hasta allá por el producto, los transportistas lo llevaban a las comunidades. Con el fin de llegar directamente al consumidor, los nahuas del Alto Balsas establecieron una red de comercialización que implicó desplazarse a diferentes partes de la República, principalmente a los centros turísticos y ciudades. Good Eshelman (1988) plantea que había una división del trabajo rotativa a nivel familiar, los que salían a vender eran acompañados por los más pequeños para que aprendieran a ofrecer el producto, los que se quedaban trabajaban en las labores del campo y el hogar paralelamente a mejorar e innovar los diseños de las pinturas.

En el periodo del presidente José López Portillo (1976-1982) se construyeron locales comerciales sobre la carretera federal a Acapulco a la altura de Xalitla para ofrecer las artesanías, pero a raíz de la construcción de la autopista Cuernavaca – Acapulco se redujo el flujo de turistas mermando las ventas hasta el punto que muchos de los locales tuvieron que cerrar. Hemond (1994) señala que la especialización comercial del papel amate transformó el modo de vida tradicional de las localidades principalmente en Xalitla y Mezcala. La autora estima que hubo una declinación de la agricultura, un aumento en la monetarización de los intercambios y en la adquisición de productos manufacturados (TV, electrodomésticos).

A pesar de estas vicisitudes, los nahuas del Alto Balsas han conservado sus formas de organización y el conocimiento de su entorno, transmitido de generación a generación, que les permite obtener su sustento y mantenerse al margen de la vida basada en el consumo. Es por eso, que la lucha en contra de la presa no recurrió a la defensa del entorno, es decir, el discurso no recurrió a la protección ambiental. Los indígenas nahuas comprendieron que lo más importante era su ancestral cultura y ese fue el pilar de su lucha.

Antecedentes del conflicto

Con la reducción del turismo a partir de construcción de la autopista Cuernavaca – Acapulco, a fines de los años 80, vino la disminución en la venta de pinturas en papel amate, lo cual obligó a los artesanos a cambiar una vez más el tipo de artesanía y ahora elaboran collares y pulseras de piedras adquiridas en las zonas urbanas, y vasijas de barro con coloridos diseños. Otra forma de ingreso son las remesas que envían los familiares desde las distintas ciudades a las que migraron (Hemond, 1994). Good y Barrientos (2004) reconocen que en algunos poblados, los hombres se emplean temporalmente como peones para la pizca de jitomate, melón y otros cultivos de exportación en Sonora y Sinaloa. A lo anterior hay que sumar los estragos ocasionados por los programas y proyectos gubernamentales en la zona.

Hemond (1994) identifica que antes del conflicto ocasionado por la PHSJT la vida comunitaria estaba desquebrajada por la venta de artesanías, así como la intervención de organizaciones exteriores entre ellas el Instituto Nacional Indigenista que fomentaban el individualismo. Puesto que la venta de productos y asignación de los recursos provenientes de las instituciones no se daba de forma colectiva. Otro problema fue la tenencia de la tierra, De la Cruz (2005) reporta que en 1964, comuneros y ejidatarios de San Juan Totolcintla y Tula del Río, despojaron a San Agustín Ostotipan de 3 mil hectáreas de tierras cultivables. El mismo predio fue asignado a los tres pueblos por distintos decretos presidenciales, lo que desató enfrentamientos y muertes.

Antes, se había afectado a los Bienes Comunales de Mezcala y Valerio Trujano, al occidente de la región, por la construcción de la carretera Federal a Acapulco en los años 20 y más tarde por la PH El Caracol en los años 80. Por si fuera poco, con la construcción de dicha carretera, se propició una polarización económica y cultural en la zona, que fomentó la migración interregional²⁸ y una desvalorización de la cultura indígena, en razón de su localización, es decir, se consideran más civilizados los Xalitecos que un habitante de la ribera o de las colinas, dado que los primeros al estar al margen de la carretera tenían acceso a la “civilización” mientras que los otros no (Hemond, 1994). Y es que la vida para las localidades ubicadas lejos de la carretera era dura, hasta antes de

²⁸ Hemond (1994) afirma que la población de Ameyaltepec se cambió a Mezcala mientras que Xalitla recibe a habitantes de Ameyaltepec, San Juan Oapan y Analco.

la construcción de la brecha de Xalitla a San Francisco Ozomatlan²⁹, en la década de los años setenta, había que llegar a pie o por el río en Balsas.

La demora en la construcción de infraestructura sin duda se debe a la organización y constitución municipal del Estado. Las localidades del Alto Balsas pertenecen a diferentes municipios, lo que dificulta gestionar obras en común, sumado a la falta de recursos y de sensibilidad de los presidentes municipales hacia las comunidades indígenas. Haciendo referencia a Tetelcingo Celestino afirma que

“...no recibe recurso económicos de su municipio, los recursos se traducen en materiales de construcción para obras de beneficio que solicita la comunidad” (Celestino, 2004: 47).

Es decir, si las localidades indígenas requieren de obras y recursos, los deben gestionar en sus respectivas cabeceras municipales. Este problema fue visualizado con claridad por las comunidades a partir del conflicto de la PHSJT, por lo que propusieron la creación del municipio del Alto Balsas, tomando al río como articulador del territorio y no como frontera³⁰. Situación opuesta presentaron los grandes proyectos, financiados con elevadas sumas de capital, obtenido por lo general, a través de préstamos de instituciones mundiales. Caso concreto es la Autopista del Sol, México- Acapulco, obra salinista que atraviesa la región de Noreste a suroeste dividiéndola en dos. Su construcción afectó los bienes comunales de Tuliman, San Francisco Ozomatlan y Tula del Río, no sólo por expropiación sino también por la obtención de materiales como arena y grava extraídos sin autorización de las comunidades. A lo anteriormente señalado, se sumó la injerencia del gobierno federal en la zona a través de PEMEX con la perforación del pozo Zoquiapan I cerca de la comunidad de Ahuelican (Celestino, 2004).

Bajo este panorama a fines de la década de los años ochenta, la CFE inició sus estudios de factibilidad de la PHSJT. Existen diferentes versiones acerca de cómo se enteraron las comunidades del proyecto. Hemond (1994) señala que recibieron la información a raíz de indiscreciones sin precisar de quién, por su parte, GEA A.C (1993a) sitúa la fuente de información en el diario de Guerrero, donde se publicó que pobladores de la región habían reconocido a trabajadores de la CFE, mientras realizaban trabajos en la zona como parte de los estudios para integrar el expediente técnico. Para

²⁹ semipavimentada hasta 1992 gracias al CPNAB (Celestino: 38p).

³⁰ Si se observa la delimitación de los municipios se constatará que el río es tomado como frontera, pese a que las relaciones económicas y sociales de la zona no obedecen a esta delimitación arbitraria.

Díaz Marcelino (1992) desde 1959 la CFE venía trabajando en el lugar elegido para construir la cortina, y que, el proyecto se conoce cuando unos antropólogos, invitados por la CFE para integrar los estudios sociales, alertan a las comunidades del daño social y ecológico que acarrearía el proyecto hidráulico. Además, desde la década de los años sesenta, a sugerencia de la Comisión del Balsas, se realizaron diversos estudios a fin de concretar un proyecto hidroeléctrico en la región.

Al enterarse las comunidades del PH se reunieron para discutir el problema, decidiendo la constitución del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB) el 21 octubre de 1990 (GEA A.C, 1993a). Desde su origen, el CPNAB cuestionó la realización del proyecto, y no es para menos, si se toma en consideración que no muy lejos, en la cuenca Media del río Balsas, se construyó la PH El Caracol, con los efectos sociales, económicos y ambientales analizados anteriormente y como escribió Hemond:

“Los testimonios de los habitantes del Nuevo Balsas, expulsados de sus tierras por la presa el Caracol ofrece a los nahuas del Alto Balsas la ilustración perfecta de su propio futuro” (1994:396).

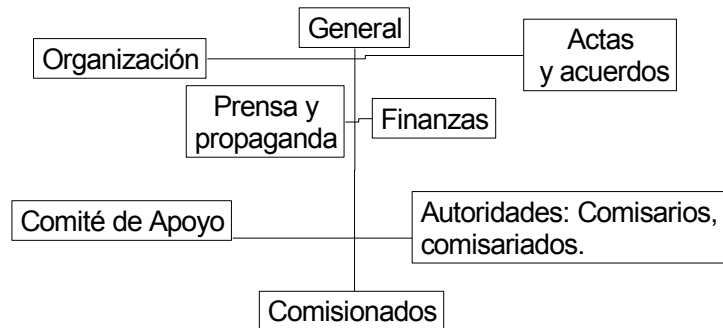
Actores políticos y negociación

El actor político central del proceso de negociación fue el CPNAB, constituido por dirigentes comunales y representantes de los pueblos afectados.³¹ La organización buscó una estructura horizontal, por lo que rescató la forma tradicional para la toma de decisiones, la asamblea.

Hemond (1994) señala que en las asambleas públicas, eran escuchadas las sugerencias de los pobladores y debatidas respetuosamente para llegar a un consenso. Para facilitar las tareas, la organización cayó en cinco secretarios; uno general, otros de organización, de prensa y propaganda, de Actas y acuerdos y de finanzas, cada uno supeditado a los consensos emanados de la asamblea.

³¹ Ahuelican, Ahuehuepan, Ameyaltepec, Analco, Maxela, Xalitla, Tlamamacan, Oacatzongo, Oapan, Tecuiciapan, Tula del Río, Oztotipna, Ozomatlán, Ahuetlixpa, Totolzitla, Tetelcingo, Tlapehualapa, Copalillo, Tlalcozahutitlán, Las Juntas y Minas, Cascalote, Cuaquezalco, Hueyxale, Axomulco, Hueyeatl, Ahuiztitlán, Las Tinajas, Acingo de las Flores, Atlenamique, Tenantitlán de los Amores, Zicapa, Tlayahualco, Mezquitepec, Oztutla, Meztitlán y Papalutla. (Celestino, 2004: 53p)

Esquema 8



Elaboración propia con base en García Ortega (2000) y Díaz (1992).

Formaban parte de la estructura los Comisarios, comisariados y comisionados fuera de la región, además de un grupo de académicos de diversas instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología y la Universidad Nacional Autónoma de México, que asesoraron a la organización en diferentes ámbitos.

“Este órgano constituyó un soporte para la reflexión política más allá de la frontera regional... son parte del movimiento con reconocimiento de la contraparte y entre estos agentes se encuentran abogados, ambientalistas, investigadores sociales activistas de los derechos humanos, maestros, religiosos o agrónomos” (García, 2000: 57)

García (2000) señala que para los nahuas el comité constituyó una red de relaciones sociales en el mundo exterior actuando como balanza de equilibrio entre las mismas fuerzas internas. De tal forma, existía una distribución de funciones, los secretarios se encargaron de la política local y de la negociación directa con el gobierno federal, mientras que el comité de apoyo, junto con los comisionados, realizó acciones extra regionales de difusión. El CPNAB promovió el trabajo de los jóvenes, sobre todo aquellos que tenían estudios formales, que participaron en las tomas de decisión y en la organización. Destacan doce que contaban con estudios secundarios o superior, los xalitecos se distinguen por la presencia de tres antropólogos (Hemond, 1994).

Por parte del gobierno las dependencias involucradas son diversas, entre las que destacan la CFE, quien propuso y debía ejecutar la obra, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Ecología (SEDUE), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Instituto Nacional Indigenista (INI).

En la etapa crucial de la tensión, el gobierno nombró como interlocutor al entonces Director del INI, el Dr. Arturo Warman, quien prometió dar solución a las dudas y demandas de los inconformes. Sin embargo, en los hechos la decisión no dependía del titular. En general, una constante en el discurso de las autoridades fue la negación del proyecto, en algunos casos, se reconocía que se realizaban estudios geológicos. Al respecto Hemond (1994) caracteriza la negativa como una forma de altivez que prueba el menosprecio del poder mestizo hacia los indios.

Los partidos políticos también participaron en el conflicto. Por un lado, el Partido de la Revolución Institucional (PRI), trató de capitalizar la inconformidad a su favor, mientras que el partido de oposición Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) se solidarizó con las demandas del CPNAB. En la mayor parte de la región el PRI gobernaba, por lo que el único presidente municipal que protestó por el PHSJT fue el de Copalillo, militante del PRT.

Los presidentes municipales de extracción priista, trataron por todos los medios de controlar al movimiento para convertirse en interlocutores ante el gobierno. Sin embargo, el sorprendente interés de los priistas por las localidades indígenas y el discurso de respaldo a la versión oficial del gobierno del Estado y de la CFE, alertó a los afectados quienes evitaron no sólo que los presidentes municipales formaran parte de la organización, sino que se enteraran de los planes. Al respecto, la lengua náhuatl jugó un papel primordial, dado que los presidentes municipales mestizos no la hablaban, cuando las autoridades acudían a las asambleas, los indígenas utilizaban el lenguaje como una forma de protección (Hemond, 1994).

Por otro lado, en el marco de las elecciones para diputados federales por el Estado del año 1991, el candidato del PRI acudió a la zona, en la búsqueda de votos prometió gestionar la cancelación de la obra si llegaba al poder. Más tarde cuando se consiguió frenar el proyecto, se adjudicó el triunfo del movimiento, afirmando que gracias a su intervención se logró la suspensión de la obra.

Hay que señalar la presencia de organizaciones no gubernamentales como el Grupo de Estudios Ambientales A.C (GEA), quienes asesoraron en cuestiones específicas cuando el CPNAB lo solicitó. Sobresale la ayuda para la publicación de material informativo, la implementación de talleres y la elaboración del plan de desarrollo alternativo para la zona del Alto Balsas.

Durante la coyuntura también destaca la presencia del grupo 500 Años de Resistencia, del que forman parte las comunidades inconformes. Con la formación del CPNAB los nahuas buscaron enfrentar a las autoridades del Estado de Guerrero y del gobierno federal, quienes negaron la existencia del proyecto aunque reconocieron que se hacían estudios geológicos, plantearon incluso enormes ventajas y beneficios que traería una obra de tal magnitud.

“Lo cierto es que por más que tratamos de entender ese supuesto beneficio de desarrollo, no logramos ver ningún beneficio para nuestros pueblos porque dicho proyecto sólo trae aparejada la muerte y destrucción de nuestras tierras” (Díaz de Jesús, 2004).

Ante la conformación del CPNAB, el gobierno estatal reconocía sólo al presidente municipal de Copalillo como interlocutor (Díaz de Jesús, 2004), más tarde el gobierno tuvo que reconocer y atender la demanda fundamental de las comunidades del Alto Balsas: la cancelación de la presa.

Las comunidades obtenían información del proyecto hidroeléctrico de forma indirecta, ya sea a través de periódicos o de personas que, al enterarse de los planes, y como una forma de solidaridad, filtraban información. Las comunidades se quejaban de que existía la intención de reubicar a los poblados agrupándolos en dos nuevos centros de asentamiento sobre la superficie no utilizadas de las tierras comunales (Hemond, 1994).³²

Manifestaciones de inconformidad

El pueblo que inició la resistencia fue Xilitla, seguramente por ser el más accesible a la carretera y fueron los primeros que se enteraron de los planes de la CFE³³. Las acciones iniciales de resistencia se centraron en la difusión de la información a través de asambleas, derivando más tarde en la conformación del CPNAB. En las asambleas celebradas, se acentuaba el caso de la PH “El Caracol”, donde la CFE incumplió con acuerdos y se dió una serie de irregularidades en el proceso de reacomodo. Desde el principio los pobladores no estuvieron de acuerdo con el proyecto, lo consideraban una imposición, un despojo que se suma a la larga historia desde la colonia.

³² En su artículo, rescata el sentir de los pobladores “nos quieren mandar al monte, a los cerros donde no hay nada”.

³³ Moreno, Sergio (2006) Entrevista realizada en septiembre en el Centro Nacional de las Artes.

“[Con el PH] el hombre tecnológico, viene a despojarnos e imponerse en nombre del desarrollo y progreso, lo que los incultos españoles no lograron” (Moreno, 1991).

Ante todo, el rechazo a la presa hidroeléctrica implica la defensa de un proyecto de vida para los nahuas del Alto Balsas, basado en la agricultura y en la elaboración y comercialización de las artesanías (Celestino, 2004). Con el tiempo y a la negativa del gobierno en dar información, las acciones emprendidas por CPNAB buscaron un impacto fuera de la región. En ese sentido, realizaron denuncias a nivel internacional a través de foros mundiales y medios de comunicación.

Entre las últimas acciones emprendidas destacaron la marcha “Por la Dignidad y la Resistencia de los Pueblos Indígenas”, que partió desde Chilpancingo, hasta el Zócalo de la Ciudad de México, del 2 al 12 de octubre de 1992, concluyendo con una huelga de hambre en la catedral Metropolitana. La huelga de hambre fue levantada con la firma de cancelación del proyecto, lo que se logró el 13 de octubre de 1992, con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

La resistencia se acompañó de la elaboración de un proyecto que propuso una alternativa de desarrollo desde su perspectiva indígena, dicho documento se denominó Proyecto Alternativo para la Región del Alto Balsas³⁴, comúnmente llamado "Plan Alto Balsas", que se basa en la planificación participativa “de abajo hacia arriba”.

Acciones jurídicas

Con el conflicto los pueblos nahuas del Alto Balsas revaloraron su identidad indígena, por lo que la lucha política contra la construcción de la PHSJT consolidó las relaciones intercomunitarias, que anteriormente estaban deterioradas. De tal forma, los Xaliltecos reconocieron el valor cultural e histórico de los nahuas de Oapan, el activismo de los nahuas de la ribera del río también fue reconocida (Hemond, 1994).

La defensa de su territorio, destacando su condición de indígenas les permitió reunir una gran cantidad de apoyo de otras comunidades y de la sociedad civil en general, que de una u otra manera se sensibilizó al conocer algunos antecedentes dramáticos

³⁴ Para consultar una versión del documento vea http://www.geaac.org/images/stories/DG_cuadernosaltobalsasdos_160611.pdf

sobre la violación a los derechos humanos como consecuencia de la construcción de las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro³⁵.

La suspensión de la PHSJT marca un antecedente del movimiento indígena antes del surgimiento del EZLN.

“Más tarde, ya en plena lucha por lograr la cancelación de dicho proyecto, nos enteraríamos que existe el Convenio 169 de la OIT³⁶. Este instrumento de derecho Internacional, ha sido un elemento muy poderoso en nuestra lucha de resistencia indígena, ya que nuestro país,...fue uno de los primeros en ratificarlo” (Díaz, 1992:20).

El éxito del movimiento de resistencia

De acuerdo con García (2000) la estructura del CPNAB, los medios de difusión periodísticos y las relaciones en el exterior permitieron generar la presión suficiente para bloquear el financiamiento de las grandes instituciones mundiales, requeridas para la construcción de la obra.

Sin embargo, a estos elementos se debe agregar la coyuntura mundial, que si bien García y otros autores la identificaron en el marco de la celebración del V Centenario del Descubrimiento de América, es producto también de sucesos mundiales más profundos. Es lo que Velasco (2003) denomina el “fin de la lucha ideológica”, la caída del bloque socialista y el surgimiento de la lucha de las reivindicaciones locales. Los grupos étnicos silenciados y olvidados durante siglos emergen, ocupando la esfera política.

“...la identidad de los grupos humanos, como algo que se desdobra a partir de la cultura, destacaba como motor de los nuevos conflictos sociales” (Velasco 2003: 23).

Luchas que antaño parecían inadmisibles, poco a poco tuvieron cabida en la vida institucional y así lo identificaron los pueblos Nahuas del Alto Balsas, tomando del discurso oficial argumentos de la valoración étnica local, revirtieron los argumentos en

³⁵ Peña (2004) afirma que para la presa Miguel Alemán se utilizaron 500 km² del territorio del pueblo mazateco, un poco más de la quinta parte de la superficie en la cual vivían. Se expulsó de sus lugares de origen a 20 mil campesinos. No obstante de la resistencia de las comunidades a dicho proyecto, veinte años después, el reacomodo masivo de indígenas se volvió a repetir para construir la presa Cerro de Oro, en este caso los desplazados fueron chinantecos. Los grupos indígenas expulsados de sus tierras, tardaron en reconstruir los vínculos comunitarios incluso perdieron la comunicación cotidiana con una buena parte de sus familiares y vecinos anteriores; también fueron despojados de símbolos de identidad. Por si fuera poco, Peña destaca que el compromiso gubernamental de ofrecer mejores condiciones de vida a los pueblos desplazados, nunca se cumplió. Las nuevas localidades no tenían servicios públicos básicos en un 50 por ciento y tampoco fueron consistentes los apoyos para capacitación e inversión agrícola.

³⁶ Referente a los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que entró en vigor en 1991 e incluye, entre otros, derechos relacionados al territorio y a la gobernanza.

contra del Estado. Por tanto, ante la amenaza del proyecto surgió una ciudadanía étnica entendida como la participación consciente de los actores sociales indígenas como sujetos colectivos de derechos, lo que derivó en el acceso a espacios públicos que determinaron las acciones del poder político sobre su territorio.

La experiencia del caso del PHSJT, muestra que el Estado mexicano continuaba operando de la misma forma; desvalorando a las comunidades que son productoras de espacio, se les ve como elementos desechables, la lógica tecnócrata de imposición continuaba manifiesta como en décadas pasadas. Si antes la visión técnica de las grandes obras hidráulicas era un asunto de Estado incuestionable, ahora la sociedad lucha por ser partícipe de la transformación de su espacio.

III Conflictividad política por la construcción de la Presa “La Parota”

“No hay explicación posible ni discurso desarrollista válido para que esta porción de paraíso y sus interminables y bellas historias fácilmente sean ahogadas por el temor y la resistencia al cambio de los constructores de las presas, ciegos ante posibilidades reales para la generación de luz eléctrica mediante formas menos crueles y dañinas, mas renovables, más vitales” (Rodríguez Bribiesca, 2006: 230).

Pese a la denominada transición política alcanzada en México en materia electoral, el gobierno aún recurre a viejas prácticas autoritarias, de coerción y uso de la violencia. Al respecto, la situación en Guerrero es significativa, pues su historia registra una constante represión, grupos de poder que valiéndose del aparato gubernamental imponen sus decisiones a las comunidades locales pese a los esfuerzos de grupos organizados por oponerse. Ejemplos de ello se pueden ver en la cronología elaborada por el Servicio Internacional para la paz (SIPAZ) o en los informes de Amnistía Internacional, donde se documentan recurrentes violaciones a los derechos humanos en esa entidad. Hay que añadir que Guerrero se caracteriza por tener uno de los niveles más elevados de marginación y algunos de los indicadores de desarrollo humano más bajos del país.

Guerrero también destaca por la formación de grupos que han confrontado al gobierno como la guerrilla de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en la década de los años setenta el movimiento indígena 500 años de Resistencia, lo que le ha valido el sobrenombre de “*Guerrero Bronco*”. Ante este panorama de autoritarismo y abandono gubernamental, poco favorable para una negociación, la CFE proyectó a finales de la década de los años noventa, la construcción de una presa hidroeléctrica en la Cuenca del río Papagayo.

En este capítulo analizamos la producción espacial y la conflictividad generada a partir de la obra propuesta de construcción de la presa en el periodo que va del año 2003 al 13 de agosto de 2007. El inicio del periodo de análisis está marcado por las fechas en que los pobladores se enteran del proyecto de la CFE, el fin del periodo de análisis lo marca la fecha en que los miembros Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) entregaron en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) N° 41 un acuerdo de la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatpec (BBC) en el que

expresaron su rechazo al proyecto. Estos años coinciden también con la intensa presencia de la CFE en la zona.

La conflictividad es entendida como el enfrentamiento de intereses en una determinada situación bajo una relación asimétrica de poder (Sánchez, 1992). Mientras que el poder es la posibilidad de que una persona o grupo imponga su propia voluntad, aún en contra de la oposición de otros participantes en la acción (Weber, 2001).

En el caso que nos ocupa, los intereses enfrentados se dan a partir de que el gobierno proyecta una obra de infraestructura en la cuenca baja del río Papagayo, muy cerca del puerto de Acapulco, a lo que se opone una parte de la población afectada a través de diferentes acciones e instancias de autoorganización. Sin embargo, la conflictividad no se reduce a la confrontación entre dos grupos antagónicos, sino que el proceso es complejo, ya que otros actores que intervienen a favor de uno u otro grupo, e incluso, cambian su posición conforme avanza la tensión.

Para analizar la conflictividad y la producción del “espacio de la presa” primero se identificaron a los grupos involucrados y se caracterizaron sus acciones, finalmente con base en una cartografía propia establecimos patrones de conflictividad en el periodo del año 2003 a 2007. Los actores involucrados están agrupados en dos bloques tomando la propuesta de Gramsci (citado en González, 2003) de “sociedad política” y “sociedad civil”. La sociedad política comprende a los actores cuya función corresponde al dominio directo del Estado que incluye lo jurídico y lo militar, las acciones de este conjunto van de la exigencia de la legalidad a la coerción para aplicarla. Mientras que la “sociedad civil” es el fundamento intelectual y moral del Estado, conformado por instituciones privadas distribuidas por toda la sociedad, la familia, los ciudadanos, y sus múltiples agrupaciones como clubes privados, asociaciones, etc.

“Los dos bloques se entienden dialécticamente en donde el consenso y la coerción son utilizados alternativamente y donde el papel exacto de las organizaciones es menos preciso de lo que parece” (Portelli, 1974:30).

De acuerdo a la definición anterior, en la sociedad política incluimos a la estructura de gobierno y administración relacionada con la obra en sus tres niveles formales de gobierno; el federal, el estatal y el municipal, a la estructura formal del ejido y bienes comunales y a los partidos políticos³⁷. La sociedad civil está conformada por la población

³⁷ En la propuesta original de Gramsci los partidos políticos forman parte de la sociedad civil, puesto que emanan del pueblo y lo representan. Para esta investigación se ubican en la

afectada, las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) fundamentalmente de Derechos Humanos y ecologistas, los profesionistas, integrados por académicos de la UNAM y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y los empresarios.

Sociedad política

En el periodo de análisis, a nivel federal destacan el promovente del proyecto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las secretarías de la Reforma Agraria y la del Medioambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). En el ámbito estatal los actores centrales son el Gobierno Estatal y la Comisión especial de los diputados que se designó para dar seguimiento a la negociación y que se cumplieran los acuerdos contraídos por la CFE con las comunidades locales. En una tercera escala están los gobiernos de los cuatro municipios involucrados directamente, Acapulco, San Marcos, Juan R. Escudero y Tecoaapa, de este último nivel, el papel fundamental por el grado de importancia regional y el número de afectados por la obra, es el municipio del puerto de Acapulco.

El trabajo de la CFE en la zona se remite al año 1976 cuando la paraestatal inició los estudios técnicos de la obra. Desde su origen, el proyecto fue planeado para satisfacer la creciente demanda eléctrica nacional, con un bajo costo de producción. La presa, además, tendría múltiples funciones: como el abastecimiento de agua para Acapulco; el suministro a sistemas de riego situados en los márgenes del río; y también serviría para la navegación; el control de inundaciones; la generación de empleos directos, contribuiría a la formación y capacitación de técnicos; a la diversificación de atractivos turísticos y recreativos y fomentaría la construcción de infraestructura para comunicar la zona del embalse (Programa Universitario de Medio Ambiente, 2004:11-12).

De acuerdo con Manuel Frías Alcaraz, en los setenta se realizaron consultas informales con las comunidades para presentar los beneficios y desventajas, pero la obra no se concretó porque surgieron controversias de tipo técnico que impidieron su construcción. Según Frías los ingenieros de la CFE aseguraron que había problemas porque las rocas de las inmediaciones no soportarían la cortina de 190 metros de altura, como figuraba en el proyecto. La solución que se dio entonces fue reducir el tamaño de la presa, lo que hizo necesarios nuevos estudios (El Sur, 1/07/2006). Fue hasta 1993 cuando la paraestatal volvió a incursionar a la zona para realizar los estudios, que fueron

estructura política porque están lejos de representar a la sociedad y la estructura de conformación se sitúa dentro del Estado, de hecho los partidos reciben financiamiento del erario público.

de nuevo suspendidos por falta de recursos económicos (Programa Universitario de Medio Ambiente, 2004: 6).

Para el 2002, la CFE contaba ya con avances significativos en las especificaciones de ingeniería básica del proyecto necesarias para su ejecución. Sin embargo, bajo la nueva legislación en el rubro ambiental la CFE solicitó al Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA) de la UNAM la elaboración de un estudio de impacto ambiental para analizar la viabilidad de la obra. Fue así como se reanudaron los estudios preliminares para afinar el diseño del proyecto mediante estudios de campo: geología de detalle, topografía, geofísica, sismotectónica, perforación, excavaciones exploratorias superficiales y subterráneas, añadiéndose más adelante el rubro del estudio socioeconómico (Programa Universitario de Medio Ambiente, 2004).

La CFE no sólo se enfrentaba a una nueva legislación ambiental, Nahmad³⁸ (2001) reconoce que en el ámbito social se dió una coyuntura específica entre 1987 y 1994, cuando la CFE tuvo que cambiar el esquema tradicional de los estudios para incluir las nuevas políticas de reasentamiento e impacto social para acceder al financiamiento de las agencias internacionales: Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Entre los cambios más significativos se encuentra la elaboración de estudios sociales y culturales del impacto de la presa, la constitución de una Gerencia de Desarrollo Social, la consulta a las comunidades, el restablecimiento o mejoramiento de los niveles de vida de las personas afectadas por el proyecto hidroeléctrico, a través del impulso a diversas actividades productivas en colaboración con las dependencias involucradas.

La nueva Gerencia de Desarrollo Social se constituyó en diciembre de 1989, con el objetivo de atender oportunamente los compromisos, problemas y conflictos de orden político y social que se derivaran de la construcción de las obras, por lo que se encargó de dirigir los estudios necesarios sobre las afectaciones sociales, económicas y ambientales que pudieran generar las obras y las actividades que llevase a cabo la CFE, con el fin de tomar medidas preventivas, así como coordinar las propuestas de solución, además de atender las quejas de la población que resultaría afectada.

Esta nueva forma de “responsabilidad social” de la CFE partía de la necesidad de cambiar la imagen negativa que la sociedad tenía de la paraestatal por su desempeño en proyectos similares anteriores. Sin embargo, esos cambios organizativos no garantizaron

³⁸El Dr. Nahmad es Investigador Titular C del CIESAS, en el periodo de 1989 a 1994 trabajó como consultor del Banco Mundial para asesorar en el Reacomodo de la población de las presas Hidroeléctricas de Zimapam y Aguamilpa de la CFE.

la reducción de los efectos sociales, ni mucho menos aseguraron que la población reasentada por obras de infraestructura, logaran su reproducción social³⁹. En este contexto, en el 2003 la CFE intensificó su actividad en los terrenos de Bienes Comunales y Ejidos de la región de estudio, con la introducción de maquinaria para construir caminos de acceso y trazar la cota de inundación de la presa. De acuerdo con campesinos consultados, ello no fue consultado ni autorizado por los pobladores.

El 5 de julio de 2004 la CFE ingresó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la Dirección de General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT para su evaluación, y el 13 de diciembre de ese mismo año obtuvo su aprobación. Tras la decisión, ejidatarios inconformes agrupados en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP) interpusieron una revisión en la SEMARNAT con el argumento de que la autorización violó varias disposiciones de la normatividad ambiental y autorizó de manera ilegal la realización de obras que generarían daños ambientales irreversibles, sin imponer a la CFE las medidas de prevención, mitigación y compensación adecuadas. Finalmente la SEMARNAT confirmó la autorización (Tribunal Latinoamericano del Agua, 2006). Al respecto en el capítulo social de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) elaborada por la UNAM, se alertó sobre los riesgos de escalar el conflicto si no se modificaba profundamente el esquema de intervención (Programa Universitario de Medio Ambiente, 2004).

El papel que jugó la SEMARNAT fue sin duda fundamental para la intensificación del conflicto, pues al ratificar la MIA buscó, sin éxito, otorgar legitimidad a la obra a pesar de las advertencias de parte del informe de la UNAM. Para ello, antes de aprobar los estudios, la Secretaría convocó a la sociedad en general a una consulta pública. Sin embargo, el formato de la consulta, celebrada el 24 de agosto del 2004, no permitió aclarar las dudas expresadas por los afectados, gran parte de las preguntas fueron evadidas o contestadas de manera superficial (SEMARNAT, 2004).

Los cuestionamientos principales se referían al lugar preciso de la reubicación y a los proyectos que la CFE planeaba después del reacomodo, sumado a la desconfianza en las autoridades por las promesas incumplidas en anteriores procesos de reubicación de la PH la Venta (1958-1965)⁴⁰ y la PH el Caracol (1978-1986) así como durante la

³⁹ Concepto que centra su análisis en las estrategias que emplean los grupos de poder para conservar su estatus, aquí se aplica el concepto referido a la conservación o la mejora de las condiciones de vida de los afectados.

⁴⁰ Cabe señalar que tras cuarenta años de espera los ejidatarios de Tierra Colorada recibieron la autorización de expropiación de 166-72-36 Has, lo que correspondía a una

construcción de la Autopista del Sol. La respuesta oficial a tales inquietudes, fue el ofrecimiento de nuevos estudios a cargo de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) a condición de la autorización a la CFE de entrada a las comunidades. Durante la asamblea otra línea de cuestionamiento al contenido de la MIA, se centró en las omisiones de información referente al ámbito cultural, a la mitigación del impacto ambiental, estudios geohidrológicos y de riesgo sísmico, así como el poco tiempo, que a su juicio, se había empleado para la elaboración de los estudios (SEMARNAT, 2004).

El formato de la consulta impidió un debate equitativo que ofreciera mayores elementos para tomar una decisión sólida, puesto que se asignó un espacio de hora y media a la UAG y al PUMA para exponer los diversos aspectos técnicos y de análisis de la zona, mientras que al público participante, se le dió la palabra por cinco minutos, tiempo insuficiente para argumentar la oposición al proyecto aun para un investigador avanzado. (SEMARNAT, 2004). Ante esa situación, la actuación de la SEMARNAT fue cuestionada por la parcialidad mostrada en favor del proyecto

El manejo de la información durante la consulta, así como su conducción, reflejó una práctica recurrente entre cierto tipo de funcionarios gubernamentales, quienes para impulsar la obra, adoptaron un discurso con base en el doble manejo del sacrificio, por un lado, convocando a la consulta, participación y el respeto de los acuerdos como forma sutil de convencer y, por otro lado, desprestigiando a la población afectada, a quien no se le considera igual. Algunas frases que reflejan la cuestión sacrificial en los dos sentidos para convencer y para descalificar son las siguientes:

“sería totalmente ilógico que se permitiera que 100 gentes que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica La Parota, sean los que decidan la vida de casi 11 mil comuneros⁴¹” (Víctor Hugo Chávez Chávez, El Sur de Acapulco 7/06/05).

indemnización de \$20,006.83. Los terrenos expropiados fueron los afectados por la construcción de parte del embalse de la presa y sus obras complementarias, de la central hidroeléctrica General Ambrosio Figueroa (La Venta). En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación también se menciona la historia de expropiaciones que ha sufrido el ejido: en 1978 se expropió una superficie de 102-99-48 Has., a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A., para destinarse a la construcción de una fábrica de celulosa y papel; el 30 de noviembre de 1984 se expropiaron 9-67-61 Has., a favor del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.A., para las instalaciones industriales de Celulosa del Pacífico, S.A.; el 23 y 24 de noviembre de 1993 se volvió a expropiar al ejido una superficie de 42-78-80 Has y 5-20-75 Has., a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para destinarse a la construcción de la carretera México-Acapulco y para el derecho de vía del entronque Tierra Colorada; el 12 de diciembre de 1996 se expropió 0-06-56 Ha., a favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para destinarse a la construcción de una unidad de medicina familiar. DOF: 08/09/2004

⁴¹ En cuanto a las cifras de población con afectación directa, a la par del número de ejidatarios y comuneros, cambian de acuerdo a la fuente consultada. En la MIA (2004: 927-928) se

“si no es suficiente la magnitud de la inversión para convencerse de la importancia de la presa, se debe pensar que se convertirá en la fuente de abastecimiento de agua que Acapulco necesita. Si un centro turístico como éste no tiene la certidumbre de abastecimiento del líquido en el futuro va a estar condenado al fracaso... y no creo exagerar en el tema, es un asunto hasta de sobrevivencia” (El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, El Sur de Acapulco 20/07/05)

Otra institución fundamental en el desarrollo del conflicto, durante el periodo de análisis, fue la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) la que, a través de la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario, buscó resolver por la vía legal, las diferencias entre la CFE y los comuneros y ejidatarios inconformes por la expropiación de la tierra requerida para el proyecto. Por su parte, de la conducción judicial del conflicto, ha sido la Procuraduría General de la República (PGR), la instancia responsable que ha seguido las demandas interpuestas por los inconformes.

El 15 septiembre 2005 se entregó el Estudio Técnico Justificativo (ETJ) a la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la SEMARNAT (DGGFS), para su evaluación y dictamen, en dicho estudio se estableció que la superficie con vegetación forestal que el proyecto afectaría corresponde a 10,809 hectáreas.

El 30 de enero de 2006 la DGGFS indicó que para obtener la autorización de la primera fase del proyecto (3,210 hectáreas) requería depositar 86 millones de pesos al Fondo Forestal Mexicano, que serían destinados a actividades de reforestación y/o restauración de 8,550 hectáreas. Los recursos no fueron depositados, en virtud de que la CFE no tenía contemplado iniciar la construcción del proyecto.

Así mismo, la posición del gobierno federal, desde el inicio, fue respaldar el proyecto propuesto por la CFE. Sin embargo, la administración de Felipe Calderón (2006-2012) enfrentó un grave conflicto generado por una deficiente capacidad de negociación del gobierno anterior, por lo que el costo político del respaldo era muy alto, aunado al conflicto poselectoral de su elección, que puso en tela de juicio su legitimidad y actuación.

En el ámbito estatal, el gobierno estaba encabezado por Zeferino Torreblanca (2005 –2011) quien apoyó abiertamente la obra, con un discurso que distó mucho de ser conciliatorio con la oposición, lo que sumado a las acciones emprendidas por su administración contribuyeron a una mayor polarización política. A través de su equipo de

menciona que existen 20 núcleos agrarios: 15 corresponden a ejidos; 4 son bienes comunales y hay una propiedad privada.

gobierno incursionó en la zona y promovió programas de compensación para que las comunidades respaldaran el proyecto. Destaca el financiamiento de obras de agua potable en Cruces de Cacahuatpec y Huamuchitos, la carretera que comunicaría la Autopista del Sol y los poblados Dos Arroyos, Los Huajes, Altos del Camarón, Agua de Perro y La Venta. Además de la carretera de Tunzingo a Puente Parotas (Sur de Acapulco 8 de diciembre de 2006).

Resulta inexplicable que las más altas autoridades condicionen la realización de obras, que constituyen una obligación, ante los segmentos más vulnerables de la sociedad. Los afectados inconformes no tuvieron confianza en el gobernador por su parcialidad a favor del proyecto y las innumerables declaraciones que emitió en las que minimizó al movimiento de resistencia con autoritarismo:

“Independientemente de que se hagan o no las asambleas, les recuerdo que el acto expropiatorio es una medida unilateral del propio gobierno, pero hoy se hace la consulta porque se quiere consensuar con mayor número de ciudadanos y ya la mayoría ha dicho que está a favor de La Parota” (El sur de Acapulco, 29/11/05).

A pesar del cambio en la administración estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Partido de la Revolución Democrática (PRD), la estructura y forma de gobernar continuó con las mismas prácticas autoritarias. En particular la insensibilidad ante el movimiento opositor al proyecto, no fue la excepción, y se suma a una larga lista de aplicación de mano dura. Torreblanca llegó a la gubernatura gracias al apoyo de “frentes cívicos” y una coalición apoyada por el PRD, sin embargo, no era de extracción perredista ni provenía de movimientos sociales. Se trataba de un empresario nativo del municipio de Acapulco que obtuvo el poder utilizando la vieja estructura estatal heredada de los tiempos del PRI.

Por el contrario, a nivel municipal el alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio (2005 – 2008), postulado también por el PRD, fue cauteloso en apoyar el proyecto y cuestionó su respaldo a que los afectados aceptaran la obra y se mostró crítico ante las acciones emprendidas por la CFE en el municipio, esta posición le valió el respeto del movimiento de oposición.

“El problema es la CFE, no la presa, porque la gente tiene dudas” Salgado Macedonio (El Sur de Acapulco, 27/04/06).

A nivel municipal los alcaldes de los municipios de Juan R. Escudero, Tecoaapa y San Marcos apoyaron abiertamente el proyecto, los dos primeros de fracción perredista y

el tercero priísta. Pese a que la mayor parte de la población afectada se ubica en el municipio de Acapulco, el apoyo de los tres alcaldes destacó en la promoción y validación del proyecto, fueron testigos en el convenio CFE-UAG-02 firmado en 2004 por la CFE y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) para la elaboración del Plan de Desarrollo Integral del área de influencia del proyecto hidroeléctrico La Parota, además de que en sus jurisdicciones, se reubicaron las asambleas de los núcleos agrarios de Cacahuatpec, de Dos Arroyos y de Los Huajes, así como también participaron en la marcha a favor del proyecto que encabezó el gobernador el día 9 de mayo de 2006 (El Sur de Acapulco, 2005).

Independientemente de su escasa presencia en gobiernos locales, partidos como Acción Nacional (PAN) y el PRI, se manifestaron claramente a favor, mientras que el PRD se dividió. Por un lado el Comité Ejecutivo Nacional no definió claramente una postura, mientras el Comité Estatal cambiaba constantemente de posición. El gobernador perredista impulsó el proyecto y se alejó de la postura de su partido. A su vez el presidente municipal de Acapulco, Felix Salgado Macedonio, también perredista, se mostró claramente en contra de la imposición del proyecto, incluso se acercó a las bases opositoras, que sufrían directamente la represión estatal.

Ligado al PRI, el líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Evencio Romero Sotelo, apoyó a la CFE utilizando la estructura vertical heredada de su partido que subordina a los campesinos ante las decisiones estatales. Contra él versaron acusaciones de acarreo y compra de votos en las asambleas convocadas para apoyar el proyecto, lo que le ha llevado a ser considerado como promotor del mismo.

Además de los tres niveles de gobierno anteriormente señalados, tenemos una organización comunal cuya jurisdicción se limita a la tenencia de la tierra a nivel local, nos referimos a las comunidades y ejidos. Al requerirse su anuencia para la construcción de la obra, los Comisariados de Bienes Comunales y Ejidales son fundamentales, puesto que son la autoridad que convoca y legitima las asambleas respectivas.

Para la obra se requieren tierras pertenecientes a diecinueve núcleos agrarios, quince de tipo Ejidal (42.9%) y cuatro de Bienes Comunales (57.1%). Los núcleos con mayor superficie afectada son Altos del Camarón, La Palma, Dos Arroyos, Agua Zarca de la Peña, Omitlán y Michapa (PUMA, 2004 y Novedades de Acapulco, 30/01/05) (Ver Mapa 6 y Tabla 6). En el informe anual del 2007 la CFE anunciaba la autorización de los diecinueve núcleos para la construcción de la obra, el consentimiento lo obtuvo a través de asambleas celebradas desde el 2003, sin embargo, los núcleos agrarios de

Cacahuatepec, Dos Arroyos, los Huajes y La Palma, interpusieron demandas de anulación por las irregularidades cometidas desde la convocatoria hasta su celebración.

Mapa 6 Núcleos agrarios afectados por la PHLP.

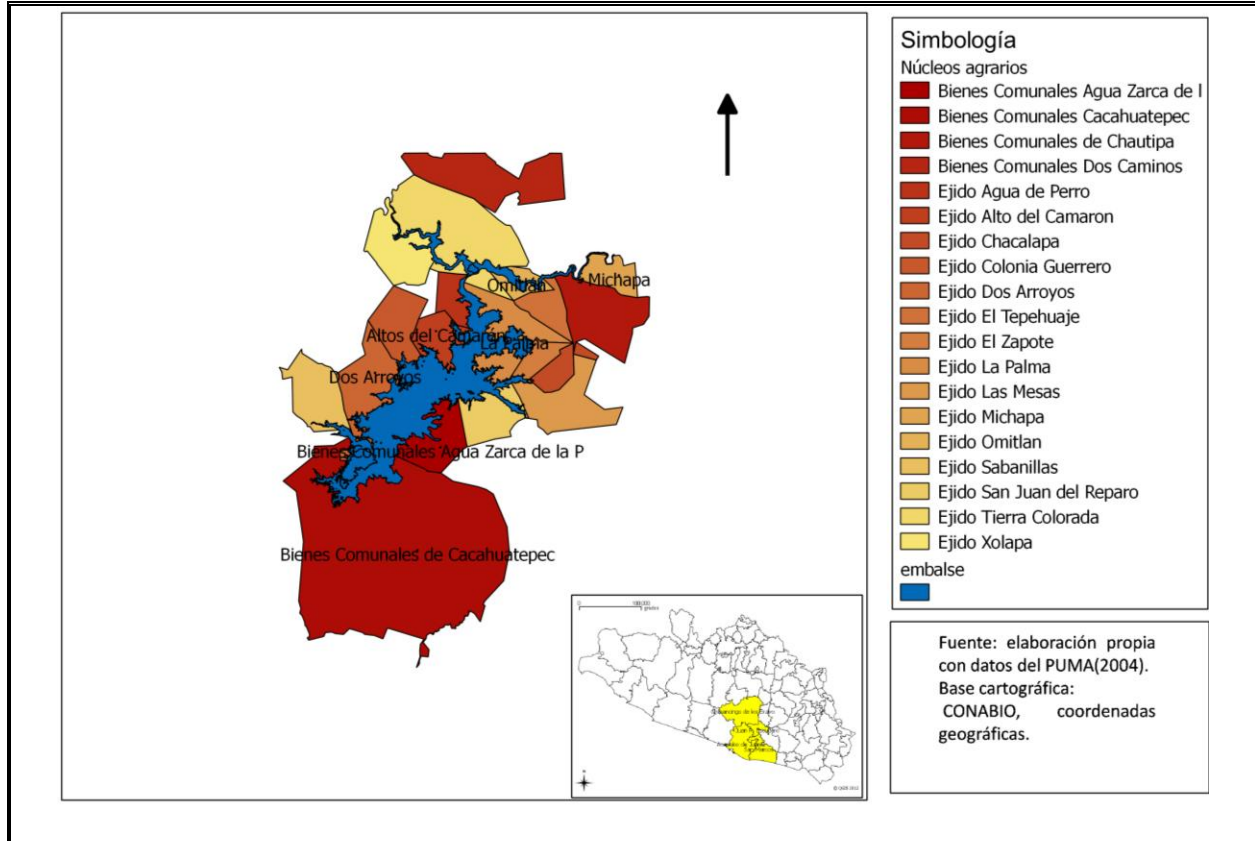


Tabla 6 Superficie afectada por el proyecto según régimen de tierra (2007)

| MUNICIPIO | NÚCLEOS AGRARIOS | Población a reubicar | Superficie | | | |
|---------------------|------------------|--------------------------|------------|---------------------------|----------|------|
| | | | Total | Aproximada por afectar | | |
| | | Habs | Ha | Ha | % | |
| Acapulco | Ejido | | 1702 | 319 | 18.7 | |
| | | | 2987 | 1767 | 59.2 | |
| | | | 7913 | 3438 | 43.4 | |
| | | | 1,525 | 3480 | 714.3 | 20.5 |
| | | | 3368 | 268 | 7.9 | |
| | | | 4961 | 187.5 | 3.8 | |
| | Bienes Comunales | Cacahuatepec | | 37622 | 2315 | 6.2 |
| Juan R. Escudero | Ejido | | 1769.1 | 11.4 | 0.6 | |
| | | | 1297 | 70.1 | 5.4 | |
| | | | 5426 | 2632.4 | 48.5 | |
| | | | 1,160 | 1736.1 | 478.8 | 27.6 |
| | | | 1317.2 | 460.3 | 35 | |
| | | | 5436.1 | 524.9 | 10 | |
| | Bienes Comunales | Dos Caminos | | 19776.5 | 142.3 | 0.7 |
| San Marcos | Ejido | | 3253.4 | 573.3 | 17.6 | |
| | | | 1271.8 | 3.4 | 0.3 | |
| | | | 0 | 4770.9 | 41.6 | 0.9 |
| | Bienes Comunales | Agua Zarca de la Peña | | 4613 | 1664 | 36.1 |
| Tecoanapa | Bienes Comunales | Chautipa | 0 | 5377.3 | 23.13 | 0.4 |
| Total | | 19 | 2,685 | 118,077.4 | 15,634.5 | 13.2 |

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alcaraz y Salgado (2007), PUMA (2004: 52p) y Milenio 9/12/07

Sociedad civil

La población que conforma parte de la sociedad civil se agrupa en los que integran alguno de los núcleos agrarios y los avecindados. Los núcleos agrarios afectados tienen una

producción diversificada que incluye el maíz por temporada, hortalizas, tamarindo, papaya, plátano, flor de jamaica, sandía, limón y semilla de calabaza, entre otros.

En entrevista, a habitantes de Agua Zarca de la Peña afirmaron que el río es fundamental para su sustento. Cuando no tienen dinero basta con tomar la red e ir a pescar camarones al río. Además de la pesca, también aprovechan otros recursos naturales de la zona que sirven como sustento o complemento de los magros ingresos obtenidos de la agricultura, como la extracción de grava y arena del río y el comercio de alimentos por temporada (PUMA, 2004: 929).

Si tenemos presente que tanto el Ejido como los Bienes comunales son organizaciones de personas vinculadas entre sí por la tenencia de la tierra, no representan a toda la comunidad, puesto que los jóvenes, vecindados y mujeres que no tienen derecho sobre la tierra no forman parte del núcleo agrario. Además, durante el periodo de hegemonía del PRI se trataba de una forma de representación que resultó fácil de manipular a través del corporativismo gracias a las concesiones económicas y políticas que el gobierno daba.

Recordemos que el Ejido está organizado formalmente a través de tres instancias: la Asamblea general de ejidatarios, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia. La Asamblea ejidal se constituye por todos los que usufructúan la tierra y son reconocidos legalmente por el ejido, además de elegir y remover a los miembros del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, se considera como el núcleo básico, puesto que todas las decisiones deben discutirse y acordarse en colectivo. El Comisariado Ejidal es la representación y administra el ejido, mientras que el consejo de vigilancia como su nombre lo indica, se encarga de dar seguimiento a las acciones del comisariado.

Pese a que esta forma de organización parece democrática hay dos problemas fundamentales, el primero es que no siempre la Asamblea funciona satisfactoriamente, ya sea que por coerción o carisma el poder recae en el comisario, quien toma las decisiones en ocasiones en beneficio de los ejidatarios o muchas veces buscando el beneficio personal o el de unos cuantos. El segundo problema es el que mencionamos inicialmente, que la constitución de la asamblea se da en función de los derechos de la tierra. Por lo anterior, dicha estructura no garantiza el respeto a la opinión de los afectados, es por eso que;

“La asamblea es una imposición ilegal porque no respeta el derecho a la consulta; el mecanismo agrario no es el adecuado para consultar este tipo de proyectos, porque se pretende excluir a la mayoría de los afectados...” Mario Patrón Sánchez, Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan (El Sur de Acapulco 17/05/07).

Centro de Derechos Humanos de la Montaña (S/f) ejemplifica con el núcleo agrario de los BCC, según sus datos, en el año 2000 contaba con más de 40 mil habitantes y su padrón comunal reconocía sólo a un poco más de siete mil personas, el ejido de La Palma contaba con una población de más de 8 mil habitantes, en tanto que el padrón del ejido reconocía a 240 ejidatarios. En el caso del ejido de los Huajes la población ascendía a los 3 mil habitantes y su padrón ejidal incluía a 170 ejidatarios, mientras que el ejido de Dos Arroyos contaba con una población de más de 5 mil habitantes y su padrón ejidal registraba a 572 personas.

El número de posibles afectados varía según las fuentes consultadas. De acuerdo a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la población afectada por el PH “La Parota” se estima en dos áreas, la de “Afectación Directa” y la de “Afectación Indirecta”. La directa corresponde a la superficie que ocuparía por el embalse, e incluye a 24 localidades de cuatro municipios que quedarían inundadas, ya sea en forma total o parcial de sus áreas urbanas, y una población que suma 3,048 personas de las cuales 82.1% (2,502) deberían ser reubicadas, mientras que el restante 17.9% (546) serían afectadas parcialmente (Programa Universitario de Medio Ambiente, 2004: 735).

El Área de Afectación Indirecta incluye la zona en donde se debería construir o renovar las vías de acceso para la construcción y mantenimiento de la planta hidroeléctrica, la obra misma de la presa y las zonas probables para la reubicación. Esta área incluye una franja de 2 Km adyacente al embalse y las localidades ubicadas cortina abajo (Programa Universitario de Medio Ambiente, 2004; 525p).

Es importante tener claro que los datos del CEMDA y el PUMA son distantes, sin embargo, en el caso de las afectaciones indirectas planteadas por el PUMA, no necesariamente se consideran todos los niveles de afectación, estos se establecieron con un límite numérico de distancia que puede o no incluir las relaciones sociales de las comunidades.

Según los diputados de la LIX Legislatura federal (2006), la obra requeriría aproximadamente 17,300 hectáreas comunales y ejidales, que desplazarían a más de 25

mil personas y ocasionaría la afectación indirecta de, aproximadamente, 70 mil personas. Cifras de la Jornada coinciden en el número de desplazados, que pertenecen a 36 comunidades, pero en lo que se refiere a la afectación directa mencionan a 50 mil personas (La Jornada, 8/08/06).

Independientemente de las cifras, es claro que la afectación directa era mínima con relación a la población afectada indirectamente, sin embargo, el presupuesto asignado para el rubro social, no contemplaba a la totalidad de la población afectada. Este aspecto es crucial para entender el conflicto, junto con las acciones que fueron emprendidas por la sociedad política para concretar la obra, detalladas más adelante, crearon un clima de conflictividad, no sólo entre afectados y el gobierno, sino entre los mismos pobladores y comuneros ubicados en la zona.

Los pobladores que se resistían a la construcción de la presa viven o pertenecen al núcleo agrario de los Bienes Comunales de Cacahuatepec (BCC), cuyos terrenos afectables son 2,315 hectáreas que corresponden al 6.2% del total de su superficie (Tabla 6 Superficie afectada por el proyecto según régimen de tierra). Ante la incapacidad del gobierno para entablar una negociación respetuosa, en julio de 2003 se constituyó el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP). Su primera acción fue un bloqueo en un paraje conocido como el Fraile, dentro de los BCC (Semarnat, 2004).

Siguiendo el ejemplo del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB), movimiento opositor a la construcción de la Presa en San Juan Tetelcingo y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que se opuso a la construcción del aeropuerto en San Salvador Atenco, la estrategia de defensa del movimiento del CECOP se desarrolló en dos ámbitos: uno jurídico en lo judicial y agrario; y otro político, el de la resistencia civil.

“La lucha se combina con el ejercicio del derecho: civil, penal, agrario y ambiental. La defensa frente al despojo o todo intento encaminado al mismo y, la oportunidad en el uso de los recursos legales, fortalecen la lucha frente a poderosos grupos económicos y a las instituciones que para avalar la depredación, rompen siempre su propia legalidad” (CECOP, s/f).

La lucha inicial se limitó a exigir a la CFE información sobre el proyecto y demandar la consulta de los campesinos para su acceso. Aunque más tarde incorporaron argumentos de defensa de la identidad indígena, a semejanza del CPNAB. El discurso indígena no tuvo el mismo peso que en San Juan Tetelcingo por la baja población indígena en la zona. En ese caso con el apoyo del entramado solidario de diversas

organizaciones, tuvieron los canales de acceso a información que les permitió ampliar la lucha hacia otras demandas, como son la reivindicación de los derechos humanos particularmente económicos, sociales, culturales y ambientales, la defensa de los ríos, del medioambiente y por la generación y uso de energías alternativas renovables (Capítulo II).

Por el contrario, en la Parota, el CECOP se concentró desde 2003 primordialmente en tres comunidades, Arroyo Verde, Garrapatas y San José Cacahuatpec, aunque con el tiempo se sumaron más comunidades a la lucha (El sur de Acapulco, 28/07/07). El crecimiento no fue solo en número, sino también en la formación política de los miembros, se cambió el tipo de discurso recurriendo a datos técnicos y económicos, y retomando, incluso, elementos de otras luchas como del CPNAB, FPDT y el movimiento zapatista.

“Nuestra posición ha sido clara, y la reiteramos, es no ceder las tierras a la CFE porque nunca cumple, siempre engaña, donde quiera que ha llevado a cabo sus presas no ha habido el desarrollo que promete... Al gobernador le decimos que él no tiene que decidir por nosotros... No hay artículo en la Constitución que diga que a fuerzas tenemos que ceder las tierras a caprichos de las trasnacionales... [El gobernador] no conoce el proyecto y no sabe que pertenece al Plan Puebla Panamá”, Felipe Flores CECOP (El sur de Acapulco 16/08/05).

Se debe destacar que no todos los poblados participan en el CECOP. En la zona norte, de lo que sería el embalse, las comunidades de los municipios de San Marcos y JR Escudero, dieron su consentimiento para el cambio de uso de suelo de sus tierras y aunque no se cuenta con registro de manifestaciones de inconformidad, no necesariamente están de acuerdo con el proyecto. Esto sin duda, es resultado del control corporativista que el PRI formó en la zona, que no da la posibilidad de pensar otra alternativa *“lo que el gobierno diga debemos acatar”*. En otras comunidades del sur conviven pobladores afectados con posiciones encontradas, como es el caso del líder José Leonor Palma Nava, que formó la Organización Democrática Campesina La Parota de los Bienes Comunales de Cacahuatpec, a favor del proyecto. EL CECOP lo acusó de dividir a los comuneros y buscar el control en las negociaciones para beneficiarse personalmente.

Académicos

Otra parte de la sociedad civil la constituyen los académicos y organizaciones ambientales, tanto regionales, como nacionales e internacionales.

En el caso de los académicos se distinguen dos momentos de ingreso a la zona del proyecto: uno entre 2002 y el 2004, y el segundo de 2004 al 2006. El primero vinculado a la elaboración de la MIA por la UNAM, y el segundo con el proceso de negociación con las comunidades afectadas a cargo de la UAG, cuyos académicos elaboraron el Plan de Desarrollo Integral del Proyecto Hidroeléctrico La Parota.

En el primer periodo, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma de Guerrero, ingresaron a la zona de afectación a través del Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA) quien coordinó la investigación requerida por la CFE para elaborar la MIA. No se puede hablar de un grupo homogéneo, fueron 18 equipos de trabajo, que incluían ingenieros, biólogos, antropólogos, geógrafos, sociólogos, actuarios, economistas, historiadores coordinados por un responsable, designado por el INE, a quien se entregaron los resultados de los diversos grupos de trabajo e integró el documento final.

Si bien la opinión de varios académicos fue crítica al proyecto, el formato establecido por SEMARNAT para elaborar la MIA, que pone énfasis en los rasgos ambientales, restringió el proceso de investigación y la exposición de sus resultados. En cuanto a las limitaciones, la propia CFE, prohibió a los grupos de trabajo el acceso a un alto número de localidades, todas opositoras al proyecto, bajo el argumento de no garantizar la seguridad personal de los investigadores. Otras dos restricciones de la investigación fue abordar los temas del lugar posible de reubicación y el monto de la expropiación, ambos cruciales para la investigación. Una limitación más fue tratar de impedir el acceso a una de las comunidades afectadas, que cuando se presentó un grupo en la zona, se pudo percatar que se trataba de un área sembrada por narcóticos. El resultado fue un documento de 1362 páginas, con un diagnóstico de la zona y la identificación de los posibles impactos en el ambiente así como la forma de mitigarlos. Este documento que sirvió de base para la aprobación de la MIA por la SEMARNAT ha sido severamente criticado por otro grupo de académicos que asesora al CECOP.

En el segundo periodo, la participación de académicos se debe analizar en dos vertientes: por un lado, el grupo contratado por la CFE; y por otro los académicos que apoyan al CECOP. Los académicos contratados por la Comisión pertenecen a la UAG y elaboraron el Plan de Desarrollo Integral para la región, basados en las comunidades localizadas en la zona caracterizada por la UNAM como de baja o nula conflictividad. Este grupo de académicos consideraba que se debía aprovechar las oportunidades de

desarrollo que ofrecía el proyecto a las localidades a partir de la disposición de sus recursos locales.

El Plan de Desarrollo Integral elaborado por el grupo pretendía generar condiciones que posibilitaran a los habitantes reubicados, realizar actividades permanentes con ingresos dignos y les permitiera integrarse de manera local y regional, reconstruyendo sus tradiciones, su cultura y los diversos aspectos de la vida comunitaria previa a la inundación. Si bien, la propuesta es loable, su aplicación estaba condicionada a la aprobación por la Comisión, quien debía canalizar el presupuesto necesario para la realización de los proyectos. Para los pobladores opositores la propuesta no fue creíble, pues la consideraban como un paliativo a los impactos que ocasionaría la obra.

El segundo grupo de académicos, en cambio apoyó al CECOP, mediante una asesoría en diversas áreas de conocimiento para participar en los distintos foros de análisis, como los convocados por la fracción perredista de la Cámara Federal de Diputados y en los eventos que la propia organización promovió en las comunidades. Tan solo en el I Encuentro de Afectados por las presas realizado en una de las comunidades afectadas con el proyecto, participaron académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, de la Comisión de Bosques y Selvas del Pacto de Grupos Ecologistas, entre otros. A este polo de resistencia se fueron sumando ya sea individualmente o a través de organizaciones, otros movimientos sociales como el Zapatista.

Una comisión del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT de San Salvador Atenco) visitó la zona un par de veces para compartir experiencias sobre las acciones de resistencia y durante el recorrido de “la otra campaña”, el subcomandante Marcos asumió la lucha del CECOP como propia en su visita al poblado de Aguas Calientes, en el municipio de Guerrero.

Pero sin duda, las organizaciones que dieron una fuerza definitiva a la oposición son la ONG Guerreros Verdes, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinolla, este último ha acompañado al CECOP en el largo proceso de litigios contra las asambleas de los núcleos agrarios de Cacahuatpec, Dos Arroyos, los Huajes y La Palma, por las irregularidades cometidas desde la convocatoria hasta su celebración.

Guerreros Verdes surgió a partir del movimiento organizado para rescatar el Parque Papagayo en Acapulco ante la pretensión del ayuntamiento de vender la

propiedad para construir en el lugar un centro comercial. Un grupo de ciudadanos que incluía una periodista y directora de cablevisión de Acapulco, empresarios dueños de la Plaza Comercial Cuauhtémoc, activistas de derechos humanos se organizaron para detener el proyecto. Tras su triunfo en el 2002, se conformó la asociación ambientalista Guerreros Verdes A.C.(PUMA, 2004). Esta organización fue la primera en brindar al CECOP su apoyo y demandar a la Universidad Nacional Autónoma de México una posición crítica ante la Comisión. Más tarde, el apoyo a los opositores provino de dos organizaciones de derechos humanos, una estatal y una nacional. El CEMDA se unió a la lucha del CECOP para exigir el respeto de los derechos humanos y el ambiente afectados por la construcción de la presa, con el fin de evitar que los casos se repitan en otras zonas de México y el continente (CEMDA: s/f).

El apoyo brindado por la organización, se concentró en la asesoría jurídica, fundamentalmente, en el ámbito ambiental. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, la organización estatal, apoya en los litigios agrarios.

Gracias a estas dos organizaciones la primera acción del CECOP fue interponer una solicitud de revisión de la MIA, aprobada por la SEMARNAT, así como diversas demandas contra la Comisión por cambio ilegal de uso de suelo y contra el comisariado de los BCC por falsificación de firmas, así como las demandas de nulidad de asambleas de los núcleos agrarios y diversos amparos para evitar la entrada de la Comisión. También presentaron el caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (La jornada 8/08/06 y CEMDA: s/f).

Empresarios

Por su parte, otro grupo fundamental de la sociedad civil presente en el debate sobre la presa, fueron los empresarios regionales y nacionales. Para la CFE, la inversión de la obra se enmarca en la modalidad de “obra pública financiada”, es decir, la empresa contratista se encargaba de obtener los financiamientos necesarios para llevar a cabo la construcción de la obra, hasta que le fuera entregada a la paraestatal. De esta forma el Estado Mexicano asumiría la deuda y pagaría los intereses los siguientes 20-25 años (El Financiero, 20/06/07 y Grupo parlamentario del PRD, 2007).

Para la empresa constructora sin duda era un buen negocio, es por eso que el grupo brasileño *Camargo Correa*, las empresas mexicanas *ICA* e *Ideal*, la estadounidense *General Electric*, la italiana *Techint*, se mencionaron con interés en la licitación y sólo

estaban a la espera de que el gobierno federal aprobara finalmente el proyecto (El Universal 8/12/2005 y La Jornada 20/12/2005).

En el ámbito local, los empresarios del puerto fueron manifestando su apoyo decidido a la obra y exigieron al gobierno estatal firmeza contra los opositores. La demanda de mano dura ante la oposición fue resultado de la incertidumbre generada por el conflicto que puso en riesgo el proyecto. El discurso empleado por los empresarios buscó convertir su propio interés en el interés común de todos los miembros de la sociedad, por lo que también recurrieron al argumento del sacrificio por el bienestar colectivo, la idea de que la obra era necesaria para reducir la pobreza y promover el desarrollo. Sin embargo, los opositores fueron identificados con claridad que había detrás de la inversión:

“La construcción de grandes presas es una vía para ejercer ese doble dominio sobre la generación y venta de energía y sobre el agua. Para eso, se unen los poderes económico y político y ejercen actos de dominio basados en la apropiación y el despojo... Un grupo de poder, despoja de sus tierras y de sus bienes al grupo más débil y ejerce dominio para satisfacer beneficios propios, siempre con el engaño de que las presas son detonantes del desarrollo, mismo que nunca llega a los grupos afectados, ni al conjunto de la población, ni al país mismo. Los únicos beneficiados son quienes detentan el poder sobre los energéticos, particularmente las empresas trasnacionales...” CECOP (s/f)

Evolución del conflicto 2003 a 2007

El proceso de planeación de la presa llevaba casi cuatro décadas de tensión, antes de iniciar el escalamiento a conflicto. Durante los primeros años, el equipo técnico de la CFE incursionó en la zona sólo esporádicamente para elaborar estudios de factibilidad, el contacto con la población fue mínimo por lo que no existe registro de inconformidad.

En el año 2002 investigadores de universidades (UNAM y UAG) realizaron trabajo de campo para la elaboración de la MIA, durante el cual la Comisión evitó al máximo y en la condición de que cada recorrido debía ser autorizado por la Gerencia de Desarrollo Social (GDS) y realizado con la supervisión de un representante suyo. Había instrucciones expresas de no establecer conversaciones con la población y cuando así lo requería el trabajo, la misma dirección debía autorizar el guion de entrevista, debiendo presentarlo al grupo con suficiente antelación. Sin embargo, la presencia de personas extrañas en comunidades pequeñas e incomunicadas despertó siempre una gran inquietud, que únicamente por el prestigio de la UNAM y la actitud respetuosa del grupo

de trabajo ante los reclamos de la gente, no se generó ningún enfrentamiento con los inconformes.

Los primeros problemas con los pobladores surgieron por la forma de operar de la CFE, dividida entre un equipo de ingenieros que se encarga de evaluar la factibilidad técnica y económica de la obra y, por otro lado un grupo “social” responsable de la “estrategia” de acercamiento con los pobladores. La prioridad en la práctica de lo técnico sobre lo social, los distintos objetivos y tiempos, aunado a la forma autoritaria de dirigirse a las comunidades, complicaron la negociación con la población que sería afectada.

Un ejemplo claro de la sobrevaloración técnica sobre la social, lo vemos en el monto destinado al proyecto, pues para la indemnización de los comuneros de los 19 núcleos agrarios que serían desplazados, se invertirían mil 500 millones de pesos de un total de 800 millones de dólares para la obra (Gobierno de Guerrero, boletín Junio: 0550 y El Universal 28/02/2006).

Después de la presentación del proyecto ante los medios de comunicación, a fines del 2002, la CFE inició formalmente el proceso de negociación con las comunidades para obtener su aprobación del proyecto. Fue entonces cuando la tensión comenzó a escalarse. A partir de ese momento, el trabajo técnico pasó a un segundo plano y la tensión se desarrolló únicamente en el plano político, básicamente dominado por la pretensión de imponer la obra, de cualquier forma.

Para analizar la evolución del conflicto en el ámbito territorial, y de ahí construir una explicación de la producción del espacio, se mapeó el total de acciones emprendidas tanto por la sociedad política como por la sociedad civil, caracterizadas según un grado de conflictividad. El periodo de análisis se acotó en función de los datos recopilados a través del seguimiento hemerográfico que comprende desde 2003 a agosto del 2007, cuando se realizó la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatpec (BCC), que por mayoría decidió no convocar a más asambleas referentes a la presa hidroeléctrica.

A partir de la cronología (ver Anexo IV) clasificamos el tipo de acciones asignando un grado de conflictividad, diferenciando a la sociedad política de la sociedad civil. Un problema de la metodología radica en que, con frecuencia, las acciones no son localizables porque en el seguimiento hemerográfico no se hace referencia al lugar de los hechos, sobre todo las asambleas entre los diversos niveles de gobierno y la sociedad civil. Por ello, en el caso de las acciones efectuadas por los comuneros de los BCC, se situaron en la cabecera por ser el poblado central del núcleo agrario, cuando en la

cronología se refiriere a los opositores, las acciones se localizaron en Agua Caliente, bastión de resistencia.

Para caracterizar al conflicto se retoma el grado de conflictividad del planteamiento de Ibarra (PUMA, 2004), quien reconoce cuatro etapas en el proceso de escalamiento de un conflicto; inconformidad, protesta, movilización y confrontación. A cada etapa le corresponden tres niveles de conflictividad: ligera, moderada y radical, dependiendo del lugar donde se efectúa la acción de la población afectada (ver Tabla 7).

Tabla 7 Grados de conflictividad sociedad civil

| Inconformidad | | | Protesta | | | Movilización | | | Confrontación |
|---------------|----------|---------|----------|----------|---------|--------------|----------|---------|---------------|
| ligera | moderada | radical | ligera | moderada | radical | ligera | moderada | radical | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Para Ibarra la primera etapa de “inconformidad”, incluye marchas realizadas en los mismos poblados. A partir de la revisión hemerográfica se agregaron acciones de protesta dentro de la legalidad, con poca o nula afectación a terceros; reuniones con organismos, demandas interpuestas y formación de organizaciones.

La “inconformidad” es ligera (grado 1 de conflictividad), cuando las acciones se realizan en las localidades, si se desarrollan dentro de la zona de embalse o municipal es una inconformidad “moderada” (grado 2 de conflictividad) y cuando se trascienden los límites municipales corresponde a una inconformidad radical con un grado 3 de conflictividad.

La segunda etapa, de “Protesta”, incluye acciones como plantones y bloqueos. Mientras que la etapa denominada “Movilización” se refiere a medidas de oposición, algunas consideradas ilegales, la toma de oficinas y de maquinaria, siendo ligera con grado 7 de conflictividad, cuando se da a nivel localidad; moderada con grado 8 de conflictividad cuando se desarrolla en el municipio y; radical con grado 9 de conflictividad cuando dicha acción se da en un ámbito estatal o federal. El grado máximo de conflictividad es la “Confrontación”, que incluye privación de la libertad, enfrentamientos violentos y rupturas de negociación.

Con base en aquella propuesta original, en este trabajo se propuso agregar la escala de conflictividad para las acciones emprendidas por el aparato de gobierno ligadas a la obra. Al igual que los grados de conflictividad de la sociedad civil, la escala propuesta presenta cuatro etapas: Promoción, incumplimiento, intimidación y represión (Tabla 8). A cada etapa, también le corresponden tres niveles de conflictividad: ligera, moderada y

radical, dependiendo del nivel de gobierno que efectúa la acción. Ligera cuando la ejecuta el comisariado o el presidente municipal, moderada cuando la acción la emprende el gobierno estatal y radical si es el gobierno federal quien la realiza.

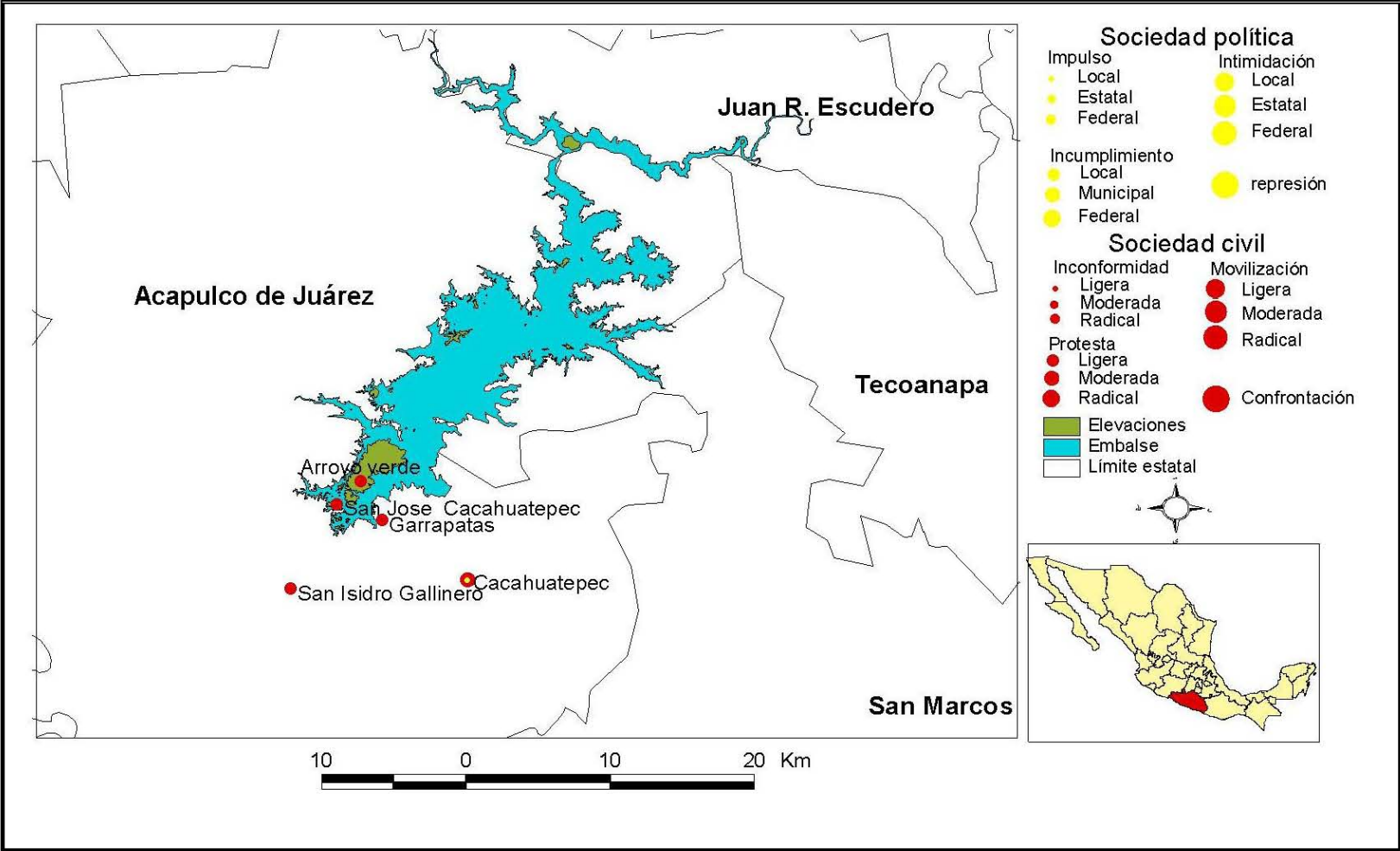
Tabla 8 Grados de conflictividad sociedad política

| Promoción | | | Incumplimientos | | | Intimidación | | | Represión |
|-----------|----------|---------|-----------------|----------|---------|--------------|----------|---------|-----------|
| ligera | moderada | radical | ligera | moderada | radical | ligera | moderada | radical | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

De acuerdo con Ibarra, el desarrollo de la conflictividad de un proceso social no es lineal ni espacialmente homogéneo y, pese a que se distinguen patrones de comportamiento, tampoco a cada acción de la sociedad civil le corresponde una reacción de la estructura de gobierno o viceversa. A partir de la cartografía y de la cronología identificadas, podemos constatar que las primeras acciones de oposición surgen en 2003, en la zona de afectación cortina abajo en las comunidades de Arroyo Verde, Garrapatas y San José Cacahuatpec, más tarde se suman Cacahuatpec y San Isidro Gallinero (ver Mapa 7). Los primeros en manifestar su inconformidad fueron los campesinos de los BCC ante la intromisión en sus tierras de empleados de la Comisión sin haber solicitado autorización. Las primeras acciones de inconformidad fueron plantones permanentes, cuyo grado de conflictividad corresponde a 4, según la metodología, es decir, desde el inicio el rechazo fue contundente.

En ese año de 2003 miembros de la sociedad política y civil intercambiaron declaraciones públicamente en los medios a favor y en contra para respaldar el proceso de negociación e impedir que se agravara el conflicto, mientras el Congreso local formaba una Comisión Especial. A pesar de ello, en el 2004 el conflicto se extendió a más comunidades de los BCC y se incrementó el grado de conflictividad.

Mapa 7 Conflictividad política, 2003



Conflictividad 2004

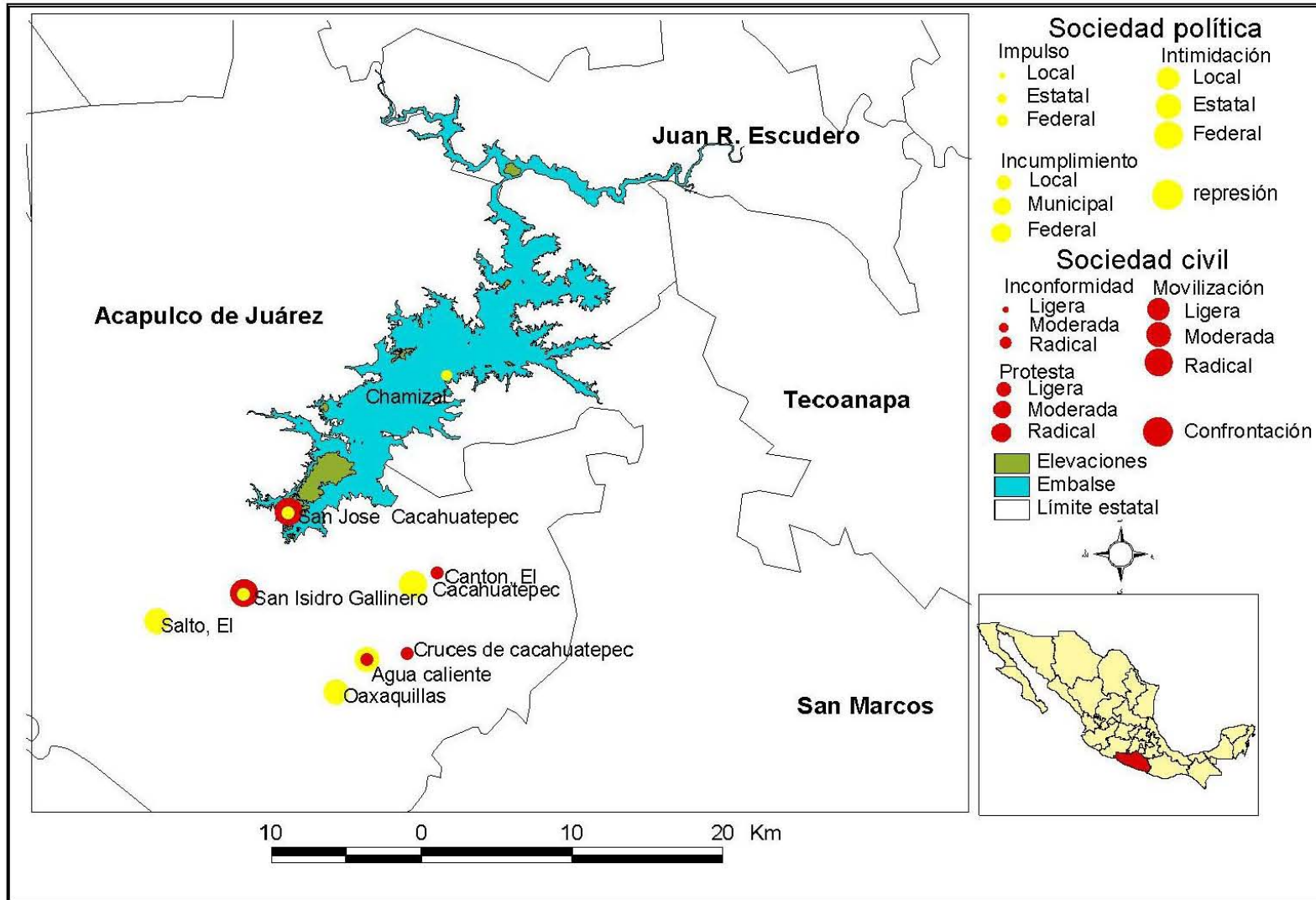
En el año 2004, las acciones de resistencia fueron numerosas e incluyeron marchas municipales y estatales, con una escala de conflictividad de 2: cinco plantones permanentes en las comunidades de Agua Caliente, San Isidro Gallinero, Cruces de Cacahuatpec y El Cantón que impidieron la entrada de la CFE a sus terrenos. Con nivel 4 de conflictividad: la retención de varios de sus empleados y el decomiso de dos camionetas utilizadas en esa operación y, que más tarde fueron devueltas. La confrontación llegó al grado 10, cuando un simpatizante del proyecto hirió a un opositor en Cacahuatpec (El Sur de Acapulco 30/06/2004 y 21/12/2004).

Durante este año se evidenció la polarización entre quienes estaban a favor de la presa y los opositores. Un agravante del conflicto se dió entre los propios campesinos, cuando la CFE contrató a algunos pobladores para ocuparse en las obras, a lo que el resto de la población se opuso y el trabajo no se realizó, poniendo en riesgo su contratación. En otros caso, la CFE trató de obtener el respaldo de las comunidades a través de obras, financiando fiestas locales y hasta sobornando al comisariado (La Jornada 13/11/2004).

Las entrevistas realizadas en trabajo de campo⁴² mostraron que el descontento se incrementó debido a la escasa información proporcionada por la CFE. Los entrevistados se quejaron de citas y promesas incumplidas o pospuestas, de que no se les aclaraba el grado y tipos de afectación, ni el monto previsto para la indemnización de sus terrenos. La escasa información que recibían se limitaba a aspectos técnicos de la obra, como las dimensiones de la cortina y las fases del proceso de construcción. Todo ello se sumó a la desconfianza de los pobladores hacia la CFE, no sólo por los antecedentes negativos en casos de expropiación como las realizadas durante la construcción de la Presa La Venta y de la autopista México-Acapulco, mismas que según los entrevistados, hasta el momento de intervención de la Comisión no se habían cumplido cabalmente. El grado de intimidación oficial se incrementó cuando la CFE demandó ante el Ministerio Público a ocho líderes del movimiento acusándolos por secuestro de un ingeniero y el decomiso de camionetas cerca del poblado de San Isidro Gallinero, lo que marcó una conflictividad de grado 9.

⁴² Realizada del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2004 en el poblado de Aguas Calientes, municipio de Acapulco.

Mapa 8 Conflictividad política, 2004



En innumerables ocasiones la CFE trató de ingresar a pesar de los plantones instalados por el CECOP, contraviniendo el proceso de negociación que se había iniciado para reducir el nivel de conflictividad. Además la intimidación contra los líderes continuó, y Marco Antonio Suástegui Muñoz⁴³ y Francisco Valeriano fueron detenidos en julio, acusados de "privación ilegal de la libertad" de los empleados que trabajaban en la obra. Simultáneamente el CECOP se organizaba y difundía su lucha. En la comunidad de Agua Caliente se realizó el Primer Encuentro Nacional de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), al que acudieron afectados por la construcción de presas de todo el país⁴⁴, organizaciones regionales, nacionales e internacionales⁴⁵. Este encuentro marcó el inicio de un movimiento que buscaba cohesionar a las diversas luchas antipresas que se estaban dando en diferentes estados. El hecho de que el encuentro se realizara en los BCC fortalece a los opositores al proyecto, puesto que se visualiza la problemática y los asistentes reciben información que pueden difundir a sus lugares de origen aumentando el apoyo.

⁴³ Vocero del CECOP y del Frente Opositor al Muelle de Icacos (FOMI), es uno de los actores sociales con mayor visibilidad en el conflicto.

⁴⁴ La Parota - Guerrero, Arcediano - Jalisco, La Línea, El Porvenir, Isla El Cayo Boca del Cerro - Tabasco, El Cajón - Nayarit, Benito Juárez - Oaxaca, Huixtán I, Huixtán II, Quetzalli, Itzantún - Chiapas, Miguel Alemán - Oaxaca, Aguamilpa - La Laguna, Cañon de la Cabeza y Tigre - Coahuila.

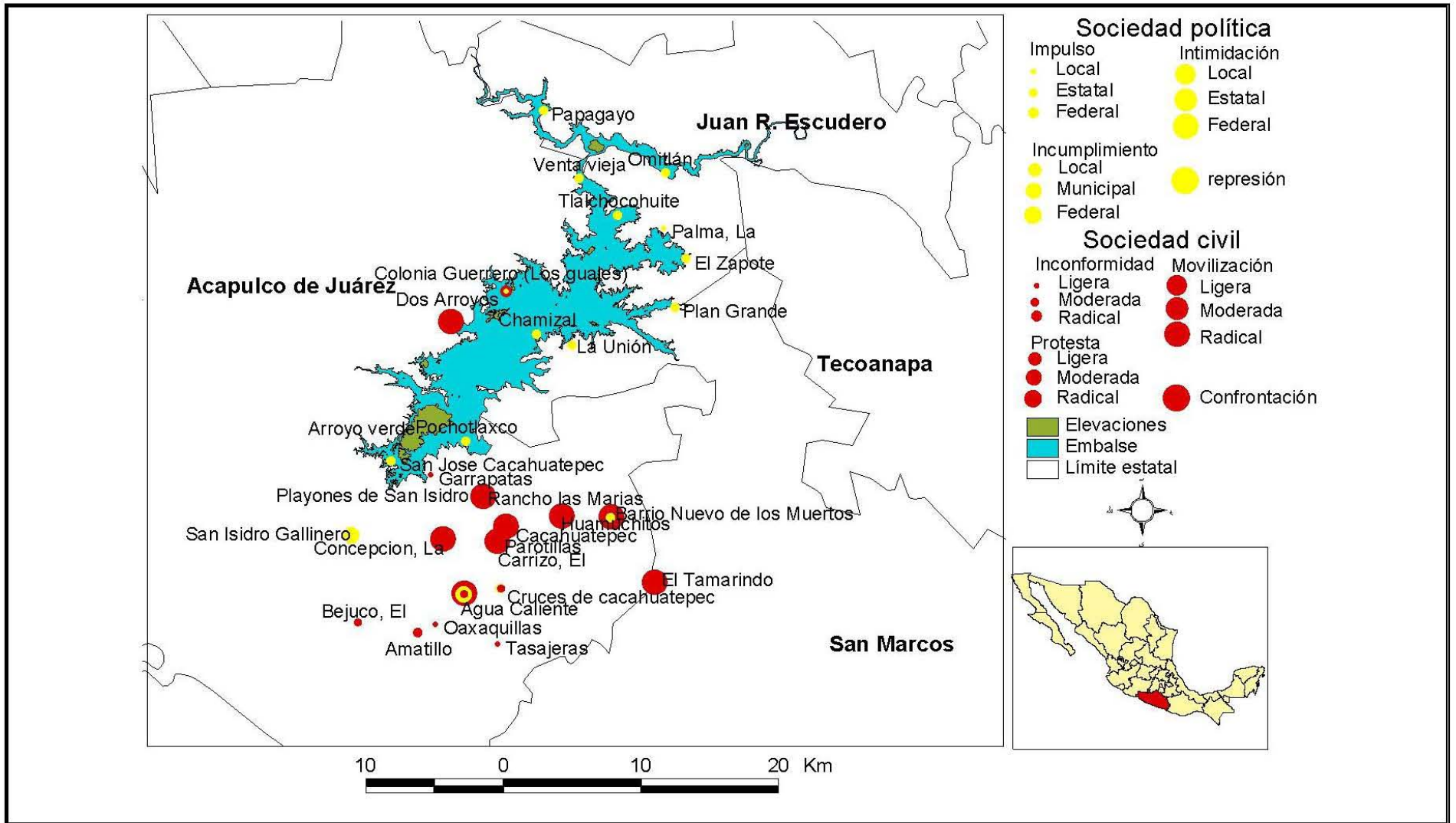
⁴⁵ Frente por los Derechos Económicos, Yaxchilán, Usumacinta - Binacionales México-Guatemala, Socio-Ambientales y Culturales de los Pueblos FDESC, Gro. Frente Chiapaneco contra las Represas - Frontera Sur. Frente Petenero contra las Represas - Guatemala. Coordinadora de Afectad@s por la Construcción de Grandes Embalses y Trasvases COAGRET - España. Red Internacional de Ríos - IRN, Colectivo Rebelión, PRT Guerrero, Organización Social para el Desarrollo OSD, Kupuri, Expediente Nacional, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, CETIG, KRAF, UCIC, Movimiento Agrario Indígena Zapatista MAIZ, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, LAS ABEJAS, Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria CIEPAC, Fundación Cuenca Lerma Lago, Educación Para La Paz EDUPAZ, Instituto Internacional de Energías Renovables IRRI, Colectivo Filmadoras, PAIR AC., COMPITCH, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona del Istmo UCIZONI, CARRSEZ, Habitat Internacional Coalition HICAC, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos AMAP, Unión de Colonias Populares UCP, Unión de Campesinos Emiliano Zapata UCEZ, CLAIP, Frente Zapatista de Liberación Nacional FZLN, Transparencia Social, Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social SNTSS, CDHPRO, Punta Diamante, Comunidades Eclesiales de Base CEBS, Comité de la Sociedad Civil de Jalapa COSOCI, Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía ANIPA, Asociación Nacional de Abogados Democráticos ANAD, Guerreros Verdes, Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio RMALC, Convergencia O.S, Colectivo Gandhi, MLP, Unión Nacional de Trabajadores UNT Guerrero, Sindicato de Pesca, Cooperativa Pesquera, INDYMEDIA Chiapas, Comunicadores Populares por la Autonomía COMPPA, Frente de los Pueblos en defensa de la Tierra - San Salvador Atenco FPDT, Pacto de Grupos Ecologistas, FOSEC, FODEG.

Conflictividad 2005

El año 2005 es sin duda la cúspide de la conflictividad política por el número de acciones y el grado alcanzado, así como extensión del movimiento opositor hacia localidades ubicadas en la zona norte del embalse previsto. Entre agosto y septiembre, el gobierno federal lanzó la Campaña Infraestructura "La Parota" a través de impresos en diarios de los estados y spots de televisión, con la imagen de Jorge Campos⁴⁶. En noviembre ambos niveles de gobierno organizaron una reunión en el Centro Internacional de Acapulco, donde llevaron a 2 mil campesinos provenientes de los 19 núcleos agrarios que serán afectados por la presa. Allí el entonces gobernador Zeferino Torreblanca y la encargada de la oficina de la Presidencia para el desarrollo de los pueblos indígenas, Xóchitl Gálvez, declararon como "zona de atención prioritaria" la región que se encuentra a las márgenes del río Papagayo, canalizando recurso adicionales para obras públicas. La razón fundamental era el apremio de la CFE por obtener la anuencia de los núcleos agrarios para la expropiación de las tierras. Según los tiempos de la paraestatal, a fines del 2005 se debía publicar la licitación para conseguir la aprobación de la obra antes de que finalizara el sexenio. Las asambleas que faltaban, se realizaron en condiciones irregulares con una mayor conflictividad, cuyo grado llegó al máximo valor, de confrontación y represión. Dos trabajadores estatales resultaron heridos, perdieron la libertad cuatro opositores y la vida dos más, tras enfrentamientos (Anexo IV). En el caso de los BCC, las asambleas celebradas con relación a la presa se destacaron por el papel autoritario y represivo de la CFE y el gobierno del Estado, así como la subordinación incondicional del comisariado (Mapa 9).

⁴⁶ Futbolista

Mapa 9 Conflictividad política, 2005



Las asambleas en los Bienes Comunales de Cacahuatepec (BBC)

El primer acercamiento formal con los BCC se registró en junio de 2003, cuando el Comisariado permitió la entrada a la CFE para elaborar los estudios preliminares de la obra. Comuneros de Garrapatas, Arroyo Verde y San José Cacahuatepec, anexos de los BCC, señalaron en entrevista que no se les consultó y por ello iniciaron los bloqueos para evitar el ingreso del personal.

Posteriormente, el 25 de abril de 2004 se efectuó una nueva asamblea para autorizar la continuación de los estudios preliminares. La CFE reportó 3 mil 704 votos de aprobación y 40 abstenciones. De acuerdo con los opositores, el Comisariado falsificó firmas para validar la asamblea, no verificó el quórum ni pasó lista de asistencia y en 12 minutos se votó en medio de un dispositivo de seguridad (El Sur de Acapulco 26/04/2004). Por ello, los opositores emprendieron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA), quien decretó medidas cautelares en la zona, ordenando a la CFE suspender los estudios hasta resolver la solicitud de anulación de la asamblea del 25 de abril. Cabe señalar que las medidas cautelares se violaron reiteradamente como se documenta en la cronología (Anexo IV).

Aun cuando no había concluido el proceso de demanda de anulación de la asamblea de abril, el 14 de agosto 2005 se efectuó otra reunión, esta vez en la comunidad del Campanario. El tema central fue la solicitud de la CFE para autorizar el cambio de uso de suelo. La reunión convocada por el comisariado de los BCC, contó con un dispositivo de seguridad integrado por diversas corporaciones policiales que acordonaron el área con malla ciclónica electrificada. Otro grupo de policías instaló retenes en las comunidades de San Juan el Chico y Las Minas para impedir el acceso a los comuneros inconformes, quienes tuvieron que rodear por el monte para llegar a la asamblea. Por otro lado, notarios públicos se trasladaron en helicóptero desde Acapulco para ser testigos de la decisión, que la CFE esperaba a su favor. Finalmente la reunión fue suspendida tras los enfrentamientos entre opositores y la policía (Sur de Acapulco, La Jornada, 15/08/05).

El 23 de agosto de 2005, nuevamente el Comisariado de los BCC en coordinación con el líder cetemista, Evencio Romero Sotelo, efectuó la segunda asamblea para autorizar la expropiación. Una vez más, se desplegaron elementos de seguridad pública del Estado y, para impedir el acceso a los comuneros opositores, se cambió de sede al municipio de San Marcos, fuera del núcleo agrario original. De acuerdo con diferentes

crónicas de periódicos locales y nacionales, se permitía la entrada sólo a quienes portaban un distintivo en la camisa que señalaba a quien respaldaban el proyecto. Como en ocasiones anteriores, no se emitió convocatoria oportunamente ni se difundió en lugares públicos como lo marca la Ley Agraria. El Comisariado reportó la aprobación del proyecto con 2,785 votos a favor y 50 en contra, sin embargo, el acta sólo la firmaron 823 comuneros (La Jornada 15/12/05).

Ante tales circunstancias, los opositores presentaron en el TUA otra demanda de nulidad, con 3 mil 282 firmas de apoyo y copias fotostáticas de 20 recibos del pago a los campesinos que votaron a favor. Pidieron como medida cautelar que la CFE, la SRA y el Comisariado de los BCC se abstuvieran de realizar trabajos o celebrar convenios en la zona de afectación (Novedades de Acapulco, 08/09/05).

Asambleas Dos Arroyos

El proceso que vivieron los comuneros de los BCC se repitió también en los Ejidos Dos Arroyos y Los Huajes.

“Nuestra visión es que la CFE con el gobierno del estado ya tienen un patrón de conducta para la imposición del proyecto La Parota en los núcleos que van a ser afectados. Así lo hicieron en Cacahuatpec, se hizo una asamblea con mucha fuerza pública, pocos comuneros, documentos previamente alterados, se tuvo que sacar del núcleo comunal”. El abogado Vidulfo Rosales Sierra Tlachinollan (El Sur, 28/11/05).

Para el Ejido Dos Arroyos, la primera asamblea que autorizaría a la CFE valorar las tierras que pretende comprar para la construcción de la presa, se realizó bajo una confrontación entre comuneros opositores y la policía antimotines. El enfrentamiento se inició la madrugada del veintisiete de noviembre de 2005 a la entrada del poblado, cuando campesinos que permanecían en plantón permanente impidieron el paso a 300 elementos de la Policía Preventiva Municipal y antimotines, quienes por la fuerza trataron de ingresar, lanzando gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes (La Jornada, 28/11/05).

“Los policías no entraron por la carretera donde está el plantón porque no pudieron, dieron la vuelta por el panteón. A las 8 nos agarraron a pedradas, toletazos y gases, y así pudieron entrar”, ejidatario Lorenzo Jiménez Alarcón (El Sur, 28/11/05).

Más tarde, otro grupo de policías ingresó por otro punto del poblado a resguardar la asamblea ejidal que, finalmente, tuvo que ser cancelada. El resultado del enfrentamiento fue la detención de cuatro manifestantes que más tarde fueron liberados, así como policías y pobladores heridos (La Jornada, 19/12/05).

De las irregularidades que acompañaron a la asamblea antes de ser cancelada, destacan la falta de una primera convocatoria, tampoco se estableció la mesa en donde se presentaría el padrón y se pasara lista, por lo que, ninguno de los asistentes firmó el acta final. A ello se sumó la baja asistencia, porque el cerco policiaco impidió el ingreso de los ejidatarios, en su mayoría inconformes. Tampoco asistió el presidente del Comisariado Ejidal, quien públicamente se deslindó de la asamblea; su lugar lo tomó el líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Evencio Romero, y un líder local Aurelio Hernández, ambos ajenos al núcleo agrario que también habían participado en la asamblea de la comunidad de Cacahuatpec celebrada en San Marcos (La Jornada, 28/11/05 y El Sur, 28/11/05).

El 16 de diciembre de 2005 hubo otro enfrentamiento entre la policía y los opositores, mientras la asamblea convocada por la Procuraduría Agraria, se realizó en una sede fuera del núcleo agrario, sin previo aviso del cambio. Pareciera que en esta ocasión la estrategia del gobierno del Estado y de la CFE consistió en distraer la atención de los opositores mediante la provocación, puesto que mientras se daba el enfrentamiento los campesinos que apoyaban el proyecto fueron trasladados a Tierra Colorada y en breve, aprobaron la presa. Nuevamente, la sede de la reunión permaneció resguardada por policías antimotines que, esta vez, impidieron el paso a representantes de la Comisión de los Derechos Humanos (El Sur, 16/12/05).

En ausencia del Comisario Ejidal, de nueva cuenta, el dirigente de la CNC, Evencio Romero, ocupó su lugar y fue avalada por el notario público Número Tres de Chilpancingo, Hugo Pérez Bautista. De acuerdo con la CFE, la asamblea se llevó a cabo de manera pacífica y ordenada, acudieron 60 por ciento de 572 ejidatarios inscritos en el padrón de la comunidad, quienes expresaron su apoyo al proyecto (Novedades de Acapulco, La Crónica de hoy, 17/12/05). Cuando los ejidatarios opositores comprendieron la estrategia, la asamblea había concluido. Mientras la conflictividad llegaba en Dos Arroyos a su máximo valor (10 grados en la escala: confrontación y represión), en Huamuchitos hombres armados a favor de la presa intentaron levantar por la fuerza el plantón de los comuneros opositores (El Sur, 28/11/05).

Asambleas Los Huajes

Con los hechos ocurridos en Dos Arroyos y los BCC, los ejidatarios de Los Huajes tenían incertidumbre de cuando se efectuaría la asamblea en su núcleo agrario. A principios de diciembre de 2005 existían rumores de que la reunión se realizaría en esos días, sin embargo, el Comisario Ejidal se deslindó de toda convocatoria. Ante la posibilidad de una imposición, ejidatarios opositores con el apoyo de miembros del CECOP y de otros núcleos agrarios, bloquearon las dos entradas a la cabecera para impedir el paso a la CFE y a quienes estaban a favor de la construcción, que incluía a vecinos de la localidad próxima, Altos del Camarón (La Jornada, 04/12/05).

Finalmente, la asamblea esperada para aprobar la construcción de la presa, tuvo lugar el 19 de diciembre pero sólo se presentaron diez de los 195 ejidatarios reconocidos por PROCEDE (MIA, 2004:936), por lo que fue suspendida por falta de quórum (La Jornada, 19/12/05 y Reforma 20/12/05). Es en la reunión del 27 de diciembre cuando se aprobó el proyecto con 69 ejidatarios. La asamblea fue convocada y dirigida por Alejandro Bello Gómez, de la Procuraduría Agraria (PA). La anuencia a la presa se logró gracias a que los ejidatarios que apoyaban el proyecto, salieron discretamente por veredas del poblado hasta la autopista, en donde los recogieron autobuses para su traslado al poblado Kilómetro 21. Mientras, los miembros del CECOP, que bloqueaban la entrada a Los Huajes impidiendo el acceso para evitar la asamblea, no supieron del cambio de sede (La Jornada, 28-29/12/05).

Es probable que de enterarse a tiempo del cambio, la policía del estado y agentes de Gobernación que resguardaban la reunión, les habrían impedido el paso, como sucedió en las anteriores reuniones. De las irregularidades que el CECOP denuncia se presentaron en la asamblea, destaca el que no se haya verificado el quórum legal, la Procuraduría Agraria hizo constar la participación de ejidatarios que ya habían muerto o habían migrado a Estados Unidos y que el cambio de sede fuera del núcleo agrario no se notificó oportunamente (Proceso, 22/03/07).

Asambleas La Palma

En el caso del ejido La Palma, la primera asamblea para tratar el asunto de la Presa se realizó el 18 de diciembre de 2005. Después de seis horas de discusiones y por falta de acuerdos, se resolvió convocar a una segunda asamblea. Los ejidatarios opositores argumentaron que existía el quórum legal y que la intervención de la CFE y de la Procuraduría Agraria fue decisiva para posponer la votación a una segunda convocatoria

ya que, de llevarse a cabo en ese momento, el resultado habría sido en contra del proyecto (El sur de Acapulco 19/12/05).

A diferencia de las asambleas de Dos Arroyos, Los Huajes y Cacahuatpec, en La Palma no hubo policías y la discusión se centró en si se tomaba en cuenta a los vecindados o solo a los ejidatarios en la votación final, lo único que lograron los vecindados fue expresar sus argumentos en la asamblea puesto que la Ley Agraria solo reconoce a los ejidatarios.

La asamblea decisiva para el proyecto se efectuó el 27 de diciembre del mismo año. De un total de 260 ejidatarios 71 votaron a favor, 24 se abstuvieron y 19 se manifestaron en contra (El Sur de Acapulco, 28/12/05). No obstante que el proceso de aprobación de la presa en el Ejido La Palma se realizó en relativa calma, se presentaron irregularidades similares a las habidas en los núcleos agrarios de Dos Arroyos, Los Huajes y Cacahuatpec. Por eso los inconformes, presentaron una denuncia para anular la asamblea.

A partir de la forma de aprobación del proyecto, el grupo parlamentario federal del PRD (2006) denunció que la CFE no se condujo con apego a la legalidad y utilizó estrategias para justificar e imponer el proyecto. Dentro de las irregularidades destacan:

- a) ofrecimiento de obras, servicios y proyectos productivos a cambio de la anuencia,
- b) retención de información y falta de consulta a quienes serían afectados por las obras,
- c) convocatorias y realización de asambleas comunales que violan la ley agraria y el Estado de derecho,
- d) represión y utilización desproporcionada de los cuerpos de seguridad pública en la vigilancia de dichas asambleas,
- e) y la criminalización de opositores al proyecto, a través de la liberación de órdenes de aprehensión.

Pero el 2005 no sólo se caracterizó por el máximo valor de conflictividad, también destacó por la difusión que el CECOP dió a su movimiento. Junto con las acciones de resistencia ante la imposición del proyecto, los opositores difundieron su lucha en el IV Encuentro Latinoamericano contra las Represas por los pueblos en Guatemala, recibieron

la visita de integrantes del Tribunal Latinoamericano del Agua⁴⁷ y el apoyo de diferentes organizaciones que conocieron su caso, como el Espacio de coordinación de organizaciones civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)⁴⁸. También se inicia una etapa de lucha legal para impugnar las cuatro asambleas últimas celebradas, en ese rubro son apoyados fundamentalmente por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

Conflictividad 2006

Tras el grado de conflictividad máximo que se presentó en la zona al finalizar el año 2005, en el 2006 entran al debate organizaciones de prestigio internacional, fundamentalmente de derechos humanos. Y no es para menos, la represión del gobierno estatal, la confrontación entre comuneros y la aprobación en condiciones irregulares de las asambleas había puesto en duda la legalidad del procedimiento seguido para impulsar el proyecto.

En el año 2006 fueron menos las acciones registradas en la zona del proyecto, la lucha se trasladó a los juzgados, sin embargo, el grado de conflictividad aun fue elevado en las comunidades de San José Cacahuatpec y en Dos Arroyos, en donde murió un opositor a golpes (Mapa 10). Este asesinato se produjo en un contexto de tensión, cuando la CFE prometió pagar la fiesta patronal del ejido del que era el occiso en contra de la decisión mayoritaria de los habitantes.

⁴⁷ Organización internacional, autónoma e independiente, de justicia ambiental, creada con el fin de contribuir a la solución de controversias relacionadas con los sistemas hídricos en América Latina. Surge en 1998 y sesionó por primera vez en 2000 (<http://www.tragua.com/index.html>). La visita de representantes del tribunal a la zona del conflicto fue respuesta a la petición del CECOP, el propósito fue documentar la situación para que la hidroeléctrica fuera uno de los temas a tratar en las audiencias públicas llevadas a cabo en marzo de 2006, paralelas al IV Foro Internacional del Agua (<http://www.tragua.com/index.html>).

⁴⁸ Organización nacional conformada por diversas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos; Casa y Ciudad de Coalición Hábitat México, Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROSOC), Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) de Fomento Cultural y Educativo, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Consultoría Especializada en Justiciabilidad de los DESC (CEJUDESC), DECA Equipo Pueblo, Defensoría del Derecho a la Salud – Chiapas, FIAN Sección México, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) – Guadalajara, Instituto Mexicano Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Liga Mexicana de Defensa de Derechos Humanos (LIMEDDH), Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional del Hábitat, RADAR-Colectivo de estudios Alternativos en Derecho. A partir de 2005 se ha sumado a las denuncias promovidas por el CECOP.

La CFE continuó con la estrategia de difusión y reforzó las acciones para ganar voluntades a través de promover distintas obras “de compensación” ya construidas, aún en pueblos que serían inundados por la hidroeléctrica (Tabla 9).

Tabla 9 Obras de compensación

| Localidad | Tipo de obra | Costo en pesos | |
|----------------------|--------------|---|--------------|
| San Cacahuatpec | José | Sistema de abastecimiento de agua potable | 1 237 904 |
| | | Pavimentación de la calle principal | 907 150 |
| | | Rehabilitación y ampliación del centro de salud | 323 688 |
| | | Aplanado de la capilla, la primaria, el jardín de niños y la cancha de básquetbol | |
| La Concepción | | casa muestra | 411 172 |
| | | “áreas exteriores” | 216 186.32 |
| | | rehabilitación de la cancha deportiva | 177 346.2 |
| | | Construcción de un toril | 189 924.22 |
| Tlalchocohuite | | remozó la comisaría, el centro de salud, el jardín de niños, la capilla, la primaria y la cancha del pueblo | |
| Agua de Perro | | casa muestra | 443 380.48 |
| | | Edificio para la Comisaría Ejidal | 89199.37 |
| | | cancha de basquetboll con techo | 718 656.15 |
| Agua Zarca de Peña, | de la | Construcción de casa muestra | 371 071.77 |
| | | Toril | 208 050.85 |
| | | Remodelación del albergue para maestros | 205 200.44 |
| San Isidro Gallinero | | obra de captación del sistema de agua potable construcción de lavaderos y caminos para sacar las cosechas | |
| Altos del Camarón | | la pavimentación de calles con alcantarilla de aguas pluviales | 1 250 724.80 |
| | | Piso y techo de la cancha de basquetbol | 568 330 |
| San Juan del Reparo | | comisaría ejidal | 735 752.11 |
| | | Techo | 270 418.83 |
| Los Mayos | | Escuela | 545 560.94 |
| | | Albergue para maestros | |
| | | Iglesia | 759 886. 18 |
| | | Rastrillado el camino | |

Elaboración propia con datos del Sur de Acapulco 16/10/2006

De acuerdo a la Secretaria de Relaciones Exteriores, distintas obras se realizaron desde el 2003, cuando se rehabilitaron 182 km. de caminos. En 2004 se ejecutaron 39 obras, y se rehabilitaron 600 km y en 2005 se ejecutaron 38 obras y se rehabilitaron caminos que contribuyeron al desarrollo y comunicación de otros 38 poblados (Secretaria de Relaciones Exteriores, 2008).

Todas estas obras cuentan con un letrero muy visible que enuncian el nombre o tipo de construcción o rehabilitación, con letras grandes y el logotipo del proyecto La Parota en color naranja (Sur de Acapulco 16/10/2006).

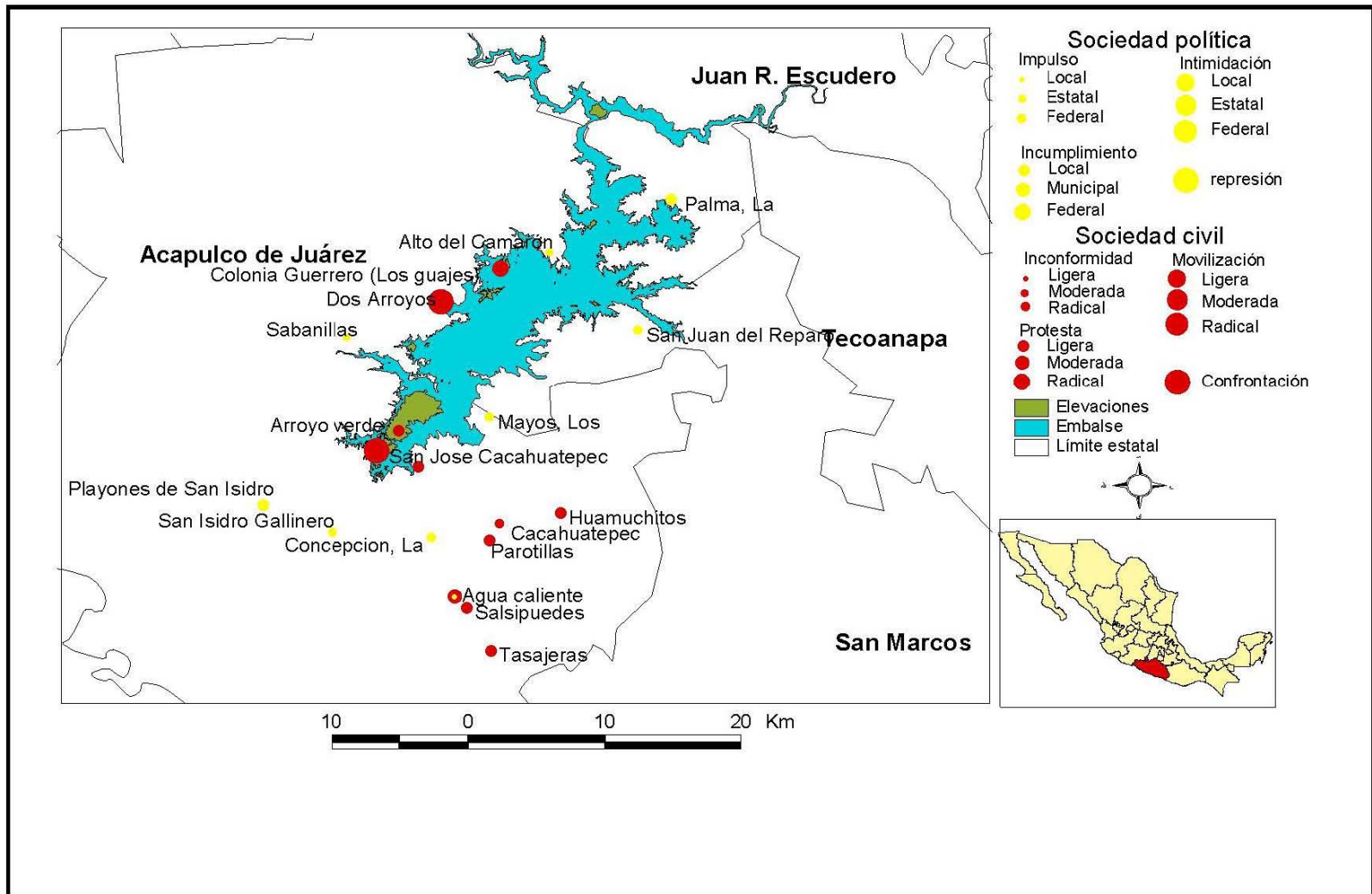
Si bien las obras se iniciaron desde el 2003, en el 2006 surgió un programa de mano de obra local, mediante el cual la CFE capacitó y contrató a campesinos de las comunidades “beneficiadas”. Bajo este esquema, en colaboración con el gobierno estatal, la Comisión inició la construcción de la carretera de Tunzingo a La Concepción que, de acuerdo con los opositores, es fundamental para la presa, ya que la carretera llegaría a la cortina.

Dentro de la estrategia en medios de comunicación, la empresa privada *Parametría* en diciembre del 2006 elaboró una encuesta en Acapulco referente a la obra, según la cual el 82 por ciento de los ciudadanos respaldaban el proyecto. (El Sur de Acapulco, 15/12/2006).

Por su parte, la CECOP recibía muestras de apoyo de organismos no gubernamentales internacionales, como la carta que en enero envió la Red Internacional de los Ríos (IRN por sus siglas en inglés) al presidente Fox para manifestar su preocupación por las “irregularidades y violaciones” cometidas contra la organización, o la carta enviada en julio por Mette Hald Hundewadt, miembro de Amnistía Internacional (AI) en Dinamarca quien solicitó al Tribunal Agrario un fallo “...con base en la verdad, sin injerencias políticas y con irrestricto apego a derecho” (El Sur de Acapulco, 17/01 y 6/10/2006).

Además, continuaron las marchas y acciones de difusión, como la Caravana Aguas en Movimiento en la que participaron diferentes organizaciones asociadas al MAPDER, ambientalistas y estudiantes.

Mapa 10 Conflictividad política, 2006



La difusión del movimiento de resistencia consolidó el entramado solidario de diversas organizaciones, que incluso integraron una alianza con el fin de rechazar la construcción de la presa. Por su parte, la Cámara de Diputados Federal emitió un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar a fondo las irregularidades en la zona afectable por el proyecto (cámara de Diputados, 2006).

En el ámbito legal, en el 2006 el CECOP interpuso ante el TUA, las demandas de nulidad de las asambleas de Cacahuatpec, Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma y obtuvo tres amparos a su favor para garantizar el resguardo de tres tierras ejidales para evitar la ejecución de obras relacionadas con la hidroeléctrica (El Sur de Acapulco, 13/09/2006).

Conflictividad 2007

En 2007 el grado de conflictividad política en la zona no disminuyó, aunque el mayor número de acciones continuó concentrándose en los BCC (Mapa 101). El suceso más importante del primer trimestre del año fue la resolución del TUA a favor del CECOP, que les concedió en marzo de 2007 la anulación de la asamblea celebrada el 23 de agosto de 2005, en la que únicamente los comuneros de Cacahuatpec a favor del proyecto dieron la anuencia para que la CFE inicie los trámites de expropiación de sus tierras.

El CECOP continuó recibiendo muestras de apoyo y declaraciones que respaldaban sus demandas. El informe que emitió Amnistía Internacional (AI), tras la visita de la secretaria general del organismo, Irene Khan, a tres comunidades de los BCC, fue fundamental al reconocer que las acciones realizadas por el aparato de gobierno no fueron útiles para generar los mecanismos idóneos de negociación.

AI señala su preocupación ante el impacto del proyecto y la manera en que el gobierno se estaba disponiendo a ponerlo en ejecución. Los motivos, que coinciden con los mencionados por otras organizaciones nacionales y estatales y que, AI también retoma, son la exclusión de la mayoría de las mujeres afectadas por el proyecto en la toma de decisiones al no ser reconocidas en los padrones de los núcleos agrarios, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a una auténtica oportunidad de consultar y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones.

El informe de Amnistía Internacional (2007) que fue entregado al Gobierno Federal, al de Guerrero y a la CFE, incluyó seis recomendaciones:

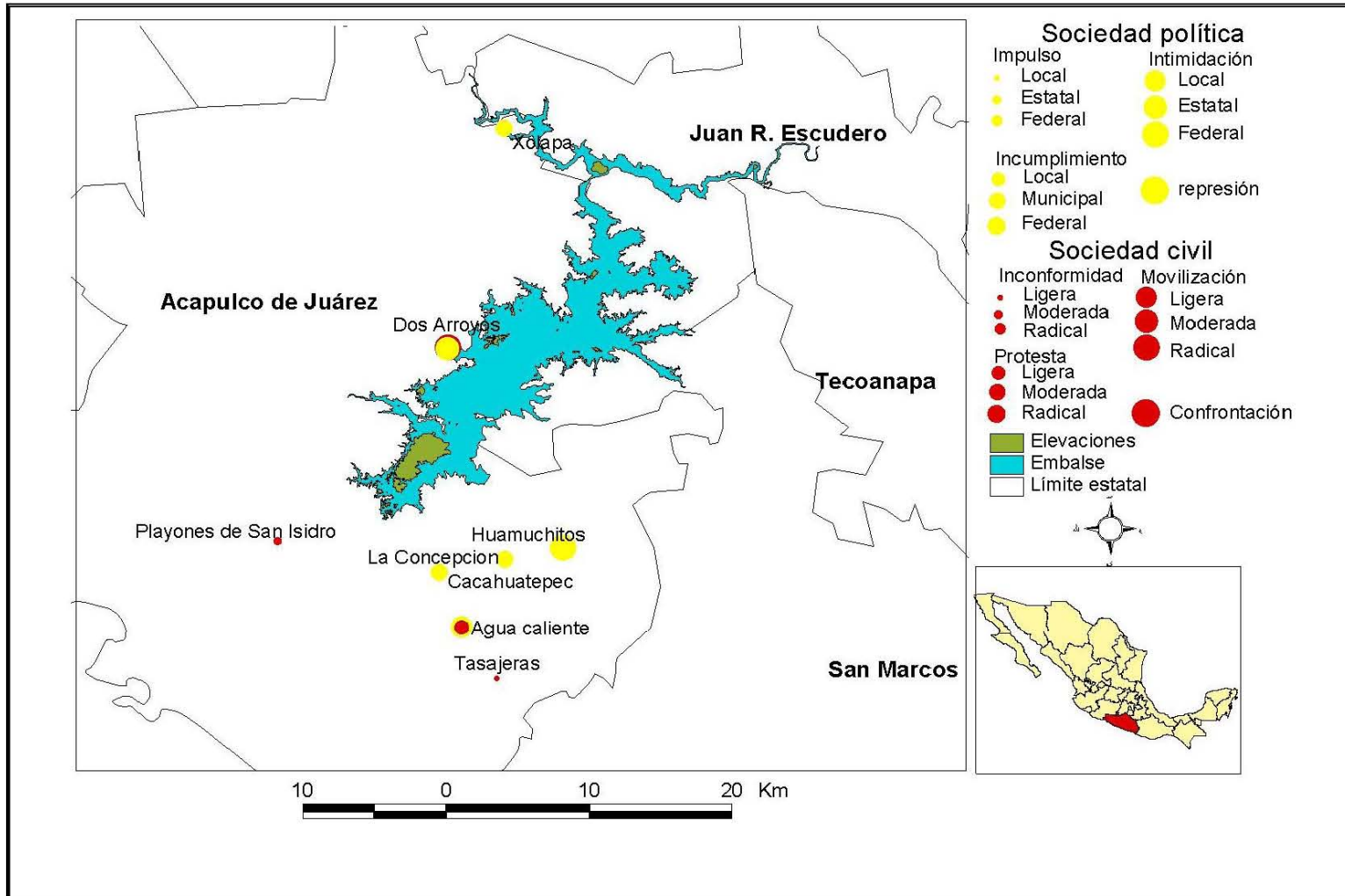
- Que se acaten las órdenes del Tribunal Unitario Agrario de suspender las obras preparatorias;
- Que se tomen medidas concretas para reducir el clima de tensión y violencia,
- Asegurar que los defensores de los derechos humanos y activistas comunitarios puedan desarrollar sus actividades sin sufrir temor ni intimidación,
- Asegurar la participación genuina en la toma de decisiones que afecten al ejercicio de sus derechos humanos de los afectados,
- Garantizar los derechos de los pueblos indígenas a tierras, territorios y recursos naturales, y
- Que se apliquen las recomendaciones formuladas con relación a La Parota por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Por el contrario, las acciones emprendidas por el gobierno federal lejos de acatar las recomendaciones, continuaron con la intimidación a los líderes y la imposición de la obra. En abril del 2007, Rodolfo Chávez Galindo, miembro del CECOP, fue detenido por una orden judicial que había sido anulada en el 2004. Gracias a la intervención de organizaciones de derechos humanos locales quedó en libertad.

En el rubro de las asambleas, tras el fallo en su contra, el Gobierno Federal tuvo que repetir la asamblea de los BCC para obtener el consentimiento de expropiación de tierras. Una vez más, con el apoyo del comisariado y en medio de una discreta operación policial, se celebró una asamblea el 6 de mayo de 2007 en San Juan Grande, municipio de San Marcos. Opositores se presentaron a la reunión acompañados por representantes de organizaciones no gubernamentales que conformaron la “Misión Civil de Observación La Parota⁴⁹” y el Centro de Derechos Humanos la Montaña Tlachinollan, al igual que una delegación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (El sur, La jornada, 07/05/07).

⁴⁹ Conformada por 36 personas de 16 organizaciones y redes nacionales e internacionales; Espacio por los derechos Económicos, Sociales y Culturales, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Amnistía Internacional – Sección Canadá, Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Red de organismos civiles de Derechos humanos “Todos los derechos para Todos y Todas”, Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Centro Ollin Mexica, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos (CAM), ADHEM, Food First International Action network ofna. México (FIAN), RADAR, Red Género y Comercio (REDGE), Calpulli Tlatoani, Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.

Mapa 11 Conflictividad política, 2007



"No hubo necesidad de verificar el padrón. Fue evidente que no hubo quórum (...) No estaban los más de 7 mil comuneros⁵⁰, apenas la tercera parte. Por eso, para evitar un enfrentamiento, se convocó a una segunda asamblea" Jesús Crisanto, comisariado de los BCC (La jornada, 07/05/07).

El 20 de mayo de 2007 se convocó por segunda ocasión a la asamblea en la comunidad El Bejuco, municipio de Acapulco, la cual se suspendió por falta de quórum. Los opositores se presentaron con una Misión Civil de Observación integrada por diferentes organizaciones, que constató acarreos y reiteradas irregularidades. El acuerdo final, entre opositores y el Comisariado, fue el compromiso de una nueva asamblea con el único propósito de analizar los pros y contras del proyecto, sin policía y en terrenos comunales (*La jornada*, 22/05/07).

La Cámara de Diputados federal efectuó una serie de consultas referentes al problema y emitió puntos de acuerdo que instaban a la CFE a conducirse con respeto al derecho a la información, a la consulta y a la participación de las comunidades afectadas pero, sobre todo, exigían el diálogo con los integrantes del CECOP.

Luego de diferentes encuentros para definir los detalles, se emitió una declaración conjunta para efectuar la asamblea el día 12 de agosto de 2007 en Agua Caliente. A la reunión asistieron representantes de la CFE, entre quienes destacan el director de Proyectos de Inversión Financiada, Eugenio Laris Alanís, el subdirector de Construcción, Benjamín Granados Domínguez; el coordinador de Proyectos Hidroeléctricos, Humberto Marengo y el coordinador del proyecto hidroeléctrico, Gerardo Cruz Vázquez. La oposición invitó a Octavio Klimek Alcaraz y Angelberto Martínez Gómez, asesores de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados federal; al investigador Andrés Barreda y al diputado federal por el PRD José Antonio Almazán González (*La Jornada*, 13/08/07, *Milenio* 14/08/07 y 26/08/07).

Las visiones de ambos grupos fueron encontradas. Por un lado, los funcionarios afirmaron que la afectación era mínima a cambio de un proyecto que generará desarrollo, empleo y prosperidad, mientras que para los especialistas invitados la obra es un pretexto para la privatización del agua con un alto costo ecológico y social. Después de escuchar los argumentos a favor y en contra del proyecto, se resolvió rechazar la presa y no volver a realizar otra asamblea relacionada con el proyecto hidroeléctrico. El convenio que firmaron los miembros del Comisariado de BCC y miembros del CECOP se presentó al

⁵⁰ La cifra que maneja la CFE es de 2500 comuneros.

TUA 41 de Acapulco, con la petición de que sea considerado como la resolución final de un proceso de conciliación y diálogo entre las partes.

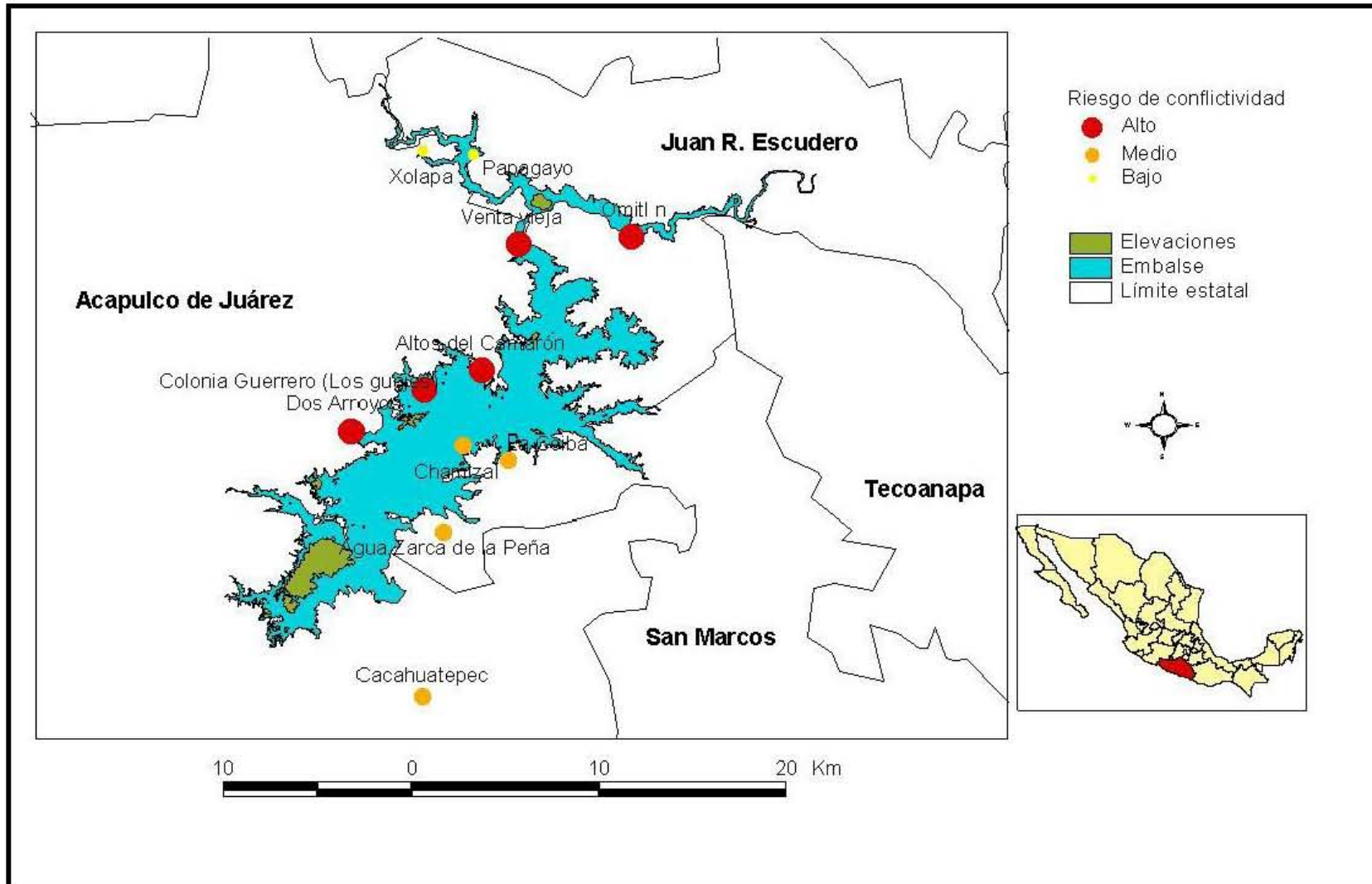
El fin del proyecto parecía haber terminar en esa asamblea. Sin embargo, el 31 de octubre la jueza octava de Distrito en la ciudad de Acapulco, argumentó que la autorización de la MIA y el permiso de uso de aguas de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) no afectan a los comuneros en sus desempeños diarios y por tanto, canceló el amparo provisional que les había concedido. Tras el fallo de la jueza, existió incertidumbre y descontento en las comunidades del CECOP por las declaraciones del Director de Proyectos de Inversión Financiada, Eugenio Laris, en el sentido de que, en ese año, podría continuarse con la obra. De acuerdo con el CEMDA la CFE tergiversa el fallo, puesto que la suspensión definitiva dictada por la Jueza que impedía a la CFE entrar a las tierras comunales continuaba vigente.

Territorialización del conflicto

En el 2003 Ibarra en la MIA (PUMA, 2004) identificó tres zonas con diferente grado de conflictividad. La primera constituida por las localidades afectadas por obras anteriores, la segunda formada por las localidades de Bienes Comunales y la tercera constituida por las comunidades del antiguo Camino Real (Mapa 12).

La zona I fue señalada como de mayor riesgo a la conflictividad por los procesos inadecuados de expropiaciones en otras ocasiones por distintas dependencias (CFE y SCT) así como el incumplimiento de acuerdos. La zona II de los bienes comunales se anticipó como difícil para una negociación debido al fuerte arraigo cultural de sus pobladores, especialmente de Cacahuatpec, por la presencia de elementos identitarios, liderazgos fuertes y organizaciones campesinas de importancia nacional. Mientras que para la zona del Camino Real la construcción de la presa representaba menos amenazas para este grupo gracias a su mayor accesibilidad y diversidad económica (PUMA, 2004; 616-617).

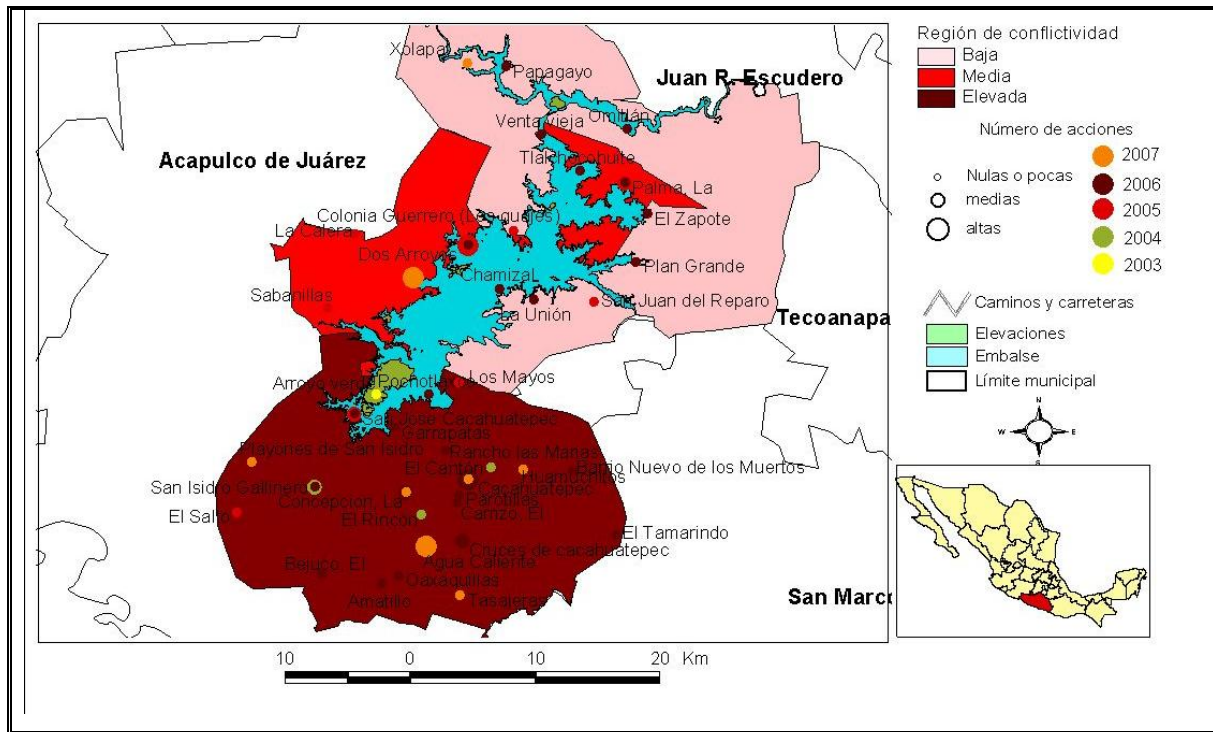
Mapa 12 Riesgo de conflictividad



De acuerdo con el seguimiento del conflicto en la zona en este trabajo, que va del periodo de 2002 al 2007, se distinguen tres regiones en tres fases temporales, ligeramente distintas a las planteadas por Ibarra. Las regiones conflictivas, tanto por el número de acciones como su grado, se aprecian en el

Mapa 13 en donde, además, se señalan en puntos las acciones y el año.

Mapa 13 Regiones de conflictividad



En la periodización del conflicto, la primera etapa corresponde a la realización de estudios antes del 2002, la segunda corresponde al acercamiento con las comunidades, entre 2003 y 2004, y la tercera es la de imposición de 2005 a 2007.

I Región

Las localidades de los núcleos agrarios de los Bienes Comunales Dos Caminos, Chautipa y Agua Zarca así como los ejidos de Tierra Colorada, Omitlán, Agua de Perro, Altos del Camarón, Tepehuaje, Michapa, El Zapote, Chacalapa y San Juan del Reparo, ubicados en la zona norte y este del embalse, conforman la región de baja o nula conflictividad.

Esta zona no es homogénea, las localidades Xolapa, Papagayo y Altos del Camarón, son las mejor comunicadas, Omitlán y Venta Vieja vivieron experiencias de expropiación y enfrentaron litigios con la CFE por el pago de indemnizaciones pendientes de la Presa La Venta. Por su parte, Poxotlaxco, La Unión, Chamizal, Agua Zarca y San Juan del Reparo, son localidades alejadas y marginadas de la zona. Pese a sus diferencias todas dieron rápidamente la anuencia para que el gobierno les expropiara sus tierras.

De acuerdo al trabajo de campo, la mayor parte de quienes aceptaron el proyecto lo hicieron por las posibilidades de obtener algún provecho, algunos consideraban la compra de un camión de volteo para rentarlo en la construcción, otros en la elaboración de lanchas, otros más imaginaban que con la presa habría mejor comunicación y podrían tener sistemas de riego. De acuerdo con Ibarra (PUMA, 2004) la relativa aceptación al proyecto en Agua Zarca, se debía al aislamiento que sufre con respecto a otros poblados y ante la dificultad para la comercialización de sus productos, en este sentido la presa se ofrecía como una oportunidad de contar con mejores condiciones de comunicación.

Es probable que quienes no estaban a favor, no hayan opuesto resistencia por la falta de información para tomar una decisión consciente, por la estructura de control caciquil que limitó la organización de una oposición, por la intimidación ejercida por la Comisión y los respectivos comisariados que condicionaban los apoyos estatales pero, sobre todo, por la desesperanza de tener al menos otra alternativa. A partir del trabajo de campo percibimos que experiencias pasadas les conduce a la conclusión que ante la imposición gubernamental no se puede hacer nada.

El caso del núcleo agrario de Omitlán, afectado por la construcción de la presa hidroeléctrica La Venta y las localidades de La Venta y Altos del Camarón, que también fueron afectados con la autopista a Acapulco, es un claro ejemplo de desesperanza acumulada tras años de incumplimiento de la CFE.

Oponernos, pelear, no nos sirvió de nada en el pasado. Javier Campos, ejidatario de Omitlán (La Jornada, 30/04/2007)

Tras una larga lucha legal para exigir su indemnización, 43 años después de la expropiación, la CFE les pagó a 4.50 pesos el metro cuadrado, que ni siquiera cubre los gastos que tuvieron los ejidatarios durante el litigio, para trasladarse a la Cd. de México. El pago de sus tierras coincide con el proceso de negociación del proyecto de la hidroeléctrica La Parota (La Jornada, 30/04/2007). Es por eso, que para los ejidatarios de

esta región era mejor aprovechar la oportunidad de vender sus tierras a un “buen precio” y tratar de obtener todo lo que la CFE les ofrecía, capacitación, obras de compensación, empleo y vivienda.

Durante la visita al Chamizal la posición general era de oposición a la presa, incluso mencionaron de reuniones en Dos Arroyos, en donde se acordó trabajar en conjunto para oponerse. Sin embargo, también nos narraron la forma de intimidar de los funcionarios de la Comisión cuando llegaron a trazar la cota de nivel de inundación.

“Cuando vinieron a medir me dijeron; jefa hasta aquí va a llegar el nivel del agua y les dije, pues yo no me salgo aunque el agua llegue hasta aquí, que inunden mi casa, y el ingeniero me contesto: pues si se va a salir, así hubo una señora en otro lado y cuando llego el agua que se sale” habitante del Chamizal, entrevista (junio, 2003).

A la desesperanza por las agresiones recibidas se suma el trabajo de la líder de la CNC quien logró controlar a la población afectable, y gracias a ello, el personal de la Comisión pudo ingresar para revisar el terreno, levantar censos, y analizar junto con académicos de la UAG, la posibilidad de realizar proyectos productivos (El Sur de Acapulco, 7/08/06).

II Región

La segunda región de conflictividad que denominamos moderada, abarca los núcleos ejidales de Sabanillas, Dos Arroyos, Los Huajes, La Palma y una sección de Altos del Camarón. En esta zona se desarrollaron numerosas acciones con diversos grados de conflictividad que llegaron a la confrontación y a la represión. De hecho, tres de las demandas interpuestas por la CECOP para anular las asambleas en donde se pretendió autorizar la expropiación, incluyen los núcleos agrarios de esta zona.

La razón para que se haya extendido la inconformidad, es la propagación del conflicto desde los BCC, que se sumó a la labor de imposición de la Comisión y el gobierno del Estado. La premura por obtener la autorización de las asambleas llevó a la Comisión a cometer ilegalidades que polarizaron a la población e incrementaron el conflicto en esta región.

El caso de Dos Arroyos llama la atención porque, antes de la formación del CECOP, las asambleas de oposición se realizaron en esta comunidad, sin que se lograra articular desde ahí el movimiento. Es probable que la estructura priísta presente en la

localidad, haya impedido la formación de un grupo alterno al principio del conflicto, pero ante los desaciertos de la Comisión, haya sido inevitable que el CECOP encontrara el medio propicio para establecer uno de los plantones permanentes en la zona.

III Región

Finalmente, la región de elevada conflictividad corresponde a los BCC y poblados cercanos, ubicados en la parte baja donde sería construida la cortina de la presa. En esta región, desde antes del conflicto, suelen resolver sus problemas en común y saben, por experiencias pasadas, que el Gobierno Federal no cumple los acuerdos establecidos, como en los caso de la presa La Venta y de la Autopista del Sol, con cuyos afectados innumerables veces se solidarizaron ante sus demandas.

Pese que el PRI obtuvo la victoria en las elecciones municipales y estatales en los últimos años, el avance del PRD ha sido notorio siendo partido dominante en las comunidades de Oaxaquillas y Amatillo. De acuerdo con información recogida en campo, los comisariados que han pasado por los BCC en los años previos al análisis, no terminaron su periodo que les corresponde y fueron sustituidos por los comuneros.

Por eso no es de extrañar que, desde el año 2002, se hayan registrado reuniones de comuneros de San José Cacahuatpec, Garrapatas y Arroyo Verde con ejidatarios de distintas localidades en Dos Arroyos, con el fin de llegar a un consenso resolviendo no negociar hasta que paguen los adeudos de la presa La Venta.

Lo que tenemos es que en los BCC hay una sociedad consciente de su fuerza que se potencializa con la red solidaria de organismos no gubernamentales, profesionistas y otros movimientos sociales, que son partícipes en la transformación del país.

"El que quiera ser águila que vuele, el que quiera ser gusano que se arrastre, pero no grites cuando te aplasten", Pinta en Garrapatas (La Jornada, 03/07/2005).

Por un lado, tenemos una sociedad civil que suma experiencias y fuerza como contrapeso a un aparato de gobierno que no comprende que las viejas prácticas autoritarias del pasado no pueden continuar operado en un país que pretende ser democrático. Un factor clave, además de su conciencia, es el papel de los BCC dentro del proyecto hidroeléctrico, ya que en sus terrenos se construiría la cortina de la hidroeléctrica, lo que implicaba el acceso continuo de material y personal de la obra. Por lo que los retenes de los comuneros no solo fueron símbolo de resistencia, literalmente

frenaron el avance de la CFE en la zona. De no ser así, sin duda la CFE ya tendría finalizado el proyecto y los comuneros tendrían que salir pese a su voluntad, como ocurrió en La Presa del Caracol, en donde obligó a salir a los quejosos cuando se inició la inundación.

El grado de conflictividad que llegó a la confrontación y represión, fue producto de la polarización social que el propio aparato de gobierno generó en las comunidades al imponer el proyecto y por su incapacidad para dialogar.

La demanda esencial de la lucha del CECOP es el derecho a la información, a la consulta y a la participación en las decisiones públicas que los afectan directamente. Si desde el inicio la Comisión hubiera cumplido con este derecho reconocido universalmente, el desarrollo del conflicto podría haberse detenido Sin embargo, la sociedad política optó por minimizar la oposición de los comuneros, descalificarlos y dividirlos con el fin de crear las condiciones que justificaran su represión Ello llevó al enfrentamiento a un grado de conflictividad elevado, de tal manera que cualquier propuesta de negociación se presenta como inaceptable.

“Qué perverso es dividir a los campesinos para debilitarlos y manejarlos arbitrariamente para reubicarlos a como dé lugar. Si dichos operadores recurrieron a la corrupción de líderes y de autoridades campesinas, si manejaron arbitrariamente los procesos jurídicos como las asambleas, si escondieron la información necesaria para que los campesinos tuvieran claridad sobre las afectaciones de la presa, el resultado está a la vista: un proyecto atorado debido a un conflicto social provocado por ellos mismos. Jesús Mendoza Zaragoza, coordinador de la Pastoral Social (El Sur de Acapulco, 16/07/2007).

Desde el punto de la resistencia civil, el conflicto de la Parota es un referente que se suma al movimiento de los Pueblos Nahuas del Alto Balsas, al Frente en Defensa de la Tierra que han cuestionado el despojo de las tierras como forma de acumulación del capital en colaboración con el Estado que, a partir de un discurso basado en la utilidad pública, pretende justificar el sacrificio.

Pero los tiempos han cambiado y las constantes luchas que, tanto ayer como hoy, se suceden para lograr que se respete el muy elemental derecho a poseer la tierra y decidir sobre el futuro familiar plantean nuevas formas, no solo de negociación, sino de los proyectos mismos.

IV Conclusiones

A la fecha existen varias investigaciones sobre el proyecto hidroeléctrico “La Parota” desde otras disciplinas, abordándose el conflicto desde la cuestión de la resistencia en el plano legal, o en las comunidades, sin embargo, el análisis espacial está ausente. En este sentido, desde la geografía la propuesta que se presenta recupera la metodología empleada por Ibarra para cuantificar la conflictividad en el territorio afectado. Partiendo de la conformación del espacio como producto social es la clave para la anulación del proyecto.

En una primera revisión podríamos hablar de la localización del sustrato material, las comunidades opositoras se encuentran distribuidas al sur de la zona, que coincide con la posible construcción de la cortina lo que le da mayor poder al grupo opositor, pero además la historia de conformación de los núcleos agrarios, diferenciada claramente por Ibarra e identificada en las regiones propuestas en el análisis, son elementos que conforman un espacio concreto para la resistencia.

En este sentido, la lucha que ha librado el CECOP no es la primera experiencia que pone a prueba el aparato gubernamental en el estado de Guerrero, el caso de San Juan Tetelcingo es sin duda el antecedente que ha servido como referente para la conformación de un discurso opositor, que en un inicio partió de lo ambiental pero después incorpora la cuestión de la identidad y el de los derechos humanos.

Con respecto al proceso de negociación en el proyecto de presa “La Parota” concluimos que es similar al ocurrido en la presa el Caracol. El discurso que la CFE maneja es de un proyecto de planeación participativa “*económicamente viable, ecológicamente sustentable y socialmente aceptable*”; sin embargo, la paraestatal recurrió a viejos vicios: falta o escasa información, imposición de asambleas, asignación de recursos para conseguir apoyo, así como represión contra los opositores que han terminado con demandas judiciales.

El manejo de la información en las asambleas, así como su conducción, refleja la práctica recurrente de la estructura de gobierno que impulsa la obra, un discurso que por un lado convoca a la consulta, participación y el respeto de los acuerdos como forma sutil de convencer y por otro lado, incorpora la desvaloración de la población afectada, la desprestigia y no se le considera igual.

Al principio de la investigación se supuso que durante las negociaciones la Comisión Federal de Electricidad manejaba en su discurso la idea de sacrificio por el progreso, como una forma de contribuir a que las comunidades asimilaran el sacrificio como exaltación del valor en bien del país. Al revisar las condiciones de negociación, la constante fue la falta de información y vinculación con las comunidades. Las fuentes de información fueron informales, lo que incrementó el grado de incertidumbre y de descontento, de tal manera que el sacrificio en el proceso de negociación es diferente.

El sacrificio se plantea en los términos de un mal necesario en el proceso civilizatorio. Es decir, se optó por convertir a la víctima en monstruo, “los comuneros y ejidatarios se oponen al progreso, no quieren que el país se modernice” por tanto, su sacrificio es justificable y necesario.

En ese sentido, el sacrificio está presente en el proceso negociador pero no dentro de la comunidad local, sino en la información que se da a la sociedad regional y nacional, en el discurso que se utiliza para convencernos de que se requiere el sacrificio de estos pueblos por el bien del país, que la demanda de energía lo exige. Se nos propone que sin ese sacrificio el desarrollo no llegará a las comunidades. Es por eso que los opositores son adjetivados para responsabilizarlos del conflicto, aunque de sobra sabemos que las grandes represas han requerido enormes inversiones que se traducen en deudas impagables aunados a los impactos culturales y ecológicos generados por su construcción, y que incluso a nivel mundial existe una tendencia a restaurar los ríos.

Un punto que se resalta es que la CFE jerarquizó el “análisis técnico” sobre el “análisis político”, y cuando el escalamiento de la confrontación fue evidente, los mecanismos para la negociación fueron incorrectos, en este sentido consideramos que se pudo haber evitado desde el principio con una intervención fincada en bases realmente sociales. Al final la extrema polarización a que ha llevado el manejo del conflicto, se traduce en simplificar las posturas como “a favor” o “en contra” del proyecto, lo que impide la discusión a fondo de la controversia. A tal grado que profesionistas fueron expulsados de las comunidades al no coincidir con las posturas de los comuneros.

Si bien en el presente trabajo no se aborda de manera central la cuestión del impacto ambiental, es claro que la obra genera cambios espaciales, por lo que coincidimos con la Comisión Mundial de Represas que plantea que el “fin” que debe alcanzar cualquier proyecto de desarrollo es el mejorar de un modo sustentable el bienestar humano de forma democrática, es decir, producir un avance significativo en el desarrollo humano, sobre una base que sea viable económicamente, equitativa

socialmente y ambientalmente sustentable, metas que desde el Cono Sur se plantean en alternativas a la visión desarrollista; El buen vivir o vivir bien.

Si la construcción de una gran represa es el mejor modo de alcanzar este objetivo, y las comunidades concuerdan con esa visión merece ser apoyada. Cuando otras opciones son una mejor alternativa, ellas deberían ser favorecidas, y no las grandes represas.

Nos surgen un par de cuestionamientos que sin duda son temas para continuar la investigación ¿por qué aferrarse a proyectos que difícilmente estimularan el desarrollo regional como están planteados y en cambio crean efectos negativos indirectos?, ¿a quién beneficia esta infraestructura?

Una respuesta nos la da Harvey (2004) quien al explicar los mecanismos que el capital utiliza para salir de la crisis plantea su teoría de acumulación por desposesión, que se analizó en el primer capítulo, la cual plantea que a la falta de oportunidades de una inversión rentable el capital busca apoderarse transfiriendo la riqueza. Por tanto, la construcción de presas corresponde a un proyecto de larga duración que absorbe gran cantidad de capital evitando la crisis de sobreacumulación en otro territorio, en detrimento del que absorbe la inversión mediante una deuda. Pero el capital requiere de un aliado, el Estado que a menudo influye decisivamente utilizado sus poderes para promover mediante la planificación la infraestructura que el capital financiará. Si consideramos el análisis de Harvey correcto, los intereses de la CFE se desenmascaran, el Estado actúa como gestor del capital y no garante de los derechos fundamentales de las comunidades, de tal manera que el sacrificio se clarifica como un antivalor.

No cabe duda que las obras de infraestructura son necesarias, sin embargo cuestionamos la construcción de presas hidroeléctricas por la poca atención a los efectos indirectos negativos (la reubicación y expropiación de tierras) que ocasiona. Consideramos que el proceso de planeación y ejecución no deben basarse en una lógica de costo beneficio sino en una ética del bien común. La crítica que hacemos, ante todo, es al paradigma dominante del sacrificio como antivalor que continua, como dice Hinkelammert, crucificando.

Referencias

- Aboites Aguilar, Luis (1998) El Agua de la nación: una historia política de México, (1888-1946) México, D.F: CIESAS, 220 p.
- Assmann, H. (1997), La idolatría del mercado, San José de Costa Rica, DEI, 269 p.
- Arrighi, Giovanni (1999a) Movimientos antisistémicos. Madrid: Akal, 128p.
- Arrighi, Giovanni (1999b) El largo siglo XX. Madrid: Akal
- Barabas, Alicia y Bartolomé, Miguel (1992) Antropología y relocalizaciones Alteridades Número 4, UAM. 5-15 p.
- Bartolomé, Miguel y Barabas, Alicia (1990) La presa Cerro de Oro y el Ingeniero el Gran Dios, relocalización y etnocidio chinanteco en México. México: CNCA – INI, Tomo I y II, 264p.
- Bartolomé, Miguel (1992) Presas y relocalizaciones de indígenas en América Latina. Alteridades Número 4, UAM. 17-28 p.
- Castellón, R. J. (1989), “Sistema de bienes comunales y reacomodo poblacional parcial en Mezcala”, Tesis de Licenciatura en Antropología Social, UAM Iztapalapa, México.
- Castells, Manuel (2001) El espacio de los flujos en: La era de la información: Economía, sociedad y cultura Volumen I La sociedad red (3ª edición) Siglo XXI, México.
- Castro, G. E. (2003), Las represas ¿desarrollo para quién?, Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), Chiapas, México, 5 de junio
- Celestino Solis, Eustaquio (2004) Gotas de maíz: jerarquía de cargos y ritual agrícola en San Juan Tetelcingo, Guerrero. México, D.F: CIESAS, 311 p.
- Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Guerrero Tlahui-Politic No. 2, II/1996.
- De la Cruz Teresa (2005, 14 de noviembre) Acuerdan mesa de diálogo para resolver conflictos agrarios en el Alto Balsas. El sur de Acapulco.
- Díaz, Marcelino (1992) Alto Balsas: pueblos nahuas en lucha por la preservación del medio ambiente y su cultura. Guerrero, México: Habitat International Coalition, 35 p.

Díaz de Jesús, M. y Alvarez, N. G. (2000), "Alto Balsas: otra visión sobre la tierra", periódico El Sur de Acapulco 21 de septiembre.

Díaz de Jesús M. (2004), "Contra las presas en San Juan Tetelcingo y La Parota", Carta leída ante el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en el Palacio de las Naciones, Ginebra, Suiza, 20 de julio.

Escalante García Lourdes (1989) Conflicto Político en un reacomodo de población. El caso de Balsas, Guerrero y de la hidroeléctrica Carlos Ramírez Ulloa (El Caracol) (1978-1986) Tesis de Licenciatura en Antropología Social, UAM Iztapalapa.

García Canclini, Néstor (1990) Culturas Híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad, Grijalbo, México

García Leyva, Jaime (2003) Por los caminos del sur indígena. México: La Jornada, Ojarasca 79 noviembre.

García Ortega Martha (2000) El consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas en contra de la presa SJT Guerrero 1990-1992. Tesis Antropología Social, ENAH.

GEA A.C (1993a) El Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB) los primeros años: 1989-1992 series (cuadernos del Alto Balsas; 1) México: ediciones GEA 9 p.

GEA A.C (1993b) Hacia un camino propio de los pueblos del Alto Balsas: Síntesis del proyecto alternativo CPNAB-GEA. 1993 Series (cuadernos del Alto Balsas; 2) México: ediciones GEA. 15 p.

GEA A.C (1993c) Seminario hueyi tlahtocan gran consejo de apoyo al CPNAB Series (cuadernos del Alto Balsas; 4) México: ediciones. 45 p.

Girard, Rene (2002) Veo a Satán caer como el relámpago. Barcelona, Anagrama, 255p.

González Negrete, Ernesto (2003) Hegemonía, ideología y democracia en Gramsci. México, Plaza y Valdés: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 177p.

Good Eshelman, Catharine (1988) Haciendo la lucha: arte y comercio nahuas de Guerrero. México: Fondo de Cultura Económica, 250 p.

Good Eshelman, Catharine y Barrientos López Guadalupe (2004) Nahuas del Alto Balsas. México: CDI: PNUD. 39 p.

- Harvey, David (1990) La condición de la posmodernidad. Madrid: Amourtu editores
- Harvey, David (2003) Espacios de esperanza. Madrid: Akal.
- Harvey David (2003) El nuevo imperialismo. España: Akal, 170p
- Hemond, Aline (1994) "indiens" ou "civilises"? : l'affaire du barrage San Juan Tetelcingo (Mexique). En Cahiers des Sciences Humaines, 30 (3). France s.e. 391-410 pp
- Hernández Estrada, Bolivar (1976) El proyecto la Angostura: una experiencia de planificación social. México: ENAH: UNAM, 214p.
- Hernández Suarez, Elvia Malu. (2000) La irrigación en el estado de Guerrero. Tesis UNAM Fac. de Economía
- Hinkelammert, F. (1991), Sacrificios humanos y sociedad occidental: lucifer y la bestia San José, Costa Rica , DEI.
- Hinkelammert, F. (2001), "El cálculo del límite de lo aguantable y la ética de la banda de ladrones". Ambientico No. 88 Costa Rica.
- Kurnitzky, H. (2001), Retorno al destino: la liquidación de la sociedad por la sociedad misma. Colibrí, México.
- Lefebvre, Henri (1976) Espacio y política: El derecho a la ciudad, II. Barcelona: Península, 157p
- López Pérez, Patricia et al. (1988) Análisis geográfico de la redistribución de población en Nuevo Balsas, Municipio de Cocula, Guerrero. Tesis Licenciatura en Geografía UNAM México.
- Lowy M. (1999), Guerra de Dioses: Religión y política en América Latina, Siglo XXI, México, 209 p.
- McCully, Patrick (2001) Ríos Silenciados: Ecología y política de las grandes represas. Argentina:Proteger Ediciones, 450p.
- McMahon, David (1990) Antropología de una presa: los mazatecos y el proyecto del Papaloapan. México: CNCA – INI, 174p.
- Morande, Pedro (1987) Cultura y modernización en América Latina: Ensayo sociológico acerca de la crisis del desarrollismo y de superación Madrid: Encuentro, 187 p

Moreno, Sergio (1991) No a la presa de San Juan Tetelcingo, documental. México, Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, A.C. 30 min.

Nogué Font, Joan y Rutí, Joan Vicente (2001) Geopolítica, identidad y globalización, Ariel, Barcelona, España.

Randle, Michael (1998) Resistencia civil: la ciudadanía ante las arbitrariedades de los gobiernos. Barcelona; México: Paidós, 249 p.

Rodríguez Bribiesca, Priscila (2006) Presa la Parota: presas del progreso en: La Gota de la vida: hacia una gestión sustentable y democrática del agua. Fundación Henrich Böll. 228-230p

Roy, Arundhati (2002) El álgebra de la justicia infinita. Trad. Francesc Roca, Barcelona: Anagrama, 222p

Sánchez, Joan- Eugeni (1981) La Geografía y el espacios social del poder. Barcelona: Amelia Romero, 248 p

Sánchez, Joan- Eugeni (1992) Geografía política. Madrid: Síntesis, 224 p

Santos, Milton (1990) Por una geografía nueva. Madrid: Espasa-Calpe. 257p

Santos, Milton (1996) De la totalidad al lugar. Barcelona: oikus- tau.167p

Santos Milton (2000) La naturaleza del espacio, técnica y tiempo. Razón y emoción, Barcelona, España: Ariel.

Smith, Neil (2006) La producción de la naturaleza; La producción del espacio. México: SUA-FFyL- UNAM. Traducción Claudia Villegas Delgado.

Tosana Aparicio, Alejandra y Terrones Medina, Mayra I (2012) La defensa del territorio en tiempos neoliberales. Los casos del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y la hidroeléctrica la Parota en: Globalización causas y perspectivas. México: UAM – Xochimilco. 95-118p

Velasco Cruz, Saúl (2003) El movimiento indígena y la autonomía en México. México: UNAM, Dirección General de Estudios de Posgrado 261p

Weber, Max (2001) Estructuras de poder. Traducción de Rufino Arar. México: Ediciones Coyoacán

Consultas en Red

Alcaraz Morales, Osbelia y Salgado Galarza Agustín Carlos (2007) La participación ciudadana en reubicaciones involuntarias por la construcción de presas hidroeléctricas en México y el proyecto hidroeléctrico La Parota, Guerrero. X Coloquio Internacional de Geocrítica. Consulta en red <http://www.ub.edu/geocrit/9porto/osbelia.htm>
Amnistía Internacional (2007) MÉXICO Derechos humanos en peligro: Proyecto Presa La Parota. <http://www.amnesty.org/es/report/info/AMR41/029/2007>

Asociación Interamericana para la defensa del ambiente <http://www.aida-americas.org/aida.php?page=174&lang=es>

Cámara de Diputados LIX Legislatura. (2006) Proposición con punto de acuerdo para exhortar al presidente de la república para que dialogue con los campesinos y campesinas guerrerenses opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota. <http://www.senado.gob.mx/gace2.php?sesion=2006/06/14/1&documento=75>

Cámara de Diputados. LIX Legislatura. http://prdleg.diputados.gob.mx/sala/boletines/06_01_23/bol0733.htm

Castro Soto, Gustavo Enrique (2003) Las represas ¿desarrollo para quién? Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC) Chiapas, México, 5 de junio. <http://otrosmundoschiapas.org/analisis/doctos/REPRESAS/LASREPARAQUIEN.pdf>.

Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (2007) INFORME DE LA MISIÓN DE INVESTIGACIÓN Programa de COHRE para las Américas (Centre on Housing Rights and Evictions) <http://www.cohre.org/store/attachments/Informe%20de%20Mision.Mexico.Honduras.Guatemala.Jul07.pdf>

Centro de Derechos Humanos de la Montaña (S/f) Caso: Presa Hidroeléctrica La Parota. http://www.tlachinollan.org/casos/parota_win.htm

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (S/f) Proyecto hidroeléctrico La Parota. Resumen del caso. Información en red. Consultado en 2006 en http://www.agua.org.mx/index2.php?option=com_content&task=view&id=857&pop=1&page=0&Itemid=114

Comisión Federal de Electricidad

<http://www.cfe.gob.mx/es/negociosconcfelicitaciones/basesdelicitacionesdeobra/proyinvfinanc/proyectoshidroelectricos>

Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota, CECOP (s/f) los recursos naturales y energéticos son de los mexicanos la lucha contra los megaproyectos de inversión de las transnacionales. Ponencia presentada en el II Diálogo nacional hacia un proyecto de nación alternativo al neoliberalismo. (Mesa 1)
<http://www.dialogonacional.org.mx/iipon62.html>

CECOP y CEMDA (2007) La CFE no cuenta con autorización para construir la Parota
<http://cml.vientos.info/node/12034>

Comisión Mundial de Represas (2000) Represas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones. CMR/UICN-ORMA/ SAMTAC/ CATAAC, 412p <http://www.dams.org/>

Díaz de Jesús, Marcelino (2003) Acuerdos constructivos, remunicipalización y ciudadanía étnica contra el Plan Puebla Panamá Estudio de Caso del Alto Balsas, Guerrero, México. Documento presentado en el Seminario de expertos sobre tratados, convenios y otros acuerdos constructivos entre los estados y los pueblos indígenas Organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ginebra, 15-17 de diciembre. <http://www.unhchr.ch/indigenous/Diaz-BP2.doc>

Grupo parlamentario federal del PRD (2006) El tribunal agrario y diputados constatan irregularidades del proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota. Boletín no. 0733
http://prdleg.diputados.gob.mx/sala/boletines/06_01_23/bol0733.htm

Grupo parlamentario del PRD (2007) Gobiernos Federal y Estatal preparan represión en la Parota, Guerrero. Cámara de diputados. LX legislatura
http://prdleg.diputados.gob.mx/diputado/jose_antonio_almazan/intervenciones/ver2505.html

Guzmán Andrade, Alfonso (2007) Propuesta de desarrollo integral para reubicados por la construcción de presas. IX Coloquio Internacional de Geocrítica Los problemas del mundo actual. Soluciones y alternativas desde la Geografía y las Ciencias Sociales Porto Alegre, 28 de mayo - 1 de junio. <http://www.ub.es/geocrit/9porto/aguzman.htm>

Ibarra García, Verónica (2012) Espacio: elemento central en los movimientos sociales por megaproyectos. México: Desacatos, núm. 39, mayo-agosto. 141-158 pp.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-92742012000200010&script=sci_arttext

International Rivers (s/f) Cronología del Movimiento en Resistencia La Parota

<http://internationalrivers.org/en/key-documents/cronologia-del-movimiento-en-resistencia-la-parota>

Marengo M, Humberto (2006) Proyecto hidroeléctrico La Parota, Gro.
http://www.agua.unam.mx/assets/pdfs/academicos/ingenieria/marengo_humberto.pdf

Garza Merodio, Gustavo G. (2009). Historia de una acentuada desarticulación territorial: el estado de Guerrero. Investigaciones geográficas, (68), 116-130.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112009000100009&lng=es&tlng=es

Nahmad, Salomón (2001) "Impact of hydroelectric dams on indigenous people, chinantecos, otomíes and huicholes: a case study from México", Documento de Contribución, núm. SOC165, 13.
<http://www.dams.org/kbase/submissions/showsub.php?rec=soc165>

Peña, F. (2004), "Pueblos Indígenas y Manejo de Recursos Hídricos en México", en Revista Mad No.11. Septiembre, Departamento de Antropología. Universidad de Chile
<http://www.revistamad.uchile.cl>

Programa Universitario de Medio Ambiente. (2004) Manifestación de Impacto Ambiental Proyecto Hidroeléctrico "La Parota". Consulta en red.
<http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/consulta-tu-tramite> (Para obtener el documento ingresar en la casilla del número de tramite la siguiente referencia 12GE2004H0014).

Rodríguez, Priscila (2006) La Parota, asunto de "utilidad pública" La Jornada Ecológica.
<http://www.jornada.unam.mx/2006/03/27/eco-d.html>

Tribunal Latinoamericano del Agua (2006) Primera Audiencia Pública Veredictos Caso: Proyecto hidroeléctrico La Parota sobre el río Papagayo en el estado de Guerrero, México. 13 al 20 de marzo México D.F.
<http://www.comda.org.mx/files/documentos/tribunal/parota.pdf>

Peña, Francisco (2004). Pueblos Indígenas y Manejo de Recursos Hídricos en México. Revista Mad. No.11. Septiembre Departamento de Antropología. Universidad de Chile

<http://csociales.uchile.cl/publicaciones/mad/11/paper03.pdf>

Secretaría de Relaciones Exteriores. (2008). Proyecto hidroeléctrico "La Parota". *Boletín informativo* (51), 4. <http://portal.sre.gob.mx/oi/pdf/dgdh51.pdf>

SEMARNAT (2004) Versión estenográfica de la reunión pública de información del "Proyecto Hidroeléctrico La Parota efectuada el 24/08/04". http://www.semarnat.gob.mx/participacionsocial/reunionespublicas/Documents/version_estenografica_acapulco.pdf

Scott S. Robinson (2006) CFE: cambio a reversa o la "nueva" vieja política de desalojos forzosos, La Jornada Ecológica. <http://www.jornada.unam.mx/2006/03/27/eco-d.html>

Tribunal Latinoamericano del Agua (2006) veredicto de la audiencia pública regional, Caso: proyecto hidroeléctrico "La Parota" sobre el río Papagayo en el estado de Guerrero. República Mexicana.

http://www.traqua.com/audiencias/2006/veredictos_2006/CasoLaParota.pdf

Hemerográficas

Archivo Histórico del Agua, acervo infraestructura hidráulica, Caja 226, expediente 5842 foja 14.

Archivo Histórico del Agua, fondo infraestructura hidráulica, caja 300, expediente 2553.

Archivo Histórico del Agua, fondo infraestructura hidráulica, Caja 463 Expediente 13139.

Archivo Histórico del Agua, fondo infraestructura hidráulica, caja 516, expediente 14735.

El sur de Acapulco desde junio de 2002 hasta noviembre de 2007

El Universal distintas fechas del 2003 al 2007

Gobierno de Guerrero, diversos boletines 2006 y 2007

<http://www.acapulco.gob.mx>

La Jornada distintas fechas del 2003 al 2007

Novedades de Acapulco distintas fechas del 2003 al 2007

Proceso

Miranda R, Arturo (7 de mayo de 2007) Las hidroeléctricas El Caracol y La Parota, dos proyectos dolorosos. La Jornada.

Videos

Colectivo RADAR (2006). La Parota Resistencia en Guerrero. Consulta en red

http://www.dailymotion.com/video/x1r52k_la-parota-resistencia-en-guerrero-2_news

Moreno, Sergio (1991) No a la presa de San Juan Tetelcingo. (Inédito)

Anexo I Tablas y gráficos

Anexo I a

Centrales hidroeléctricas inauguradas entre 1947 y 1970

| Nombre de la Central | Número de Unidades | Fecha de entrada en operación | Capacidad Efectiva Instalada (MW) | Ubicación |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| Las Rosas | 1 | 01-Ene-1949 | 0 | Cadereyta, Querétaro |
| Santa Bárbara (S.H. Miguel Alemán) | 3 | 19-oct-50 | 0 | Santo Tomás de los Plátanos, México |
| Colimilla | 4 | 01-Ene-1950 | 51 | Tonalá, Jalisco |
| Minas | 3 | 10-mar-51 | 15 | Las Minas, Veracruz |
| Encanto | 2 | 19-oct-51 | 10 | Tlapacoyan, Veracruz |
| Texolo | 2 | 01-nov-51 | 2 | Teocelo, Veracruz |
| Electroquímica | 1 | 01-oct-52 | 1 | Cd. Valles, San Luis Potosí |
| Schpoiná | 3 | 07-May-1953 | 2 | Venustiano Carranza, Chiapas |
| Tepazolco | 2 | 16-Abr-1953 | 0 | Xochitlán, Puebla |
| Platanal | 2 | 21-oct-54 | 9 | Jacona, Michoacán |
| Falcón | 3 | 15-nov-54 | 32 | Nueva Cd. Guerrero, Tamaulipas |
| El Durazno (S.H. Miguel Alemán) | 2 | 01-oct-55 | 0 | Valle de Bravo, México |
| Cóbano | 2 | 25-Abr-1955 | 52 | Gabriel Zamora, Michoacán |
| Tingambato (S.H. Miguel Alemán) | 3 | 24-sep-57 | 0 | Otzoloapan, México |

| Nombre de la Central | Número de Unidades | Fecha de entrada en operación | Capacidad Efectiva Instalada (MW) | Ubicación |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|
| Oviáchic | 2 | 28-Ago-1957 | 19 | Cajeme, Sonora |
| San Pedro Porúas | 2 | 01-oct-58 | 3 | Villa Madero, Michoacán |
| Mocúzari | 1 | 03-mar-59 | 10 | Álamos, Sonora |
| Temascal | 6 | 18-Jun-1959 | 354 | San Miguel Soyaltepec, Oaxaca |
| Malpaso | 6 | 29-Ene-1969 | 1,08 | Tecpatán, Chiapas |
| Chilapan | 4 | 01-sep-60 | 26 | Catemaco, Veracruz |
| 27 de Septiembre | 3 | 27-Ago-1960 | 59 | El Fuerte, Sinaloa |
| Bombaná | 4 | 20-mar-61 | 5 | Soyaló, Chiapas |
| Tamazulapan | 2 | 12-Dic-1962 | 2 | Tamazulapan, Oaxaca |
| Mazatepec | 4 | 06-Jul-1962 | 220 | Tlatlauquitepec, Puebla |
| Cupatitzio | 2 | 14-Ago-1962 | 72 | Uruapan, Michoacán |
| Luis M. Rojas | 1 | 01-Ene-1963 | 5 | Tonalá, Jalisco |
| Salvador Alvarado | 2 | 08-May-1963 | 14 | Culiacán, Sinaloa |
| Plutarco Elías Calles | 3 | 12-nov-64 | 135 | Soyopa, Sonora |
| Manuel M. Diéguez | 2 | 02-sep-64 | 61 | Amatitlán, Jalisco |
| Infiernillo | 6 | 28-Ene-1965 | 1 | La Unión, Guerrero |
| Ambrosio Figueroa | 5 | 31-May-1965 | 30 | La Venta, Guerrero |
| Camilo Arriaga | 2 | 26-Jul-1966 | 18 | Cd. Maíz, San Luis Potosí |
| José Cecilio del Valle | 3 | 26-Abr-1967 | 21 | Tapachula, Chiapas |
| Huazuntlán | 1 | 01-Ago-1968 | 0 | Zotopan, Veracruz |

Anexo I a

Algunas presas en Guerrero y sus usos

| Nombre oficial | Nombre común | Municipio | CA | CUA | Río | Año de terminación | Uso |
|----------------------|--------------|--------------------------|----------|----------|----------------------------|--------------------|------|
| Adolfo López Mateos | Infiernillo | Coahuayutla | 12,000 | 9,340 | Nº 18 | 1963 | G, C |
| Valerio Trujano | | Tepecoacuilco de Trujano | 39.4 | 27.6 | Tepecoaculco Nº 18 | 1964 | I |
| Ambrosio Figueroa | La Venta | Acapulco de Juárez | 15.3 | 9.81 | Nº 21 | 1965 | G |
| Vicente Guerrero | Palos Altos | Arcelia | 250 | 250 | Poliutla Nº 18 | 1968 | I |
| José María Morelos | La Villita | La Unión | 7.2 | 510 | Nº 18 | 1973 | I, G |
| Carlos Ramírez Ulloa | El Caracol | Apaxtla | 1,901.10 | 1,445.90 | Nº 18 | 1986 | G |
| Andrés Figueroa | Las Garzas | Ajuchitlán del progreso | 123.1 | 86.5 | Ajuchitlán o Truchas No 18 | 1986 | I |
| Revolución Mexicana | El Guineo | Ayutla de los libres | 259.4 | 107 | Nexpa Nº 20 | 1988 | I |
| Hermenegildo Galeana | | Cutzamala de Pinzón | 410 | 190.5 | Cutzamala Nº 18 | 1991 | I |

NOTA: Capacidad de Almacenamiento (CA), Capacidad Útil de Almacenamiento (CUA) Generación de energía eléctrica (G), Irrigación (I), Control de avenidas (C).

FUENTE: Elaboración propia con base en Hernandez Suarez (2000), CFE, CNA, INEGI, Semarnat y gobiernos municipales de Gro en red.

Anexo I b

Marginación comparada con el municipio con menor índice 1990 - 2005

| Clave | Municipio | Marginación 1990 | | | Marginación 2000 | | | Marginación 2005 | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|
| | | Índice | Grado | VE | Índice | Grado | VE | Índice | Grado | VE |
| 12001 | Acapulco de Juárez | -1.096 | B | 0.96 | -0.938 | B | 0.89 | -0.863 | B | 0.88 |
| 12002 | Ahuacuotzingo | 1.665 | MA | -1.46 | 1.675 | MA | -1.59 | 2.122 | MA | -2.16 |
| 12003 | Ajuchitlán del Progreso | 0.792 | A | -0.69 | 1.204 | MA | -1.15 | 1.419 | MA | -1.44 |
| 12004 | Alcozauca de Guerrero | 1.997 | MA | -1.75 | 1.972 | MA | -1.88 | 2.426 | MA | -2.47 |
| 12005 | Alpoyeca | 0.296 | A | -0.26 | 0.208 | A | -0.20 | 0.212 | A | -0.21 |
| 12006 | Apaxtla | 0.108 | A | -0.09 | 0.041 | A | -0.04 | 0.293 | A | -0.30 |
| 12007 | Arcelia | -0.131 | M | 0.11 | 0.093 | A | -0.09 | 0.081 | A | -0.08 |
| 12008 | Atenango del Río | 0.677 | A | -0.59 | 0.838 | A | -0.80 | 1.010 | A | -1.03 |
| 12009 | Atlamajalcingo del Monte | 1.920 | MA | -1.68 | 1.766 | MA | -1.68 | 2.009 | MA | -2.04 |
| 12010 | Atlixac | 2.039 | M | -1.78 | 2.557 | MA | -2.43 | 2.595 | MA | -2.64 |
| 12011 | Atoyac de Alvarez | -0.181 | MA | 0.16 | 0.108 | A | -0.10 | 0.279 | A | -0.28 |
| 12012 | Ayutla de los Libres | 1.224 | MA | -1.07 | 1.499 | MA | -1.43 | 1.538 | MA | -1.56 |
| 12013 | Azoyú | 0.781 | A | -0.68 | 0.786 | A | -0.75 | 1.091 | MA | -1.11 |
| 12014 | Benito Juárez | -0.803 | B | 0.70 | -0.457 | M | 0.44 | -0.281 | M | 0.29 |
| 12015 | Buenavista de Cuéllar | -0.773 | B | 0.68 | -0.634 | M | 0.60 | -0.547 | M | 0.56 |
| 12016 | Coahuayutla de José María Izazaga | 1.272 | MA | -1.11 | 1.984 | MA | -1.89 | 2.404 | MA | -2.44 |
| 12017 | Cocula | 0.000 | M | 0.00 | 0.186 | A | -0.18 | 0.273 | A | -0.28 |
| 12018 | Copala | 0.237 | A | -0.21 | 0.456 | A | -0.43 | 0.409 | A | -0.42 |
| 12019 | Copalillo | 1.860 | MA | -1.63 | 1.876 | MA | -1.79 | 2.158 | MA | -2.19 |
| 12020 | Copanatoyac | 2.007 | MA | -1.76 | 2.207 | MA | -2.10 | 2.502 | MA | -2.54 |
| 12021 | Coyuca de Benítez | 0.045 | A | -0.04 | 0.398 | A | -0.38 | 0.446 | A | -0.45 |
| 12022 | Coyuca de Catalán | 0.476 | A | -0.42 | 0.855 | A | -0.81 | 1.035 | A | -1.05 |
| 12023 | Cuajinicuilapa | 0.506 | A | -0.44 | 0.761 | A | -0.72 | 0.643 | A | -0.65 |
| 12024 | Cualác | 0.754 | A | -0.66 | 0.935 | A | -0.89 | 1.107 | MA | -1.13 |
| 12025 | Cuatepec | 1.111 | A | -0.97 | 1.128 | MA | -1.07 | 1.268 | MA | -1.29 |
| 12026 | Cuetzala del Progreso | 0.637 | A | -0.56 | 0.998 | A | -0.95 | 1.102 | MA | -1.12 |
| 12027 | Cutzamala de Pinzón | 0.586 | A | -0.51 | 0.632 | A | -0.60 | 0.678 | A | -0.69 |
| 12028 | Chilapa de Alvarez | 1.208 | MA | -1.06 | 1.420 | MA | -1.35 | 1.532 | MA | -1.56 |
| 12029 | Chilpancingo de los Bravo | -1.102 | B | 0.96 | -1.051 | B | 1.00 | -0.912 | B | 0.93 |
| 12030 | Florencio Villarreal | 0.298 | A | -0.26 | 0.503 | A | -0.48 | 0.522 | A | -0.53 |

| Clave | Municipio | Marginación 1990 | | | Marginación 2000 | | | Marginación 2005 | | |
|-------|--------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|
| | | Índice | Grado | VE | Índice | Grado | VE | Índice | Grado | VE |
| 12031 | General Canuto A. Neri | 1.151 | MA | -1.01 | 1.166 | MA | -1.11 | 1.191 | MA | -1.21 |
| 12032 | General Heliodoro Castillo | 1.336 | MA | -1.17 | 1.759 | MA | -1.67 | 2.034 | MA | -2.07 |
| 12033 | Huamuxtlán Huitzoco de Los | 0.252 | A | -0.22 | 0.100 | A | -0.10 | 0.101 | A | -0.10 |
| 12034 | Figueroa | -0.012 | M | 0.01 | -0.014 | A | 0.01 | 0.114 | A | -0.12 |
| 12035 | Iguala de La Independencia | -1.143 | B | 1.00 | -1.047 | B | 0.99 | -0.984 | B | 1.00 |
| 12036 | Igualapa | 1.280 | MA | -1.12 | 1.233 | MA | -1.17 | 1.345 | MA | -1.37 |
| 12037 | Ixcateopan de Cuauhtémoc | 0.639 | A | -0.56 | 0.490 | A | -0.47 | 0.485 | A | -0.49 |
| 12038 | José Azueta | -0.936 | B | 0.82 | -1.029 | B | 0.98 | -0.960 | B | 0.98 |
| 12039 | Juan R. Escudero | -0.193 | M | 0.17 | 0.189 | A | -0.18 | 0.256 | A | -0.26 |
| 12040 | Leonardo Bravo | 0.392 | A | -0.34 | 0.748 | A | -0.71 | 0.733 | A | -0.74 |
| 12041 | Malinaltepec | 1.759 | MA | -1.54 | 2.145 | MA | -2.04 | 2.133 | MA | -2.17 |
| 12042 | Mártir de Cuilapan | 1.264 | MA | -1.11 | 1.469 | MA | -1.40 | 1.610 | MA | -1.64 |
| 12043 | Metlatónoc | 2.675 | MA | -2.34 | 3.390 | MA | -3.23 | 3.088 | MA | -3.14 |
| 12044 | Mochitlán | 0.546 | A | -0.48 | 0.562 | A | -0.54 | 0.604 | A | -0.61 |
| 12045 | Olinalá | 1.204 | MA | -1.05 | 1.595 | MA | -1.52 | 1.669 | MA | -1.70 |
| 12046 | Ometepec | 0.836 | A | -0.73 | 0.839 | A | -0.80 | 0.955 | A | -0.97 |
| 12047 | Pedro Ascencio Alquisiras | 1.551 | MA | -1.36 | 1.926 | MA | -1.83 | 2.335 | MA | -2.37 |
| 12048 | Petatlán | -0.407 | M | 0.36 | -0.061 | A | 0.06 | -0.008 | A | 0.01 |
| 12049 | Pilcaya | 0.093 | A | -0.08 | 0.172 | A | -0.16 | 0.168 | A | -0.17 |
| 12050 | Pungarabato | -0.828 | B | 0.72 | -0.678 | M | 0.65 | -0.664 | B | 0.67 |
| 12051 | Quechultenango | 1.453 | MA | -1.27 | 1.470 | MA | -1.40 | 1.529 | MA | -1.55 |
| 12052 | San Luis Acatlán | 1.463 | MA | -1.28 | 1.749 | MA | -1.66 | 1.971 | MA | -2.00 |
| 12053 | San Marcos | 0.495 | A | -0.43 | 0.933 | A | -0.89 | 1.066 | MA | -1.08 |
| 12054 | San Miguel Totolapan | 1.189 | MA | -1.04 | 1.926 | MA | -1.83 | 2.184 | MA | -2.22 |
| 12055 | Taxco De Alarcón | -0.675 | B | 0.59 | -0.458 | M | 0.44 | -0.459 | M | 0.47 |
| 12056 | Tecoanapa | 0.715 | A | -0.63 | 0.945 | A | -0.90 | 1.012 | A | -1.03 |
| 12057 | Técpan de Galeana | -0.456 | M | 0.40 | 0.025 | A | -0.02 | 0.058 | A | -0.06 |
| 12058 | Teloloapan | 0.130 | A | -0.11 | 0.325 | A | -0.31 | 0.415 | A | -0.42 |
| 12059 | Tepecoacuilco de Trujano | 0.468 | A | -0.41 | 0.431 | A | -0.41 | 0.495 | A | -0.50 |
| 12060 | Tetipac | 0.728 | A | -0.64 | 0.756 | A | -0.72 | 0.827 | A | -0.84 |
| 12061 | Tixtla De Guerrero | -0.387 | M | 0.34 | -0.205 | M | 0.20 | -0.003 | A | 0.00 |
| 12062 | Tlacoachistlahuaca | 2.347 | MA | -2.05 | 2.409 | MA | -2.29 | 2.679 | MA | -2.72 |
| 12063 | Tlacoapa | 1.959 | MA | -1.71 | 2.096 | MA | -1.99 | 2.427 | MA | -2.47 |
| 12064 | Tlalchapa | 0.427 | A | -0.37 | 0.484 | A | -0.46 | 0.631 | A | -0.64 |
| 12065 | Tlalixtaquilla de Maldonado | 0.807 | A | -0.71 | 0.993 | A | -0.95 | 0.900 | A | -0.91 |

| Clave | Municipio | Marginación 1990 | | | Marginación 2000 | | | Marginación 2005 | | |
|-------|------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|
| | | Índice | Grado | VE | Índice | Grado | VE | Índice | Grado | VE |
| 12066 | Tlapa de Comonfort | 0.549 | A | -0.48 | 0.321 | A | -0.31 | 0.514 | A | -0.52 |
| 12067 | Tlapehuala | 0.045 | A | -0.04 | 0.324 | A | -0.31 | 0.223 | A | -0.23 |
| 12068 | Unión de Isidoro Montes de Oca, La | 0.146 | A | -0.13 | 0.491 | A | -0.47 | 0.554 | A | -0.56 |
| 12069 | Xalpatláhuac | 1.839 | MA | -1.61 | 2.066 | MA | -1.97 | 2.402 | MA | -2.44 |
| 12070 | Xochihuehuetlán | 1.019 | A | -0.89 | 0.819 | A | -0.78 | 0.750 | A | -0.76 |
| 12071 | Xochistlahuaca | 2.048 | MA | -1.79 | 2.489 | MA | -2.37 | 2.455 | MA | -2.50 |
| 12072 | Zapotitlán Tablas | 2.135 | MA | -1.87 | 2.237 | MA | -2.13 | 2.317 | MA | -2.35 |
| 12073 | Zirándaro | 0.999 | A | -0.87 | 1.271 | MA | -1.21 | 1.503 | MA | -1.53 |
| 12074 | Zitlala | 1.823 | MA | -1.59 | 1.787 | MA | -1.70 | 1.867 | MA | -1.90 |
| 12075 | Eduardo Neri | 0.092 | A | -0.08 | 0.225 | A | -0.21 | 0.231 | A | -0.24 |
| 12076 | Acatepec | | | 0.00 | 2.792 | MA | -2.66 | 3.108 | MA | -3.16 |

VE Valor de Comparación; A Alto; B Bajo; M Medio; MA Muy Alto

Fuente elaboración propia con datos de CONAPO

Anexo II Documento

Anexo II a

Corrido de la Presa El Caracol

Se oye el cantar de las aves

Resalta la primavera

Desde Acatlán del río Balsas

Un canto despavorido

Hasta las aves comentan

dónde encontrar nuevo nido

Canten, canten primaveras

yo les voy acompañar

mi corazón se halla herido

y tengo ganas de llorar

porque la casa

donde vivo el agua la va a tapar

ya no tendremos parcela

para poder trabajar

en vez de arado tendremos

una cuerda p´a pescar

también tendremos albercas

El campesino no vale

no cuenta nada en la historia

al pobre no le hacen caso

porque no tiene corbata

le van a quitar las tierras

que dio Emiliano Zapata

Unos con otros comentan

Cuando llegara el día

Cuando reciban su casa con muros de fantasía

Que al cabo de poco tiempo

No valió lo que valía

La presa afecta terrenos también minerales

Siembra una Lapidia de agua

Cubriendo nuestros jacales

Allí no abra pobres ni ricos

Todos saldremos iguales

Ya con esta me despido

Ya viene Rayando el sol

Aquí termina el corrido

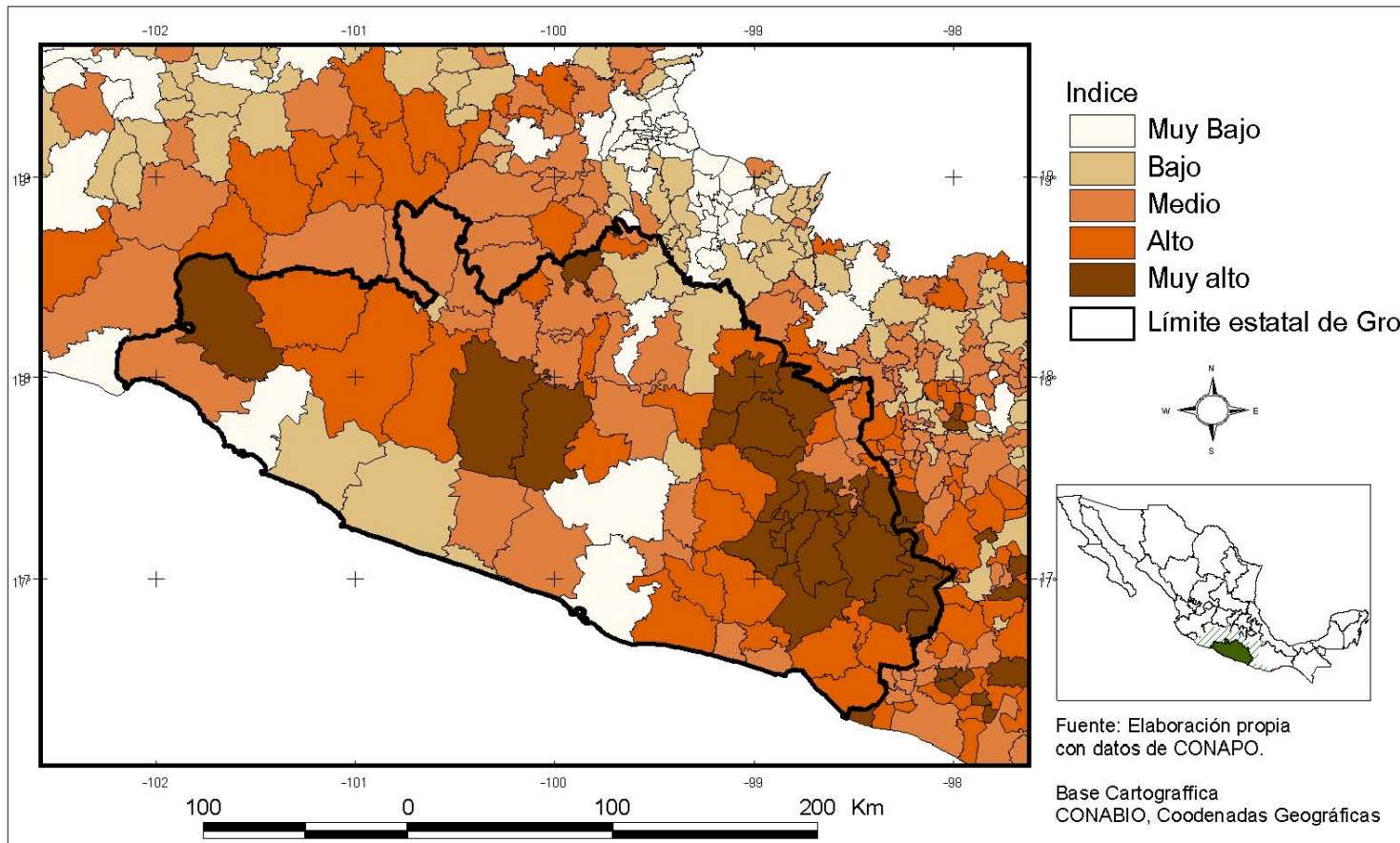
De la presa del caracol

Año

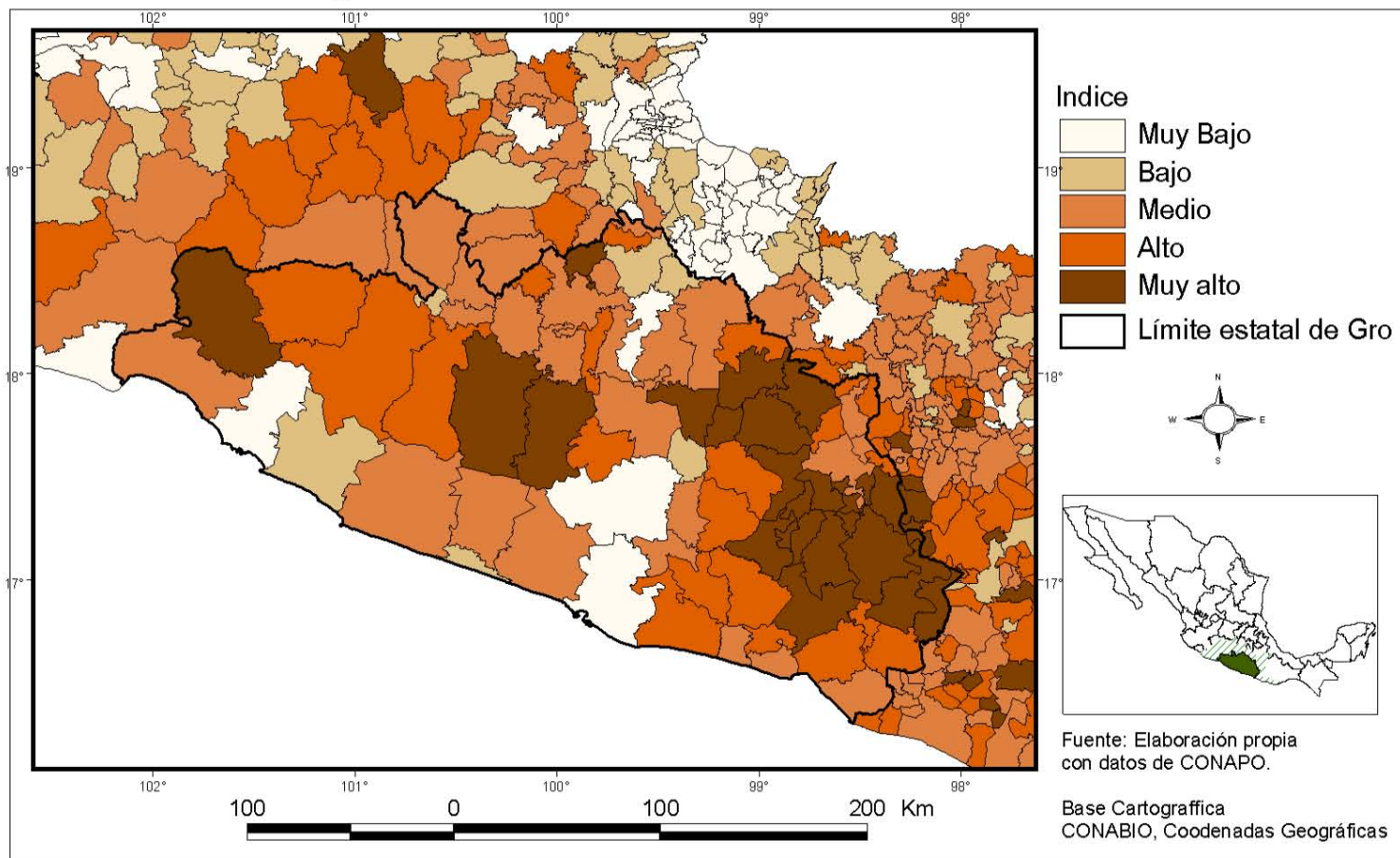
1978

Anexo III Cartográfico

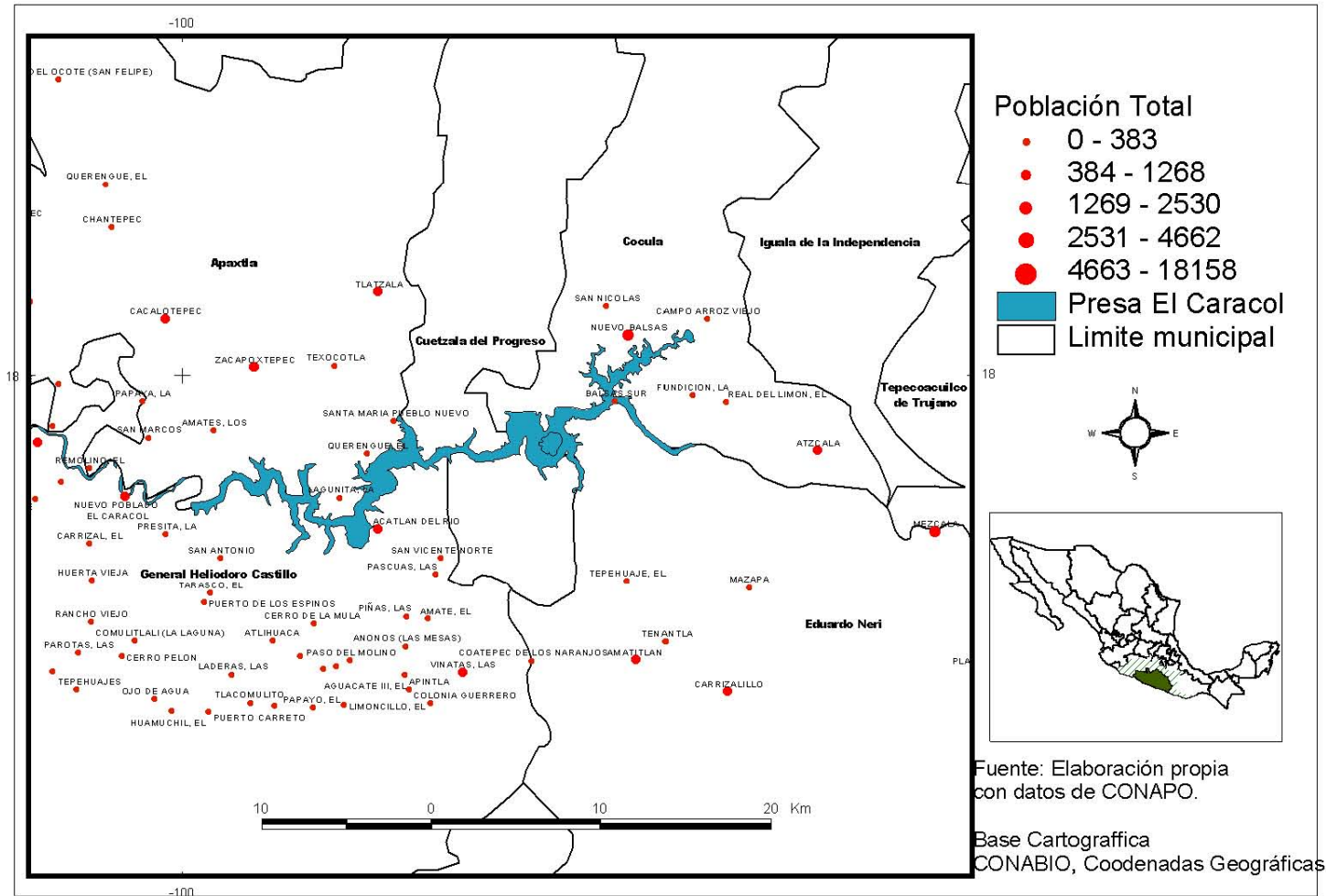
Indice de Marginación, 2000



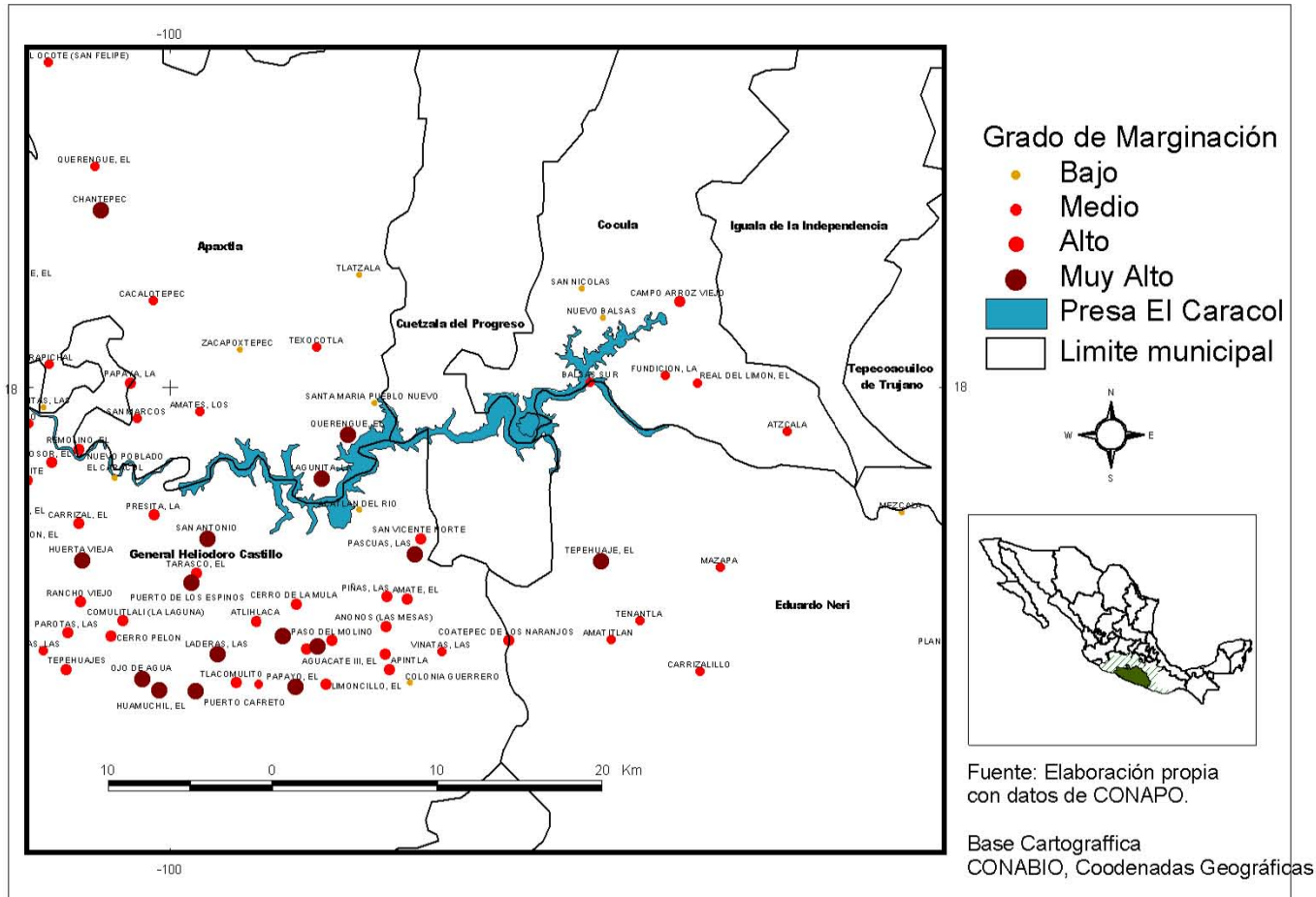
Indice de Marginación, 2005



Poblacion total por localidad, 2000



Grado de Marginación por localidad, 2000



Anexo IV Cronología

La cronología que a continuación se presenta se elaboró con información del periódico El Sur de Acapulco. Los sucesos se verificaron con otras publicaciones como La Jornada, El Universal y Reforma, en estos casos la referencia se indica al pie de página. La fecha resaltada en negro se refiere al día del suceso, el resto, a la fecha de publicación.

Aunque el conflicto aún continúa la mayor confrontación culmina en el 2007 cuando los miembros Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP) entregaron en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) N° 41 un acuerdo de la asamblea de los Bienes Comunales de Cacahuatpec en que expresaron su rechazo al proyecto y por tanto, para ellos queda suspendido. Sin embargo, como referente se incluye en la cronología sucesos relevantes de los últimos años, que dan la idea clara que el conflicto está latente y en cualquier momento puede intensificarse hasta que oficialmente se declare anulado el proyecto.

2002

10/octubre La CFE emite un boletín en el que informa del proyecto hidroeléctrico de la Parota.

2003

- 20/enero Se reúnen perredistas y el coordinador del proyecto de la CFE, Pérez Aguirre.
- 5/junio Se crea la comisión Especial de la cámara de diputados locales para dar seguimiento al proyecto.
- 29/junio Se efectúa una asamblea de los BCC que autoriza continuar con los estudios preliminares, la asistencia es de 249 comuneros de un total de 7,200.
- 20/julio Reunión en la comunidad de Los Huajes, cerca de 300 campesinos acordaron no aceptar la presa y llegar a manifestar su oposición por medio de marchas y bloqueos.
- 28/julio Comuneros de Garrapatas, Arroyo Verde y San José Cacahuatpec bloquean el camino en el punto conocido como El Fraile, más tarde retienen a empleados de la paraestatal para exigir la salida del equipo y maquinaria que ha introducido para las obras que elaboran por el proyecto.
- 4/agosto La CFE inicia el diálogo con los comuneros del bloqueo, Arturo Mancera Romero de la Comisión de Gestión Social de la paraestatal afirma que de no llegar a un acuerdo tipificarían al bloqueo como un delito federal y podrían interponer denuncias a los líderes por los trabajos paralizados. Finalmente los comuneros retiran el campamento.
- 7/agosto Se reúnen el gobernador René Juárez Cisneros, el alcalde Alberto López Rosas, el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub y el dirigente de la CTM, Leonardo Rodríguez Alcaine.

- 8/agosto Primera reunión con el Gobernador del Estado de Guerrero. Este dice que no afectará a los campesinos. Se le obliga a reconocer la ilegalidad de la asamblea realizada, y se obliga a respaldar la salida de la maquinaria⁵¹.
- 19/septiembre Funcionarios de la CFE y autoridades de la UAG firman un convenio en el que se comprometen a llevar a cabo los estudios para ver la viabilidad del proyecto hidroeléctrico. Estuvieron como testigos los alcaldes de los municipios de San Marcos, Acapulco y Juan R. Escudero y 19 autoridades ejidales de la zona afectada.
- 28/septiembre El Plantón se traslada al paraje conocido como La Tolva⁵².
- 6/octubre Comuneros que trabajan para la CFE conforman la Unión Democrática de Comuneros y Ejidatarios del Estado de Guerrero con el fin de restablecer el “estado de derecho” en los Bienes Comunales de Cacahuatpec.
- 11/octubre Comuneros que están a favor del proyecto acudieron al ayuntamiento para exigir a las autoridades municipales y estatales proceder conforme a la ley contra el grupo de campesinos inconformes que mantienen un bloqueo en La Tolva.
- 16/octubre Los comuneros inconformes se suman a la marcha estatal en Chilpancingo convocada por organizaciones sociales.
- 20/octubre Comuneros opositores al proyecto inician otro bloqueo en el poblado de San Isidro Gallinero.
- 29/octubre Opositores marcha en Acapulco en contra de la presa
- 4/diciembre El senador Héctor Vicario Castrejón, del PRI, presenta una propuesta con punto de acuerdo en la que solicita a la CFE establecer foros de consulta entre la población de las comunidades afectadas, indemnice justa y oportunamente a los campesinos por sus tierras, e instrumente un programa de apoyo en beneficio del desarrollo de los productores de la zona.

2004

- 9/enero Reunión de comuneros inconformes con el gobernador Rene Juárez Cisneros y funcionarios de la CFE, no llegan a acuerdos.
- 25/abril Reunión de comuneros de los BCC y el Ing. Humberto Marengo Mogollón de la CFE, según se da la anuencia para la construcción de la presa
- junio Se instalan otros plantones en los poblados de Agua Caliente, Cantón y Cruces de Cacahuatpec.
- 29/junio En San Isidro Gallinero comuneros opositores retienen a trabajadores de la CFE cuando intentaban ingresar maquinaria al área en conflicto.
- 2/julio Nuevamente es interceptada maquinaria de la CFE cuando entraba por San Isidro Gallinero.

⁵¹ http://internationalrivers.org/pdf/la_parota/Cronologia.pdf

⁵² [idem](#)

- 5/julio La CFE ingresa el trámite del Estudio de Impacto Ambiental ante las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT.)
- 12/julio Los opositores acuden a la SEMARNAT para exigir que se muestre a la opinión pública la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto que presentó la CFE a esa dependencia.
- 26/julio Marco Antonio Suástegui Muñoz, uno de los líderes opositores, es detenido y acusado de privación ilegal de la libertad contra un empleado de la CFE.
- 28/julio Aprehendido al opositor Francisco Hernández Valeriano de Agua Caliente, por el mismo delito que Suástegui.
- 4/agosto El gobernador Juárez Cisneros y la CFE se reúnen con los opositores y comprometen a gestionará la libertad de los detenidos y retirar las órdenes de aprehensión que giradas por el mismo motivo contra ocho comuneros a cambio del acceso a La Parota.
- 6/agosto Fueron liberados Marco Antonio Suástegui y Francisco Hernández, luego de pagar una fianza de 15 mil pesos. Al mismo tiempo los opositores entregaron las camionetas que fueron detenidas con el empleado de la CFE.
Agosto 15: Se constituye el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP).
- 19/agosto Opositores reanudan el bloqueo a las camionetas de la CFE en respuesta a la negativa de la empresa a retirar las órdenes de aprehensión.
- 24/agosto Se realiza la Consulta Pública en el Centro de Convenciones de Acapulco, la información presentada por la CFE se concentra en explicar los aspectos técnicos de la obra.
- 25/agosto Redes de organizaciones ecologistas solicitan al titular de la Semarnat que deseche la MIA presentada por la CFE. Por otro lado, el secretario de la RA, Florencio Salazar Adame entrega cheques a los afectados de La Venta por concepto de indemnización de tierras afectadas por la construcción de la presa Ambrosio Figueroa hace 40 años.
- 31/agosto Un retén militar del 58 Batallón se establece junto a la comunidad de Oaxaquillas sobre el camino que lleva a las comunidades inconformes
- 14/septiembre La semarnat detiene la aprobación de la MIA y dan dos meses para ampliar información en algunos rubros.
- 27/septiembre La Oficina de Coordinación de la Red para el Derecho a la Vivienda y a la Tierra de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-HLRN) emite carta donde expresa su profunda preocupación acerca de la posible construcción de la presa.
- 28/septiembre Se instala otro retén militar en el camino que lleva a la comunidad de El Salto.
- 30/septiembre al 3/octubre Se realiza el I Encuentro Nacional de Afectos por las Presas y en Defensa de los Ríos en la comunidad de Agua Caliente que pertenece a los BCC
- 18/octubre La CFE intenta ingresar maquinaria por Aguas Calientes
- 20/octubre Tensión entre Aguas Calientes y Tres Cruces
- 25/octubre Opositores a La Parota analizan si instalan otro plantón en Los Mayos que se uniría al que hay en Agua Caliente, San Isidro Gallinero, Cruces de

- Cacahuatepec y El Cantón todos con la finalidad de no permitir el ingreso de la maquinaria de la CFE a la zona.
- 26/octubre Absuelven a los comuneros Rodolfo Chávez y Jacinto Solís Vázquez de privación ilegal de la libertad y robo de vehículos
- 3/noviembre Autoridades de Cacahuatepec, Cruces de Cacahuatepec y El Rincón pidieron al alcalde de Acapulco su intervención para que la Policía Preventiva municipal resguarde la entrada del material en los BCC.
- 11/noviembre El comisario municipal de San Isidro Gallinero, se reunió con los comuneros opositores a quienes pidió que permitan que se efectúen las obras de rastreo de caminos que van a San Isidro Gallinero-Concepción y San Isidro Gallinero-Las Ollitas y un pozo de agua para la comunidad.
- 11/noviembre El comisariado suplente de San José Cacahuatepec, Gumersindo Joaquín Prudencio instaló un plantón en la entrada de ese poblado para impedir que los campesinos de opositores de Arroyo Verde y Garrapatas pasen por el lugar.
- 24/noviembre Gumersindo Joaquín Prudencio introdujo una máquina de rastrillo de caminos que pertenece a la CFE por el plantón de San Isidro Gallinero.
- 26/noviembre La audiencia para desahogar la solicitud de anulación de la asamblea del 25 de abril se pospone hasta el 6 de diciembre.
- 16 /diciembre La SEMARNAT aprueba la MIA del proyecto La Parota.
- 21/diciembre Un simpatizante de La Parota hiere con machete a un opositor en Cacahuatepec.

2005

- 1/febrero** Instalan plantón en la entrada de Dos Arroyos mientras que el Tribunal Unitario Agrario ordena suspender los trabajos de la CFE en La Parota como medida cautelar para evitar alteraciones y enfrentamientos mientras se lleva a cabo el juicio de anulación de una asamblea.
- 14/febrero Habitantes a favor del proyecto lanzaron piedras a los opositores con el fin de quitarlos del plantón instalado en las inmediaciones de Parotillas. Policías preventivos y rurales controlan a los dos grupos de campesinos inconformes.
- 23/febrero Por tercera ocasión se pospuso el proceso de identificación entre los opositores Marco Antonio Suástegui Muñoz y Francisco Hernández Valeriano, contra el empleado de la CFE, quien los acusó de privación ilegal de la libertad.
- 25/febrero Audiencia para anular la asamblea que aprobó los estudios de CFE en La Parota, hubo un conato de violencia
- 11/marzo En el Foro Intersectorial Sobre el Derecho al Agua organizado por Agustín pro distintas organizaciones rechazan el proyecto.
- 16/marzo** Opositores presentan en la SEMARNAT recurso en contra de la autorización de la MIA que la misma dependencia otorgó a la CFE, con el fin de cancelar la construcción de la obra.
- 25/marzo Opositores marchan por la en contra de la Parota.
- 2 /abril Impiden opositores a La Parota el paso de una máquina del Ayuntamiento a la

- comunidad de Los Iltamos.
- 18/mayo La comisión Especial de la cámara de diputados locales presenta su informe en el que señala que 11 de los 19 núcleos agrarios dieron su firma y voto de confianza para permitir la construcción de la presa.
- Mayo El EPR se declara en alerta ante la construcción de la presa, el CECOP se deslinda del comunicado.
- 9/junio** Opositores interpusieron dos denuncias penales ante la subdelegación de la PGR, la primera en contra de la CFE por daños ambientales y la segunda, contra el subsecretario estatal de Asuntos Agrarios, el presidente del comisariado de Bienes Comunales y el notario público por falsificación de firmas y avalar la asamblea irregular del 25 de abril.
- 24/junio** La Comisión Nacional del Agua otorga la concesión del río Papagayo para la hidroeléctrica.
- 26/junio En el plantón de Dos Arroyos la CECOP impide el paso al Secretario General de Gobierno del estado que se dirigía los Huajes.
- 1/julio** Comuneros opositores realizaron un recorrido por la zona con abogados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, para aportar pruebas que sustenten la demanda que interpusieron contra la CFE por delitos ambientales.
- 4/julio** Por niebla se suspende la visita que peritos ambientales realizaban atendiendo la demanda interpuesta por los opositores ante la PGR contra la CFE por delitos ambientales
- 14/julio El diputado Adrián Chávez Ruiz, coordinador del área de Desarrollo Rural del grupo parlamentario del PRD, presentó un punto de acuerdo en el que solicita la comparecencia del director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, para que informe sobre la construcción de la presa.
- 15/julio** El magistrado Lara Orozco decreta la segunda medida cautelar en la que ordena a la CFE suspender trabajos en La Parota
- 28/julio** Reunión de Representantes de la empresa Sinohydro Corporation Limited, que construye en China la presa Las Tres Gargantas, con el alcalde de Acapulco Alberto López Rosas.
- 31/julio** Acto político por el segundo aniversario del Movimiento de Resistencia Contra el Proyecto La Parota. Acuden integrantes de organizaciones sociales estatales y nacionales, sindicatos y habitantes afectados por la presa.
- agosto Campaña en radio y televisión con Jorge Campos en favor de La Parota, los comuneros afirman que no cambiarán su decisión.
- 9/agosto** Se establece un convenio entre el Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrero con la CFE para que profesionistas guerrerenses sean incluidos en el proyecto La Parota.
- 11/agosto Marchan cerca de 200 opositores a La Parota en Acapulco
- 12/agosto** Ingenieros civiles interesados en trabajar en la Parota asisten a seminario de capacitación en obra urbana que imparten técnicos de Cemex.
- 13/agosto** La CFE presenta el proyecto La Parota ante el Colegio de Ingenieros Civiles de Guerrero, en la reunión Helena Kant de la ONG Guerreros verdes argumento

- su negativa al proyecto.
- 13/agosto A través de una carta, la Red Guerrerense de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), entre otras organizaciones solicitan al presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CODEHUM) Juan Alarcón Hernández, envíe a visitadores a la reunión del 14 de agosto para garantizar el ejercicio de los derechos agrarios de los comuneros.
- 14/agosto** Se enfrentamientos opositores y la policía en la comunidad del Campanario, que lleva a suspender la asamblea convocada por el comisariado de los BCC con el fin de discutir la anuencia de expropiación de los terrenos requeridos para la presa.
- 16/agosto El comisariado de los BCC convoca a asamblea el 23 de agosto y solicita al gobierno estatal que el Ejército resguarde la localidad de Cacahuatpec.
- 16/agosto** Funcionarios del gobierno del estado y de la CFE se reúnen en privado con el dirigente de la CNC, Evencio Romero Sotelo, y el presidente del comisariado de los BCC para planear la segunda asamblea.
- 18/agosto** El consultor del Banco Mundial en México, Luis Geng, afirmó que la construcción de presas como La Parota son caras, su construcción requiere de varios años, daña el entorno ecológico y provocan el desplazamiento de grupos sociales y fauna, por lo que no son viables.
- 22/agosto Dirigentes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), visitan al CECOP y prometen cinco camiones para su traslado a la asamblea del 23 de agosto
- 23/agosto** En una reunión apresurada, rodeada por policías y vallas metálicas, comuneros de Cacahuatpec que están a favor del proyecto La Parota dieron la anuencia en votación unánime, para que la CFE inicie los trámites de expropiación de las tierras necesarias para construir la presa.
- 24/agosto** El CECOP se reúne en Agua Caliente donde acuerda desconocer los resultados de la asamblea del 23, reforzar los plantones y prohibir la entrada de cualquier corporación policiaca a las tierras de los BCC.
- 25/agosto Representantes de 42 organizaciones, municipios y departamentos de Guatemala y del sur de México se solidarizan con el CECOP y los llaman a “no desmayar y continuar su lucha”.
- 1/septiembre Se forma el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Asfalto, Aceites, Bancos de Materiales para la Construcción, Similares y Conexos de la República Mexicana de la CTM, uno de sus integrantes asegura que ya tienen apalabrado el contrato de construcción de la presa.
- 1/septiembre organizaciones que conforman el Espacio de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Espacio DESC) expresaron su solidaridad al CECOP
- 1/septiembre El alcalde Alberto López Rosas afirmó que lo conveniente es que se lleve a cabo otra asamblea en la que se conozca el verdadero sentir de los comuneros.
- 6/septiembre Cerca de 3 mil comuneros opositores al proyecto, apoyados por organizaciones sociales, marcharon por la avenida Costera de Acapulco para demandar la cancelación de la presa.

- 7/septiembre** Una comisión de comuneros opositores presenta un recurso de anulación de la asamblea del 23 de agosto ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41. En la demanda los opositores piden tres medidas cautelares, en las que solicitan a la CFE, SRA y a los representantes impugnados se abstengan de realizar gestiones tendientes al proceso expropiatorio.
- 18/septiembre** Cruz Zamora fue asesinado de un balazo en la cabeza por otro campesino que está a favor de la presa, cuando el primero regresaba a Huamuchitos acompañado de un grupo de opositores, que habían asistido a una asamblea en la comunidad de Agua Caliente.
- 1/octubre El director de la CFE Elías Ayub informó que el presupuesto para La Parota ya está autorizado por el Congreso de la Unión y con esto se iniciaran en breve las obras prometidas cortina abajo en los BCC.
- 11/octubre** Enfrentamiento verbal en el foro convocado por la UAG en Chilpancingo, entre Víctor Hugo Chávez de la CFE, Alfonso Guzmán Andrade, coordinador del grupo de trabajo de la UAG y los comuneros opositores.
- 14/octubre** Comuneros del ejido Dos Arroyos a favor del proyecto fueron trasladados a las oficinas de Protur en Acapulco a una reunión informativa.
- 16/octubre** Ejidatarios de la Palma se reunieron en la comisaría donde se les presentó el proyecto integral de la presa, el que fue realizado por una empresa especializada en el campo, para analizar las alternativas para la producción, infraestructura, salud y vivienda.
- 17 al 21 /octubre** Viajan 6 comuneros del CECOP al IV Encuentro Latinoamericano contra las Represas, en el evento reciben una de las tres cartas de solidaridad firmadas por los asistentes y dirigidas a los diferentes niveles de gobierno⁵³.
- 22/octubre Ejidatarios de Los Huajes y Dos Arroyos denunciaron que profesores de las escuelas primarias y secundarias ubicadas en la zona, promueven entre los niños el proyecto hidroeléctrico por lo que demandaron a la Secretaría de Educación en Guerrero les ordene no interferir en los problemas de los ejidatarios.
- 24/octubre Integrantes del Tribunal Latinoamericano del Agua visitaron algunas comunidades de los BCC, con el propósito de documentarse sobre el conflicto, luego de que los comuneros opositores les pidieron que la hidroeléctrica sea uno de los temas a tratar en las audiencias públicas que se llevarán a cabo en marzo de 2006, paralelas al IV Foro Internacional del Agua, en la ciudad de México.
- 31/octubre** Reunión privada del gobernador con comisarios municipales que simpatizan con La Parota
- 8/noviembre** Matan a un comunero de Cacahuatpec a machetazos.
- 9 al 11/noviembre** I Foro de Crédito Empresarial y Gubernamental organizado por el gobierno del estado en el Centro Internacional Acapulco, en el evento la CFE coloca un stand de promoción de la Presa.
- 16/noviembre** El gobernador del estado Zeferino Torreblanca y el director de la CFE Alfredo Elías Ayub firman convenio de colaboración para la construcción de la presa, la

⁵³ <http://www.aca-novenet.com.mx/portada/171005/17OPOSI.html>

comisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchilt Gálvez Ruiz es testigo. Mientras tanto, en el poblado de Amatillo opositores se reúnen con representantes de las comisiones episcopales de Guatemala, Honduras, Perú, Paraguay y Suecia e integrantes del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario de Guadalajara, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

- 17/noviembre** Opositores del plantón de Dos Arroyos impiden el paso a 16 patrullas del programa federal México Seguro.
- 18/noviembre La comisionada para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez informó que los BCC serán considerados zona de atención prioritaria por el gobierno federal.⁵⁴
- 24/noviembre** Habitantes de El Tamarindo y Barrio Nuevo de los Muertos agreden a dos trabajadores contratados por la CNA para instalar agua potable como trabajos de compensación de la CFE y les decomisan una camioneta Ford pick up.
- 27 /noviembre** En Dos Arroyos policías estatales y municipales de Acapulco se enfrentaron con integrantes del CECOP y por la fuerza entraron al poblado a resguardar una asamblea ejidal, que en condiciones irregulares dio el permiso para que CFE valore las tierras necesarias para la presa. Más tarde un ejidatario ataca a otro con un machete, el agredido pierde el brazo.
- En otro punto hombres armados que están a favor del proyecto intentaron levantar por la fuerza el plantón que el CECOP tiene en el poblado de Huamuchitos.
- 2/diciembre** Miembros de la CECOP se concentraron en Los Huajes, para impedir cualquier intento de asamblea encaminada a aprobar el proyecto.
- 3/diciembre la CFE encomendó al Instituto de Ingeniería de la UNAM un análisis sísmico de la cortina, así como la revisión de la hidrología del sitio para establecer las avenidas de diseño de agua,
- 4/diciembre** En asamblea ejidatarios de La Palma rechazaron el proyecto de la CFE.
- 14/diciembre** El CECOP asiste a la audiencia de presentación de pruebas para respaldar la demanda de nulidad de la asamblea de los BCC, después realiza un mitin frente al Tribunal Unitario Agrario, en el Zócalo de Acapulco.
- 16/diciembre** Se realiza la asamblea del ejido de Dos Arroyos en Tierra Colorada donde se da la anuencia a la CFE para el inicio de los trámites de expropiación. La reunión convocada por la Procuraduría Agraria, se realiza rápidamente fuera del núcleo agrario, mientras en el bloqueo permanente de la comunidad 500 policías estatales se enfrentan con los opositores, el saldo es la detención de cuatro comuneros, uno de ellos, de 73 años, herido en la cabeza.
- 18/diciembre** Liberan a los cuatro opositores detenidos en Dos Arroyos tras pagar multa de 25 mil pesos, los delitos que les imputan son sedición y asociación delictuosa.
- 18/diciembre Se realiza la asamblea en el ejido La Palma que el comisariado ejidal suspende por la posibilidad que ganara la posición de rechazo a la expropiación de las tierras.

⁵⁴ Novedades de Acapulco

- 19/diciembre No acuden Xóchitl Gálvez ni Félix al diálogo con los opositores a La Parota, la primera no confirma, el segundo por los malos entendidos a partir de la detención de los 4 comuneros en Dos Arroyos.
- 27/diciembre** Con la participación de ejidatarios que están a favor de la presa se lleva a cabo en el poblado Kilómetro 21 la asamblea del ejido Los Huajes, en la que se dio anuencia a la CFE para el inicio de los trámites de expropiación. Mientras, en el centro de la localidad, una comisión integrada por seis personas del pueblo, incluido el presidente del comisariado ejidal y el comisario municipal esperan la llegada de los funcionarios de la Procuraduría Agraria, organismo que había convocado la asamblea.
- 27 /diciembre** Asamblea del ejido de La Palma en la que se da anuencia a la CFE para el inicio de los trámites de expropiación.
- 29/diciembre Anuncia Elena Kahn campaña de resistencia civil para defender las tierras de La Parota. En un boletín fechado en la ciudad de México, 15 organizaciones estatales, nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos repudiaron las prácticas violatorias que el gobierno estatal comete con la imposición del proyecto de La Parota.

2006

- 6/enero El dirigente de la CNC, Nabor Ojeda Delgado, anunció la creación de la Unión de Ejidos de la Presa La Parota (UEPP), que aglutinará a las comunidades afectadas por la construcción para vigilar que la CFE no abuse de los campesinos en el proceso de liquidación de sus tierras⁵⁵.
- 17/enero** Red Internacional de los Ríos (IRN por sus siglas en inglés) envió una carta al presidente Fox para manifestar su preocupación por las “irregularidades y violaciones” cometidas contra el CECOP.
- 17/enero** Los diputados federales aprobaron un punto de acuerdo mediante el cual se crea un grupo de diputados de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía y de Justicia y Derechos Humanos para que atienda la problemática relacionada con el proyecto hidroeléctrico⁵⁶.
- 18/enero** El magistrado del TUA 41, Juan Rodolfo Lara Orozco, anuló la asamblea del 23 de agosto de 2005 de los Bienes Comunales de Cacahuatpec, pues sólo 823 de 2 mil 300 ejidatarios firmaron el acta⁵⁷.
- 18/enero Nueve grupos y redes ambientalistas integraron la Coalición Ecologista No a La Parota, con el fin de rechazar la construcción de la presa⁵⁸.
- 29/enero** El opositor al proyecto, Eduardo Maya Manrique, es asesinado a golpes por un simpatizante en la comunidad de Dos Arroyos.
- 30/enero** Suspenden la feria en la fiesta de Dos Arroyos para evitar enfrentamientos.

⁵⁵ La Jornada 06/01/06

⁵⁶ http://prdleg.diputados.gob.mx/sala/boletines/06_01_23/bol0733.htm

⁵⁷ La Jornada, 14/02/06.

⁵⁸ La Jornada, 18/01/06.

- 9/febrero La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) envió una carta al presidente Vicente Fox y a Florencio Salazar secretario de RA, en la que manifiesta su "preocupación" por la construcción de presa y solicita que "no se expropien" los terrenos donde se asentará⁵⁹.
- 13/febrero** Comuneros a favor presentan amparo para concretar la construcción de la presa, con el argumento de que existieron violaciones graves por parte del Magistrado que anuló la asamblea del 23 de agosto de 2005.
- 1/marzo** Demanda opositores ante el Tribunal Unitario Agrario, la nulidad de la asamblea del 27 de diciembre en la que Los Huajes daba la anuencia a la CFE.
- 7/marzo** Ejidatarios a favor del proyecto impidieron el paso de camiones materialistas hacia el poblado de San José Cacahuatpec, donde la CFE realiza obras de pavimentación relacionadas con la presa. La protesta se da por el incumplimiento de la paraestatal⁶⁰.
- 15/marzo** Representantes de la organización FIAN Internacional y la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México se reúnen con funcionarios de la SRA, a quienes expresaron su preocupación por la nula intervención de la dependencia en la vigilancia del proceso de consulta de los núcleos ejidales⁶¹.
- 16/marzo Alrededor de 500 integrantes del CECOP marchan del Museo de Antropología a la Columna de la Independencia en la Ciudad de México⁶².
- 21/marzo** El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) sesiona en el Cd de México en el marco del IV Foro Mundial del Agua. Uno de los catorce juicios se refiere a la hidroeléctrica La Parota, el fallo es la suspensión inmediata del proyecto⁶³.
- 4/abril** Opositores toman la planta de agua Papagayo II ubicada en el poblado de Salsipuedes que dota de agua a 800 mil personas de Acapulco⁶⁴.
- 16/abril** El subcomandante Marcos visita la comunidad de Agua Caliente, como uno de los puntos de la otra Campaña.
- 26/abril** Pide IFAI a la CFE informe sobre los afectados por la presa, la paraestatal contesta que una vez que termine el Plan de Reubicación dará a conocer esos datos⁶⁵.
- 27/abril** Los negociadores de la CFE para la presa no acuden a la cita programada con los presidentes municipales de Juan R. Escudero, Tecoaapa y San Marcos, en la reunión se definiría los precios por la indemnización de las tierras⁶⁶.

⁵⁹ La Jornada, 09/02/06.

⁶⁰ Novedades de Acapulco, 08/03/06.

⁶¹ La Jornada, 16/03/06.

⁶² El Universal, 16/03/06.

⁶³ La Jornada, 21/03/06.

⁶⁴ Novedades de Acapulco, 06/04/06.

⁶⁵ Novedades de Acapulco, 27/04/06.

⁶⁶ Novedades Acapulco, 28/04/06.

- 30/abril** Opositores bloquean la entrada de Dos Arroyos por la posible asamblea para elegir comisariado ejidal⁶⁷.
- 7/mayo** Integrantes del CECOP realizaron un bloqueo informativo en apoyo a los ejidatarios de Atenco en la carretera federal de la Costa Chica a la altura de San Pedro Cacahuatpec.
- 9/mayo** Marcha en respaldo del proyecto organizada por la CNC no oficial y la dirigente de la Central Campesina Independiente. El gobernador encabeza la movilización junto con los presidentes municipales de J R Escudero y Tecoaapa.
- 14/mayo** Miembros del CECOP marchan y bloquean la carretera federal a Acapulco en respuesta a la movilización encabezada por el gobernador.
- 15/mayo Marchan en Tlapa en apoyo a opositores a La Parota y a presos políticos de Atenco.
- 19/mayo** La ONU emite recomendación para que se respeten las garantías y el consentimiento de las comunidades amenazadas por el proyecto presa La Parota.
- 23/mayo** La caravana Aguas en Movimiento parte de la comunidad de Agua Caliente, la movilización la integran miembros del CECOP organizaciones asociadas al MAPDER y estudiantes.
- 23/mayo Opositores a La Parota entregan una carta a Vicente Fox en la que exigen la salida inmediata de la CFE de sus tierras, el cese a las agresiones y el impulso a un programa de desarrollo regional.
- 26/mayo** El 21 Tribunal Colegiado de Circuito otorgó un amparo a los comuneros de Cacahuatpec que están a favor de la presa La Parota, contra la resolución del Tribunal Unitario Agrario 41 (TUA).
- 2/junio** El gobernador no asiste a la asamblea convocada por la CECOP.
- 8/junio** Simpatizantes de la Parota intentan tomar sistema Papagayo I, ubicado a dos kilómetros de la comunidad de Agua Caliente que surte agua a la zona turística de Acapulco, pero fueron bloqueados por miembros del CECOP. Exigen el retiro de plantones de opositores, la formación de un Fidecomiso para las indemnizaciones y que inicien las capacitaciones que la CFE prometió.
- 9/julio** Mette Hald Hundewadt, miembro de Amnistía Internacional (AI) en Dinamarca, pide a los tribunales agrarios de un fallo con base en la verdad, sin injerencias políticas y con irrestricto apego a derecho.
- 13/julio** Se realiza la elección del comisariado del ejido Los Huajes con múltiples irregularidades. El CECOP se queja que la asamblea fue preparada con el fin de imponer a una autoridad que esté al servicio de la CFE ya que en el padrón no aparecen varios opositores a la presa.
- 2/agosto** Ejidatarios de Dos Arroyos opositores presentaron en el TUA pruebas de anomalías en la asamblea de su núcleo agrario en la que se dio la anuencia a la CFE para expropiación de sus tierras.

⁶⁷ Novedades Acapulco, 30/04/06.

- 2/agosto** La Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) envían una carta al Tribunal Superior Agrario de la Federación y al TUA 41 solicitando que consideren las recomendaciones del Comité DESC de las Naciones Unidas, referentes al derecho de consulta de las comunidades afectadas por la presa.
- 6/agosto Trabajadores de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) imparten un taller sobre proyectos apícolas a colonos de Altos del Camarón, como parte del Plan de Desarrollo Integral del proyecto de la hidroeléctrica La Parota.
- 10/agosto** El relator de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, Rodolfo Stavenhagen, afirmó que hay violaciones a los derechos de los comuneros y ejidatarios opositores a la presa porque el gobierno les impide su participación en asambleas donde se toman decisiones y usa de manera desmedida la fuerza pública.
- 17/agosto Vicente Fox no accede a la petición de diálogo que presentaron los opositores y los remite con la CFE. La paraestatal responde por medio de un documento que es falso que esa empresa haya tomado una decisión unilateral para hacer La Parota.
- 24/agosto** El presidente del TUA, Juan Rodolfo Lara Orozco, rechazó la demanda de anulación de la asamblea de Los Huajes, cuya solicitud es del 1 de marzo.
- 26/agosto** Asaltan a Marco Antonio Suástegui, líder del CECOP, el afectado considera el hecho como una nueva forma de hostigamiento y agresión.
- 5/septiembre Comuneros integrantes del Comité Regional de Comisarios, Delegados y Líderes Naturales del área de influencia de la presa La Parota amenazaron con tomar las calles y edificios públicos el 11 de septiembre, porque no han visto las obras sociales que prometió la CFE.
- 12/septiembre** El juzgado tercero de distrito con sede en Acapulco resuelve los amparos a favor de campesinos opositores y ordena al TUA emitir medidas de protección para garantizar el resguardo de las tierras ejidales de Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma, para evitar la ejecución de obras relacionadas con la hidroeléctrica.
- 20/septiembre** Instalan opositores a La Parota nuevo plantón en San José Cacahuatpec para impedir que trabajadores y camionetas de la CFE ingresen a la zona.
- 26/septiembre** La CFE instala módulo de difusión en el centro comercial La Gran Plaza, para buscar el apoyo de los ciudadanos al proyecto hidroeléctrico.
- 30/septiembre** Autoridades de seis núcleos agrarios a favor del proyecto integraron un Frente Común para la Defensa de la Tierra, a fin de vigilar que la Comisión pague de forma equitativa a los comuneros afectados con las obras.
- 2/octubre El Tribunal Unitario Agrario número 41, con sede en Acapulco, declaró válida la asamblea general de Los Huajes –en la que comuneros dieron su anuencia a la CFE para iniciar los trámites de expropiación de sus tierras – al considerar que los opositores cayeron en “contradicciones” al rendir sus declaraciones.
- 10/octubre** La defensa del CECOP presentó en el Tribunal Unitario Agrario número 41 un recurso de revisión sobre el caso del ejido de Los Huajes, en el que el

- Tribunal resolvió validar la asamblea.
- 14-15 Miembros de la organización Food First Information and Action Network (FIAN) visitan comunidades afectables por la presa La Parota. Denuncian que la CFE había iniciado la apertura de un nuevo camino, en el lado norte, por Apanhuac y Huajintepec, con la pretensión de llegar al área planeada para la cortina.
- 16/octubre La CFE realiza obras de compensación en las zonas afectables para ganarse la confianza de los ejidatarios, destaca la rehabilitación de una escuela, la iglesia y un albergue en la localidad de Los Mayos, un pueblo de siete casas. Además comienza una segunda etapa de capacitación para comuneros de La Concepción, La Palma y San Juan del Reparo, en Tierra Colorada en oficios relacionados con la construcción de la presa.
- 20/octubre Simpatizantes a La Parota piden al gobernador que desaloje el plantón en Dos Arroyos.
- 20/octubre** El TUA ordena a la CFE la suspensión de obras relacionadas con la presa La Parota en territorio de los Bienes Comunes de Cacahuatpec.
- 23/octubre** Comuneros a favor de la presa instalan un plantón en San José Cacahuatpec a 800 metros antes del bloqueo del CECOP.
- 26/octubre La CECOP denuncia que pese a la orden del TUA se construyó una cancha de fútbol en Apanhuac.
- 27/octubre Opositores a La Parota exigen al alcalde que retire el plantón de Cacahuatpec ante posibles enfrentamientos por una futura asamblea.
- 29/octubre** Simpatizantes de la Parota Impiden la asamblea de opositores en Cacahuatpec.
- 30/octubre** Luego del conato de violencia en el camino que conduce a la comunidad San José Cacahuatpec, opositores y simpatizantes a la presa La Parota se reunieron por separado con el alcalde Félix Salgado Macedonio, la propuesta es retirar los dos plantones de ambos bandos.
- 13/noviembre** Pobladores de las localidades de la Ruta del Sol bloquearon el camino Kilómetro 30-El Camarón, para exigir el retiro del plantón de los opositores en Dos Arroyos, se quejan de las pérdidas económicas y de infraestructura social por el bloqueo.
- 20/noviembre** Instalan retén informativo en la Acapulco-Zihuatanejo, exigen cancelación inmediata del proyecto La Parota⁶⁸.
- 7/diciembre** Conferencia de prensa donde opositores a La Parota y Tlachinollan señalaron que el gobernador Zeferino Torreblanca aprobó la construcción de las carreteras Dos Arroyos-Agua de Perro y Tunzingo a la cortina de la presa con recursos de la CFE, en lugares donde el Tribunal Unitario Agrario le prohibió la entrada.
- 13/diciembre Documentos oficiales de la CFE muestran que la carretera cuya construcción se atribuye el gobierno del estado en terrenos comunales de Cacahuatpec, que va de Tunzingo a San Isidro Gallinero y del puente de la Autopista del

⁶⁸ Novedades Acapulco, 26/11/06.

Sol a Altos del Camarón, son parte del proyecto hidroeléctrico.

- 15/diciembre El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo acepta que la CFE invierte recursos en la construcción de la carretera Tunzingo-San Isidro Gallinero.
- 15/diciembre** Opositores marchan desde la comunidad de Agua Caliente y bloquean intermitentemente la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, el motivo es la inconformidad ante el desacato de CFE a la orden judicial en donde se le indica no entrar a tierras de los BCC.
- 16/diciembre El diputado priísta Carvajal Millán afirmó que es falso que la mayoría apruebe La Parota, asegura que el proyecto no se va a concretar.
- 17/diciembre** Ejidatarios simpatizantes con el proyecto instalan un plantón en el punto conocido como Las Minas para evitar los trabajos de construcción de la carretera, la acción se da ante el incumplimiento de la CFE del pago de 10 mil pesos para cada uno de los 136 ejidatarios de Playones de San Isidro.
- 21/diciembre Representantes del CECOP asistieron al Palacio Legislativo de San Lázaro a demandar a los diputados federales de Guerrero su apoyo en la lucha contra el proyecto de la CFE.
- 23/diciembre Ejidatarios de Playones de San Isidro advirtieron que si antes de fin de año no se acercan autoridades del municipio, el estado o la federación a negociar con ellos repartirán en lotes el terreno de la carretera que construyen el gobierno del estado y la CFE.

2007

- 6/enero Asesinan de un balazo a un campesino de Huamuchitos opositor a La Parota.
- 25/enero** Protestan vecinos de Dos arroyos en el ayuntamiento de Acapulco, se quejan que la CECOP impide el paso de los juegos para la feria del pueblo.
- 1/febrero** Evitan enfrentamiento entre simpatizantes y opositores de Dos Arroyos por la feria.
- 7/febrero** El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, visita las comunidades de Garrapatas y Tasajeras, con el objetivo de escuchar los testimonios de quienes se oponen al proyecto hidroeléctrico.
- 8/febrero** El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo se reúne con Amerigo Incalcaterra, quien se ofreció como “intermediario” en el conflicto.
- 12/febrero** El CECOP marcha junto con otras organizaciones en Chilpancingo para pedir solución a problemas entre ellos la cancelación de presa La Parota.
- 14/febrero** Integrantes del CECOP visitaron a ejidatarios de Carrizalillo que mantienen un bloqueo a la minera LUISMI.
- 15/febrero El gobernador Torreblanca en compañía de diputados locales visita la casa muestra que la Comisión construye en La Concepción para los afectados por el proyecto.
- 25/febrero Se realiza una consulta ciudadana para conocer la postura respecto a la presa La Parota, los resultados son que el 81 por ciento manifestó que está en contra

del proyecto y el 19 por ciento a favor.

- 25/febrero** Contrario a la postura del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD, el Consejo Municipal de ese partido en Acapulco acuerda expresar su “solidaridad” con el CECOP para que sea respetado su derecho a decidir sobre sus tierras
- 2/marzo** Integrantes del CECOP retuvieron a la Secretaria de Desarrollo Social del gobierno estatal, Gloria Sierra López, en el plantón de Dos Arroyos.
- 15/marzo Con ofrendas al río la CECOP conmemora el Día Internacional en Contra las Presas, por los Ríos, el Agua y la Vida.
- 15/marzo** Los relatores especiales sobre Vivienda Adecuada, Alimentación y sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enviaron una carta conjunta al gobierno mexicano para expresar preocupación sobre las violaciones a los derechos humanos vinculadas al proyecto hidroeléctrico La Parota.
- 17/marzo** El Tribunal Superior Agrario (TSA) ordenó al TUA número 41 emitir una nueva sentencia sobre la asamblea de Los Huajes, debido a que no valoró las pruebas que se presentaron para su nulidad.
- 23/marzo** El CECOP pide apoyo a la Convención Nacional Democrática (CND) para la defensa de las tierras y del río Papagayo.
- 20/marzo** Rodolfo Stavenhagen, relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, entrega su sexto informe anual, en el que denuncia las violaciones a los derechos humanos el proyecto de la presa.
- 28/marzo** El Tribunal Unitario Agrario (TUA) dictó sentencia sobre la impugnación a la asamblea del 23 de agosto a favor de los opositores. El fallo establece realizar una nueva sesión en los BCC.
- 4/abril** El comisariado Jesús Crisanto Arellano convoca a nueva asamblea en los BCC. Los puntos son la aprobación del proyecto, la autorización para la ocupación de sus tierras y el permiso al comisariado para que “a nombre de la asamblea” realice acuerdos relacionados con la presa.
- 10/abril** El pleno de la cámara de diputados aprueba por unanimidad un punto de acuerdo para exhortar al presidente Felipe Calderón Hinojosa y al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, a atender las recomendaciones que el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) emitió el 20 de marzo de 2006.
- 21/abril** Rodolfo Chávez fue detenido por policías ministeriales aun cuando ya había sido cancelada la orden de aprehensión.
- 23/abril** José Venus Hernández Nicanor, del CECOP, y el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales, visitan Alemania donde participan en un seminario internacional sobre México.
- 23/abril** El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, presenta demanda para suspender la asamblea convocada el pasado 4 de abril.
- 25/abril** Rechaza el TUA suspender la asamblea del 6 de mayo sobre La Parota.

- 2/mayo** Amnistía Internacional alerta que la asamblea del domingo “podría derivar” en violencia, lo que pone en riesgo la vida de los comuneros que se oponen al proyecto.
- 6/mayo** La asamblea, convocada por el comisariado de los BCC, se suspende por falta de quórum. Se programa la próxima reunión para el 20 de mayo en El Bejuco.
- 9/mayo El CECOP invita a diputados federales como observadores a la asamblea en El Bejuco
- 17/mayo** Sindicatos de la construcción y de la industria turística afiliados a la CTM marcharon para apoyar la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota
- 16/mayo** El diputado federal José Antonio Almazán organiza un foro sobre la presa en un salón del Congreso estatal.
- 16/mayo** El CECOP pide a la dirigencia estatal del PRD que envíe una representación a la asamblea de El Bejuco
- 17/mayo** Integrantes CECOP informaron que el TUA anuló el acta de la asamblea del ejido Dos Arroyos celebrada el 16 de diciembre de 20mayo, debido a que el gobierno del estado envió a policías y las autoridades agrarias cambiaron de sede sin previo aviso.
- 20/mayo** La asamblea general de comuneros de los BCC en segunda convocatoria, en el Bejuco, fue declarada inexistente en un acta que no firmó el representante de la Procuraduría Agraria ni el presidente del Comisariado. El acuerdo es convocar a una primera asamblea en Cacahuatepec para analizar las ventajas y desventajas del proyecto hidroeléctrico La Parota”. A la par de la asamblea opositores marchan y bloquean parcialmente la carretera Acapulco-Pinotepa.
- 23/mayo** Primera reunión entre simpatizantes y opositores a la presa que concluye con un único punto de acuerdo, una nueva junta en días próximos para ofrecer respuestas a los ofrecimientos.
- 28/mayo El CECOP en asamblea rechaza la propuesta del comisariado ejidal para que la próxima reunión se realice el miércoles 30 de mayo en BCC.
- 29/mayo El asesor jurídico de la Organización Democrática de Participación Ciudadana de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que apoya la presa, enviará una carta al presidente Felipe Calderón, en la que reta a la Comisión a demostrar los beneficios del proyecto.
- 27/mayo** En Dos Arroyos militares detienen a presunto opositor, más tarde es liberado.
- 29/mayo** El CECOP entrega, a través del TUA, al comisariado de los BCC la propuesta de asamblea para el 3 de junio.
- 3/junio** Asamblea del CECOP en Amatillo, se acuerda una reunión con funcionarios de la CFE el 8 de julio en la cabecera de los BCC.
- 05/junio Difieren al 30 de agosto la audiencia sobre la nulidad de las asambleas de La Parota
- 6/junio** La comisión de diputados locales, federales y dirigentes estatales del PRD sostuvieron reuniones por separado para entregar la propuesta a representantes del CECOP y a los asesores jurídicos de los campesinos que se han manifestado a favor del proyecto. El planteamiento de los diputados es un

sistema de votación denominado de doble mayoría, esto es, que por un lado voten los comuneros y ejidatarios y por otro, con la ayuda del IFE, emitan su decisión los que residan en las comunidades afectadas.

- 11/junio** El CECOP anunció que no permitiría al PRD el plebiscito.
- 14/junio** El Frente de Lucha por el Socialismo, que aglutina a 60 organizaciones en nueve estados de la República, da su apoyo al CECOP.
- 17/junio** El CEOP acuerda la instalación de un retén en Los Huajes para evitar el ingreso de la Secretaria de Desarrollo Social del estado, Gloria Sierra López.
- 20/junio** Simpatizantes y Opositores de la presa acordaron para el 12 de agosto la asamblea informativa, en la que la Comisión y expertos hablarán sobre las ventajas y desventajas del proyecto.
- 24/junio** Integrantes del CECOP acuerdan negar el acceso a trabajadores del INEGI, que levantan el censo en los BCC.
- 26/junio** Un convoy del Ejército entra a la comunidad de Dos Arroyos y es obligado a retirarse por opositores a La Parota.
- 29/junio** El director de la Asociación Civil Ágora presentó a integrantes del Colegio de Arquitectos en Acapulco el plan que integra cinco proyectos estratégicos: un desarrollo turístico, una escalera (carretera escénica) eco turística, centro regional de prestadores de servicios, pago por prestación de servicios ambientales, parque temático recreativo y actividades económicas tradicionales.
- 2/julio** Manuel López Obrador critica el proyecto durante la convención en el zócalo de la ciudad de México, por considerar que causaría devastación en la zona donde se proyecta su construcción.
- 9/julio** Posponen para septiembre la audiencia sobre la nulidad de la elección de comisario en Sabanillas.
- 10 /julio** Opositores y comisariado legal de Cacahuatpec firman la invitación a la CFE para la asamblea del 12 de agosto.
- 15/julio** En asamblea se acuerda que la reunión del 12 de agosto sea en Agua Caliente.
- 24/julio** El gobierno estatal presenta el proyecto “residencial-turística Riviera La Parota” durante una reunión de dirigentes y diputados del PRD con funcionarios de la CFE.
- 28/julio** Celebran aniversario del movimiento de oposición con la visita de numerosas organizaciones estatales y nacionales.
- 1/agosto** Foro Análisis de La Parota, organizó el diputado perredista José Antonio Almazán González, ex dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- 3/agosto** Reunión preparatoria para la asamblea informativa en Agua Caliente, por parte de la Comisión asiste el Ing. Gerardo Cruz Velázquez, que llevó la respuesta del director de Proyectos de Inversión Financiada, Eugenio Laris Alanís.
- 4/agosto** Irene Kant de Amnistía Internacional se reúne con el CECOP, después de escucharlos en Agua caliente, en Tasajeras y en Dos Arroyos, la funcionaria expresó que como pueblos afectados tienen el derecho de ser informados sobre las características y el impacto del proyecto y ofreció que su organización

- seguirá pendiente del conflicto.
- 4/agosto** Dos comuneros de Cruces de Cacahuatpec se enfrentan a machetazos.
- 6/agosto** Invitados por la CFE, cuatro dirigentes estatales del PRD van a la presa El Cajón.
- 6/agosto El pan se divide ante la visita de Irene Kant, El secretario general del PAN apoya y una diputada critica el informe de AI
- 8/agosto Reprocha Zeferino a Irene Khan que no se reunió con él y con los que apoyan La Parota, mientras que el CEE del PRD evalúa si mantiene su apoyo a La Parota, luego del informe de AI.
- 12/agosto** Se celebra asamblea en Agua Caliente, Cacahuatpec, tras escuchar a la CFE y especialista comuneros y habitantes de los BCC se oponen a la presa. Los miembros del Comisariado y tres del CECOP firman el acuerdo de rechazar el proyecto, resolución final de un proceso de conciliación y diálogo entre las partes.
- 13/agosto** Miembros CECOP entregaron en el TUA el acuerdo firmado el 12 de agosto donde se rechaza el proyecto, sin embargo, los integrantes del Comisariado no se presentaron a ratificar porque a través de una conferencia de prensa se retractan de su firma, argumentando que fueron presionados.
- 28/agosto La Jueza octava de distrito en Guerrero, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, concedió un amparo al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, por lo que ordenó la suspensión provisional de las obras de este proyecto hidroeléctrico.
- 19/octubre** Los relatores especiales de la ONU sobre vivienda adecuada, Miloon Kothari y sobre derechos fundamentales de los pueblos indios, Rodolfo Stavenhagen, enviaron al gobierno mexicano el documento "*Reflexiones sobre algunas implicaciones en materia de derechos humanos del Proyecto Hidroeléctrico de La Parota*". En dicho documento plantean que existen algunas inconsistencias en las medidas que el Estado mexicano ha adoptado con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas afectadas por la realización del Proyecto Hidroeléctrico La Parota", en cuanto a los derechos a la información, a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado.
- 7/noviembre⁶⁹ Una juez federal de Guerrero determinó archivar el juicio de amparo que interpusieron habitantes de Cacahuatpec contra la construcción de la presa La Parota, al considerar que no se afectarán sus intereses con la obra.
- 28/noviembre El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, anunció el inicio de construcción de la presa La Parota. Afirma que ganó el pleito judicial que mantenía con comuneros y ejidatarios de Guerrero. Por su parte el abogado de Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, asegura que la demanda de comuneros de Cacahuatpec opositores a La Parota para que se anulara la asamblea que dio anuencia para la expropiación de las tierras, ya fue ganada definitivamente en el Tribunal Unitario Agrario, y la asamblea está anulada.

⁶⁹ El Financiero en línea

9/diciembre El responsable de la Comisión Especial para el Seguimiento de "La Parota" del Congreso estatal, diputado Arturo Alvarez Angli, aseguró que aún no hay condiciones para iniciar trabajos de "La Parota".

2008

8/enero El gobierno mexicano responde a los relatores especiales de la ONU que no se ha realizado la licitación ni ningún trabajo constructivo de la presa, sólo se han hecho estudios para el proyecto, y obras de desarrollo social en las comunidades, a petición expresa de autoridades y pobladores, sin que se exija a cambio el apoyo al proyecto. Dice también que tomará en cuenta las propuestas de los relatores para llevar adelante el proyecto.

3/febrero El CECOP instaló un plantón en el camino que conduce a Cacahuatpec con el fin de impedir que la CFE realice las 40 obras que tenía programadas en la zona.

7/febrero El vocero del CECOP: Felipe Flores Hernández, se reunió con la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Louise Arbour. La comisionada se comprometió a ser su voz ante el gobierno del estado y federal.

26/febrero Carola Hausotter, representante de la coordinadora alemana por los Derechos Humanos en México, se reunió con el CECOP. La enviada se comprometió a transmitir las demandas ante parlamentarios de su país.

28/febrero Con un plantón, opositores a La Parota cierran la explotación de arena y grava del río Papagayo.

4/marzo Miloon Kothari presenta el documento "Reflexiones sobre algunas implicaciones en materia de derechos humanos del Proyecto Hidroeléctrico de La Parota" ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

10/marzo En la localidad de Aguas Calientes, municipio de Acapulco, se constituyen el Frente Guerrerense contra la Represión y la Impunidad. Entre las organizaciones que integran están el CECOP y la OCSS.

14/marzo Se reúnen el secretario de Gobierno de Guerrero, Armando Chavarría Barrera, y los 12 integrantes del Servicio Internacional para la Paz (Sipaz) provenientes de Austria, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Suecia y Suiza. Después de una visita a diversas comunidades los visitantes expusieron que en Guerrero persisten "graves violaciones" a los derechos humanos, demandaron el derecho a la consulta en el caso de los afectados por La Parota.

19 al 21/ Junio Se realiza el V Encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) y el I Encuentro de la Red Mexicana Antiminera (REMA) en Temacapulín, Jalisco.

5/julio Asistencia de dos representantes del CECOP al Foro Mundial de las Luchas del Agua celebrado en Zaragoza, España.

17/septiembre El pleno del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero (IEEG) aprobó el anteproyecto de presupuesto que se habrá de solicitar para el ejercicio fiscal 2009, mismo que asciende a 150 millones 660 mil 993 pesos y en el que se incluye una partida de 12 millones 75 mil 776 pesos para la realización de consultas ciudadanas o plebiscito, que podrían realizarse en temas como la presa La Parota y la despenalización del aborto.

21/septiembre El activista español Pedro Arrojo, ganador del premio Goldman 2003 y presidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, se reúne con comuneros Opositores a La Parota en la comunidad Amatillo, tras una marcha. En la sesión los afectados expresan su oposición a la consulta que prevé organizar el IEEG.

6 al 8/noviembre Se realiza el I Encuentro Popular “Agua, Energía y Alternativas Energéticas”, en la comunidad de Agua Caliente, del municipio de Acapulco, Guerrero. El encuentro fue convocado por el MAPDER, REMA ⁷⁰ y AMAP ⁷¹. En la declaración final se enfatiza la importancia de la unificación de las luchas en contra de los megaproyectos de generación de energía eléctrica así como de explotación de minas en todo el país.

10/noviembre Inicia transmisiones La Parota, radio comunitaria en Acapulco⁷².

2009

25/enero El representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Magdy Martínez-Solimán, se declaró a favor de la presa al considerar que su construcción generará empleos.

10/febrero⁷³ El CEMDA afirma que en respuesta a una solicitud de información la CFE reconoce que podría considerarse una eventual cancelación del proyecto hidroeléctrico La Parota, al afirmar que los convenios de ocupación temporal de las tierras hechos con los núcleos agrarios han perdido vigencia, las actas de las asambleas para aprobación del proyecto fueron anuladas y sus juicios ya están concluidos en todas sus instancias; no existe autorización para cambio del uso de suelo, ni lo habrá, pues se requiere la anuencia de las comunidades, además de que todas las negociaciones se encuentran suspendidas.

21/marzo Representantes de diversas organizaciones sociales de Guerrero se reunieron en Chilpancingo y acordaron impulsar un plan de acción conjunto en rechazo a la construcción de la presa La Parota y otros problemas estatales.

26/mayo Ejidatarios opositores a la presa La Parota que mantenían un plantón en el poblado de Dos Arroyos advirtieron que bloquearían las elecciones a diputados federales debido a la “burla” que ha hecho la candidata del PRD por el distrito 9, Gloria Sierra López, al querer entrar a la zona de conflicto.

⁷⁰ Red Mexicana No a la Minería

⁷¹ Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos

⁷² <http://www.jornada.unam.mx/2008/11/10/index.php?section=estados&article=035n1est>

⁷³ www.lajornadaguerrero.com.mx/2009/02/10/index.php?section=sociedad&article=005n1s

- 7/agosto El director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, afirmó que buena parte de los proyectos de infraestructura en México están detenidos por problemas sociales y no por una falta de financiamiento o de estudios de viabilidad técnica. La declaración se da durante la clausura del seminario Planeación Estratégica de la Infraestructura en México 2010-2035.
- 20/septiembre Funcionarios de la CFE aseguraron que el proyecto hidroeléctrico La Parota sólo fue aplazado hasta 2018. La decisión de postergar la construcción se basó principalmente en el margen de reservas suficientes del país.
- 24 septiembre Miembros del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas y ramas afines de Guerrero (Cimeg) lamentaron que el proyecto hidroeléctrico de La Parota haya sido pospuesto, porque representa un golpe terrible a la economía de los guerrerenses, al ser cancelados mil contratos que CFE había anunciado para la edificación del proyecto.
- 10/octubre Habitantes y representantes de los 47 poblados que integran los Bienes Comunales de Cacahuatepec, exigieron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo que reconozca al comisario que aseguran, fue elegido en asamblea legítima por los pobladores el pasado 15 de marzo, y no a la persona que fue impuesta por “cuatro funcionarios del gobierno estatal”.

2010

- Enero En los recursos solicitados por la CFE no aparece el proyecto de La Parota.
- 28 /abril Aproximadamente 600 comuneros del comisariado de bienes comunales de Cacahuatepec aprobaron en asamblea la construcción de la presa La Parota. Afuera de la alambrada protestaban integrantes del CECOP.
- 12/mayo El CECOP interpone ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 41, con sede en Acapulco, un juicio de nulidad de la asamblea celebrada el 28 de abril.
- 3/julio El TUA 41 otorgó las medidas cautelares solicitadas por opositores a la presa La Parota con las que impide a la CFE, al gobierno del estado, a dependencias gubernamentales y al comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec efectuar trabajos o firmar de documentos relacionados con la construcción de la hidroeléctrica en esa zona.

2011

- 10/enero Integrantes del CECOP reactivaron un plantón cerca del poblado Parotillas, ante la postura de los candidatos a gobernador a favor de la construcción de la presa.
- 14/marzo En el marco del Día Mundial contra las Represas integrantes del CECOP realizaron una ofrenda en el río Papagayo con los productos que se cultivan en la zona: papaya, limón, ejotes, calabazas y mangos.
- 28/abril El Tribunal Unitario Agrario (TUA) del distrito 41 resolvió a favor del CECOP el

juicio de nulidad con el que queda sin validez la asamblea organizada por el gobierno del estado el pasado 28 de abril del 2010.

- 8/mayo El gobernador Ángel Aguirre Rivero visita la comunidad de Aguas Calientes donde comprometió a revisar los acuerdos de Cacahuatepec, documento de cinco puntos mediante el cual los pobladores buscan comprometerlo para gestionar ante la Presidencia de la República la cancelación del proyecto.
- 6/ junio Amparo contra la resolución del distrito 41

2012

- 23/ marzo Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativo anula la asamblea efectuada en La Concepción municipio de Acapulco, el 28 de abril de 2010 y con la cual se pretendía llevar a cabo la expropiación de tierras. Ante esta decisión un grupo de comuneros a favor de la presa se amparan.
- 12 /julio El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito ratificó la nulidad de la asamblea de los Bienes Comunes de Cacahuatepec realizada el 28 de abril de 2010.
- 16 /agosto El gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, firmó los acuerdos de Cacahuatepec con el CECOP. El documento abarca cinco puntos, entre los que se compromete a no utilizar la fuerza pública en contra la organización e impulsar la paz, la justicia y el respeto al derecho de los campesinos, además de solicitar una audiencia con el presidente.

2013

- 21 /diciembre Anuncia el CECOP inicio de trámites para crear municipio e independizarse de Acapulco porque se sienten olvidados. Desde septiembre que sufrieron inundaciones por el desfogue de la presa La venta no han recibido indemnización ni apoyo de la CFE para limpiar las casas que se llenaron de lodo.